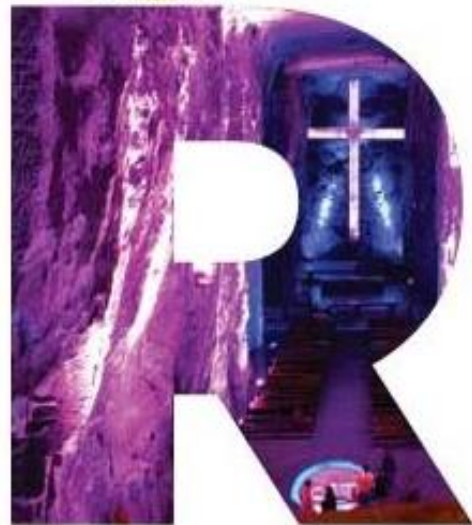


Modelo Conducente a la articulación
interacción y fortalecimiento de la
**Visión de Región y
planificación territorial**



**MODELO CONDUCENTE A LA
ARTICULACIÓN, INTERACCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA VISION DE
REGION Y PLANIFICACION INTEGRAL
MOAIR**



DICIEMBRE DE 2020

INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO I	13
GENERALIDADES.....	13
1.1. Antecedentes	13
1.2. Marco Normativo Existente	21
1.3. Principios Rectores	21
1.4. Objetivos Del Modelo	27
1.4.1 Objetivo General.....	27
1.4.2 Objetivos Específicos	27
1.5. Enfoques Estratégicos Para La Articulación Del Modelo	29
1.5.1. Enfoque territorial multiescalar	29
1.5.2. Enfoque poblacional	30
1.5.3. Enfoque de Derechos	31
1.5.4. Enfoque Institucional para la equidad	31
1.5.5. Enfoque integrado y planificado.....	32
1.6. Etapas Generales de Implementación del Modelo.....	33
CAPÍTULO II	35
ETAPAS	35
2.1. Etapa Preparatoria y de Adecuación de la Institucionalidad	35
2.1.1. Instancias y Actores Involucrados	35
2.1.2. Oportunidades y Amenazas para la Articulación del Modelo.....	41
2.1.3. Alistamiento Institucional	48
2.1.4. La Participación Ciudadana en la Construcción Colectiva del Marco Normativo Requerido para el Modelo de Articulación	54
2.1.5. Requerimiento Legal y Normativo.....	57
2.2. Etapa De Implementación y Operatividad Del Modelo.....	61
2.3. Etapa de Instrumentos y Mecanismos de Ejecución y Proceso de Financiamiento del Modelo	62
2.4. Etapa De Medición y Evaluación Del Modelo	62
CAPÍTULO III DIMENSIONES PARA LA OPERATIVIDAD E IMPLEMENTACION DEL MODELO.....	65
3.1. Dimensión de Sustentabilidad Ambiental.....	67
3.1.1. Política de Conservación de la Biodiversidad	69

3.1.2. Política de Restauración Ecológica	73
3.1.3. Política de Seguridad Hídrica Y Gestión Integral	76
3.1.4 Política de gestión integral de residuos	79
3.2. Dimensión de Equidad Sociocultural	82
3.2.1. Política de Identidad Cultural	83
3.2.2. Política de Vivienda y Hábitat	86
3.2.3. Política Educativa	88
3.2.4. Política Integral de Salud	91
3.2.5. Política del Deporte	93
3.2.6. Política de Equidad de Género	95
3.2.7. Política de Discapacidad.....	97
3.3. Dimensión de Productividad y Competitividad Económica	99
3.3.1. Política de Abastecimiento Agroalimentario.....	101
3.3.2. Política del Sector Primario (Agropecuario)	104
3.3.3 Política del Sector Secundario (Industrial)	107
3.3.4. Política del Sector Terciario (Servicios)	109
3.3.5. Política de Ciencia Tecnología e Innovación	111
3.4. Dimensión de Integración Territorial	114
3.4.1. Política de Planeación del Desarrollo Territorial	115
3.4.2. Política de Articulación Territorial	122
3.4.3. Política de Infraestructura y Equipamiento	125
3.5. Dimensión de Gestión Institucional y Gobernanza Multinivel.....	128
3.5.1. Política de Gobernanza Multiescalar	129
3.5.2. Política de Modernización y Fortalecimiento Institucional.....	133
3.5.3. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Regional	139
3.5.4. Política de Integridad	144
3.1.5. Política Integral de tratamiento de Riesgos en la Gestión	146
CAPÍTULO IV	150
DINÁMICAS SECTORIALES Y MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL PROCESOS DE FINANCIAMIENTO Y SU ADECUADA OPERATIVIDAD.....	150
4.1. Dinámicas Sectoriales.....	150
4.2. Patrimonio y Rentas del Modelo de Articulación y Asociatividad	157
CAPÍTULO V	164

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN.....	164
5.1. Control Interno	164
5.2. Control Político.....	166
5.3. Sistema de Monitoreo, Seguimiento Evaluación y Control.....	168
CAPÍTULO VI.....	172
RECOMENDACIONES	172
6.1. Generación de un Marco Normativo apropiado y debidamente reglamentado .	174
6.2. Generación de asistencia técnica para fortalecer la institucionalidad y la Gobernanza Multinivel	174
6.3. Vinculación y Armonización de la Academia al Desarrollo Regional	177
6.4. Creación del Sistema de Información y Seguimiento de la Asociatividad.	179
6.5. Delegación de Competencias al Nivel Regional y Provincial	180
6.6. Adecuación y Ajuste de la Figura Asociativa al MIPG	184
BIBLIOGRAFIA	185

INTRODUCCIÓN

El Modelo de Articulación e Interacción presentado en este documento, es un marco de referencia para organizar, dirigir, planear y evaluar el compromiso de los actores involucrados para el desarrollo armónico y estratégico, inicialmente de la provincia de Sabana Centro, y de manera modulada el avance hacia la integración de la región central del país, en especial, los municipios cundinamarqueses, el distrito capital de Bogotá y su área de influencia. De esta manera, se fortalece la visión regional con el fin de generar resultados que atiendan las necesidades y problemas de los ciudadanos con total integridad y excelente calidad de los servicios públicos, optimizando los recursos disponibles y articulando los municipios de Sabana Centro con la región metropolitana y esta con los departamentos circunvecinos, el país y el mundo.

El trabajo consiste en diseñar y establecer un modelo que brinde a través de la gestión pública, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Este, está estructurado por sus componentes y las relaciones esenciales entre los mismos, aprovechando los beneficios y oportunidades ofrecidos en el campo municipal, provincial, departamental, nacional e internacional, con el fin de vigorizar los vínculos entre los municipios de Sabana Centro y, de estos, con el Distrito Capital, la gobernación de Cundinamarca, los municipios aledaños, de Asocentro, las provincias cundinamarquesas y la Rape, con el objeto de garantizar productividad y competitividad en la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, que brinden calidad de vida a los pobladores que habitan el territorio.

Estamos inmersos en un territorio que enfrenta grandes retos, compartidos e interdependientes, y grandes dificultades con creciente déficit cuantitativo y cualitativo en materia de movilidad, de seguridad y convivencia, de vivienda social, de la reubicación parcial de la industria bogotana en los municipios de la Sabana que brindan incentivos perniciosos a nivel provincial; el rebosamiento y la desorganización y bajo mantenimiento de las vías locales y regionales. Una clara falencia para garantizar el abastecimiento de agua y manejo integral del ciclo hídrico para la región, un manejo inapropiado y no sostenible de los residuos sólidos. Alta contaminación y bajo saneamiento de la cuenca del río Bogotá, el proceso acelerado de conurbación en suelos agrícolas, la desprotección de la estructura ecológica principal, todos estos factores impactan negativamente en la calidad de vida de la población que habita el territorio, sumados a la carencia de una visión estratégica articulada que permita generar un desarrollo económico que fomente la productividad, la competitividad y la equidad de la región.

Desde otra óptica, la región central posee un potencial para generar un mejor nivel en la calidad de vida de los habitantes del país y de sus municipios, pues, acoge el 21,4 % de la población de Colombia con 9.949.894 de habitantes en 2016. Mueve alrededor del 31,6% de PIB del país, esta, es la región que presenta el mayor crecimiento (3%) (DANE, 2019). Se considera que contribuye en el 44,5% de las exportaciones nacionales y con relación a su potencial de los ecosistemas estratégicos posee 190 áreas protegidas y el 13% de los páramos del país. Adicionalmente, se estima que para el año 2030 contará de acuerdo con la tasa de crecimiento, con una

población de aproximadamente 12 millones de habitantes y, según las métricas de World Urbanization de la ONU, se consolidará como la metrópoli número 27 del mundo.

Por los motivos expuestos, se hace indispensable, inmediato e ineludible buscar un modelo de articulación e interacción que adecue el actual esquema de descentralización administrativa, fiscal y de asunción de competencias de los entes territoriales y que nos brinde la gobernanza integrada. Un ordenamiento regional articulado, que nos conduzca a unificar esfuerzos, que incite a la adhesión estable, planificada y coordinada, donde todos los actores involucrados del territorio trabajen colectivamente estos temas de interés supramunicipal y que este modelo proponga los mecanismos e instrumentos que hagan posible la gestión de un desarrollo sostenible generando un bienestar colectivo.

El modelo de apunta a resolver grandes problemas y a satisfacer las necesidades imperiosas y busca aprovechar el acoplamiento actual que brinda una plena disposición de la alcaldía del Distrito Capital, de los alcaldes Municipales, del gobernador del departamento de Cundinamarca, del Congreso de la República para un diálogo constructivo y de organización de esfuerzos comunes, que logre asegurar competitividad regional y conduzca planificada y organizadamente a crear y fomentar un clima de confianza en torno a un modelo regional construido colectivamente.

Para la programación y coordinación del modelo que permita un desarrollo sustentable, un desarrollo humano, un ordenamiento territorial y una racional prestación de servicios públicos, se requiere de una administración articulada, coordinada y planificada, que sea capaz de vincular entre sí las dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales, de movilidad

y tecnológicas. Que contribuyan a su operatividad, inicialmente de la provincia de Sabana Centro y luego su plena articulación con la región metropolitana.

Entre el conjunto de características que recoge el modelo en su concepción, se particulariza inicialmente en el análisis de las fortalezas y oportunidades es decir las potencialidades, capacidades y aspectos positivos, por un lado, así como de los errores, deterioros, incapacidades y adjetivos negativos por el otro, para poder corregir aquellas cuestiones identificadas como debilidades o amenazas al proceso de gestión pública que mejoren las condiciones de la calidad de vida, la productividad y el desarrollo humano integral en el territorio.

Para una adecuada construcción del Modelo de Articulación e Interacción Regional- MOAIR, y su representación artificial se empleó el método de la modelación, como instrumento de trabajo que supone una aproximación intuitiva a la realidad y, que tiene por función básica la de ayudar a comprender las teorías y las leyes. Adicionalmente, se utilizó, el enfoque sistémico. donde se proponen soluciones que han considerado los diversos elementos existentes y la relaciones que conforman las partes intervinientes de todo el sistema y el entorno del cual forma parte.

Este documento para la fácil comprensión del modelo se va a encontrar dividido en seis capítulos. En primera instancia, estarán las generalidades del Modelo con un balance sintetizado de los antecedentes de integración e interacción entre los municipios de la provincia de Sabana Centro y de estos con el departamento de Cundinamarca y con la ciudad capital, se indicará el marco constitucional y normativo que existe actualmente y que brinda los mecanismos para desarrollar el complemento

legal del MOAIR, se manifestarán y fijaran los enfoques y los principios rectores, el objetivo general y los objetivos específicos.

En el segundo capítulo, se describirán de manera general las etapas de implementación del Modelo, donde se hará énfasis en precisar los actores involucrados, en identificar y analizar las oportunidades y amenazas que comprometen la sostenibilidad de este, y que pueden contribuir o afectar negativamente la integración regional. Sumado a esto, se describirán la manera como se debe desarrollar el alistamiento institucional y legal requerido, los organismos de dirección e instancias, para que faciliten la construcción del modelo con el contenido estructural de una Ley que reglamentará la operatividad de la región y, una Ordenanza que facilitará la adopción de las provincias administrativas y de planificación dentro del departamento de Cundinamarca.

Dentro del tercer capítulo, se describirá la operatividad del Modelo, la forma de implementarlo con la clara adopción y desarrollo de las dimensiones operativas, sus políticas y estrategias en que se debe centrar para lograr un equilibrio dinámico entre estas dimensiones de la sustentabilidad que irrumpen en lo ecológico o ambiental, lo social y lo económico.

En cuarto punto se mostrará la necesidad de definir los posibles instrumentos, mecanismos, que consolidan la articulación como son aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman la figura asociativa e igualmente, se definirán las posibles

fuentes de financiamiento para ofrecer una mejor funcionalidad y una adecuada operatividad, describiendo las potenciales rentas y patrimonio.

En el capítulo quinto se describirá el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Modelo con el conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades, que tienen como finalidad velar por su operatividad, teniendo en cuenta, que es una construcción colectiva con la participación indispensable de la ciudadanía

Como resultado final se obtendrá algunas recomendaciones que facilitan la concepción del modelo, que permitirá articular armónicamente la gestión pública y la calidad de vida en función de los procesos que favorecen el desarrollo regional, así como la integración de los actores regionales.



Capítulo I

Generalidades

**MO
AIR**

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

La importancia de la ordenación del territorio es un concepto muy complicado que ha implicado muchas acciones que busca siempre la corrección del desequilibrio territorial y la localización espacial de las actividades humanas, pero esta disciplina de carácter técnico se ha visto abordada e intervenida de manera multidisciplinaria por las decisiones políticas y los elementos sociales, económicos y ambientales.

Es imprescindible que quienes tienen la responsabilidad de dirigir las organizaciones deben procurar adelantarse a los cambios futuros del entorno y diseñar planes y estructuras flexibles que permitan la adaptación, la innovación y enfrentar cualquier situación no prevista, sin olvidarse que no hay articulación territorial perfecta y ningún acto administrativo es capaz de anticiparse dentro de su normatividad a todas las posibilidades de conflicto o situaciones futuras por resolver, pero se debe generar un acercamiento a unas reglas de juego que permitan la construcción colectiva de un acuerdo sobre lo esencial para el desarrollo socioeconómico de la provincia y de la región.

Para el caso que nos ocupa la relación inicial de los municipios de sabana centro y de estos con Bogotá, con los municipios circunvecinos y con los demás municipios del departamento de Cundinamarca podemos apreciar que desde la constitución política de los estados unidos de Colombia sancionada el 8 de mayo de 1863, fue

creado el primer distrito en Colombia denominado “Distrito Federal de Bogotá”, organizado en pleno auge radical federalista, si bien dicha entidad existió pocos años (1861-1864) fue un precedente importante para el territorio que más tarde se vendría a configurar como distrito capital.

En el año de 1905 se reorganizó completamente la división territorial de Colombia y por medio de la ley número 17 del 11 de abril la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa de Colombia creó nuevamente el distrito con nombre Distrito Capital de Bogotá, y determinó en su articulado

“Erígese en Distrito capital que será administrado por el Gobierno nacional, el Municipio de Bogotá, por los límites que le señala la Ley 26 de 1883 del Estado de Cundinamarca. Autorízase al Gobierno nacional para disponer que la capital del Departamento de Cundinamarca se traslade fuera de Bogotá, a un lugar conveniente cuando aquél pueda comprar los edificios que hoy posee la Gobernación de este Departamento en la ciudad de Bogotá.

La capital del Departamento, en caso de salir de Bogotá, se trasladará a uno de los Distritos que queden más inmediatos a la línea de alguno de los ferrocarriles que parten de esta ciudad. Si el Gobierno juzga conveniente, podrá erigir en Distrito el barrio de Chapinero para el efecto indicado. Autorízase al Poder Ejecutivo para reglamentar, por medio de Decretos ejecutivos que tendrán fuerza legal, todo lo concerniente a rentas, contribuciones, policía, alumbrado, servicio de aguas, locomoción, aseo y ornato, y en general todo lo que correspondía a la ciudad de Bogotá como Municipio y como capital del

Departamento de Cundinamarca; y para construir los parques, paseos públicos y demás obras de interés general.

El arreglo de cuentas y de rentas entre la capital y el Departamento de Cundinamarca se hará entre el Ministro de Gobierno y el Gobernador. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la creación, ornato y administración del Distrito capital y el pago de los edificios públicos que pertenecen al Departamento de Cundinamarca”, pero la división generada fue derogada en 1910 y el distrito dejó de existir ese mismo año y Bogotá volvió a ser municipio de Cundinamarca.

En el Acto legislativo 1 de 1945 “Reformatorio de la Constitución Nacional” se planteó un régimen especial para la capital del país y se determinó

“El territorio nacional se divide en Departamentos, Intendencias y Comisarías; aquellos y éstas, en Municipios o Distritos Municipales. La ciudad de Bogotá, capital de la República, será organizada como un Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. La Ley podrá agregar otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital de la República, siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo Municipio”.

El 17 de diciembre de 1954 se expidió el decreto 3640 por medio del cual se organizó el municipio de Bogotá como distrito especial y por medio de la ordenanza número 7 del concejo administrativo de Cundinamarca se le anexaron los municipios aledaños de Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa. Surge entonces el

acuerdo 11 de enero 12 de 1954 y el consejo administrativo de Bogotá acuerda de conformidad con el artículo 9 del decreto legislativo 3640, que en cada una de las zonas correspondiente al territorio de los antiguos municipios, habrá un alcalde menor que dependerá en el orden administrativo del alcalde mayor del distrito y del secretario de gobierno, y que será el agente inmediato del ejecutivo municipal. Los Miembros de los Consejos Administrativos de los antiguos Municipios anexados a Bogotá constituirán Juntas consultivas de los respectivos Alcaldes Menores, y deberán dar su concepto sobre las determinaciones de la Administración Seccional, para lo cual se reunirán por lo menos una vez a la semana, bajo la presidencia del Alcalde Menor. Estas Juntas consultivas podrán también elaborar proyectos de Acuerdo, para que previa la aprobación del Alcalde Mayor del Distrito sean presentados por éste a la consideración del Consejo Administrativo.

Posteriormente el territorio de Sumapaz fue anexado en 1955, dando así la configuración final del distrito y fijando los planes y programas de obras públicas y de fomento; surgen con posterioridad varios actos administrativos tales como el decreto Nacional 3133 de 1968, por el cual se reforma la organización Administrativa del Distrito Especial de Bogotá, el Acuerdo 26 de 1972, por el cual se crean unas Alcaldías Menores, se reglamenta su funcionamiento y se autoriza al Alcalde Mayor para delegar funciones, el Acuerdo 07 de 1974, por el cual se crean las Alcaldías Menores de La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y se determinan y modifican unos límites, se les señala nomenclatura y se atribuyen algunas funciones, el Acuerdo 14 de 1983 por el cual se crea la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar y se modifican los límites de las Alcaldías

Menores de Tunjuelito y Bosa, señalados en el Acuerdo No. 8 de 1977, el Acuerdo 9 de 1986, por el cual se crea la alcaldía menor de Sumapaz.

En el departamento de Cundinamarca con el fin de estructurar la organización política administrativa y territorial para una mayor gestión institucional surge la ordenanza No. 024 del 28 de noviembre de 1990, creando las Asociaciones de Municipios de las cuales hoy solo subsiste la asociación de municipios de Sabana Centro – ASOCENTRO -, que viene cumpliendo con el objetivo de impulsar la solidaridad regional de los municipios, en aras de buscar y aunar esfuerzos y recursos, para prestación conjunta de los servicios públicos, obras de desarrollo y fomento a los habitantes.

Al surgir la nueva Constitución Política de Colombia en el año 1991, en el artículo 322 se declara la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de la República y del Departamento de Cundinamarca y se organiza como Distrito Capital, dando origen al Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, adicionalmente, en el artículo 325 se determina que con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental y con el fin de reglamentar este artículo surge la ley 128 de Febrero 23 de 1994 por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas.

Con el propósito de implementar la ley 128 del 1994 fueron múltiples los estudios y propuesta de organización del territorio de las cuales se pueden destacar en el año 1995 el estudio prospectivo de las relaciones de Santafé de Bogotá con Cundinamarca de la Misión Bogotá Siglo XXI, en el año 1996 el Plan Maestro de Transporte realizado por la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, para los años 1997 a 2000 los trabajos adelantados por la Sociedad Geográfica de Colombia en colaboración con la CAR.

Todos estos estudios emprendieron el tema de las relaciones de los municipios de la sabana y el distrito capital de Bogotá desde diferentes aspectos del urbanismo, produciendo importantes lineamientos que desafortunadamente no tuvieron integralmente la respuesta esperada a pesar de los múltiples ensayos entre los alcaldes de Bogotá y los alcaldes de los municipios circunvecinos pertenecientes al departamento de Cundinamarca pues se afectaba la autonomía municipal al integrarse en un Área Metropolitana pues la Constitución, dejaba la posibilidad de convertir en un “distrito metropolitano” y los municipios serían absorbidos por este distrito.

Se elabora en el año 2010 para la provincia de sabana centro con el apoyo técnico del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas –CEPEC de la Universidad del Rosario una agenda de proyectos transversales y sectoriales de impacto en el desarrollo socioeconómico de la provincia y, adicionalmente, se ocupa de hacer un ejercicio de balance competitivo en el que se identifican las fortalezas y las necesidades prioritarias con el fin de crear entornos atractivos para el desarrollo de la actividad productiva, generar nuevas inversiones, crear y consolidar empresas innovadoras que generen bienes y servicios con valor agregado, con énfasis en los

sectores económicos con mayor potencial de desarrollo y se muestran los resultados del proceso de construcción de la visión compartida del territorio, la definición de los ejes estratégicos, así como la identificación de los criterios de intervención que deben guiar las acciones del Plan de Competitividad en la provincia.

Cabe anotar que la ley 128 de 1994 no cumplió con su propósito de ordenamiento territorial y fue derogada por el artículo 42, Ley 1625 de 2013 que expidió el Régimen para las Áreas Metropolitanas, su objeto, naturaleza, competencias y funciones, pero siguieron las mismas condiciones que amenazaban la autonomía territorial y, adicionalmente, la necesidad de la consulta popular para el proceso asociativo no tuvo eco en los ciudadanos cundinamarqueses a pesar que con la ley 1993 de 2019 modificara el porcentaje de participación para la conformación de las áreas metropolitanas, reduciendo el porcentaje de participación a un cinco por ciento (5%) para aprobar la conformación de las áreas metropolitanas lo cual no ha facilitado la integración y asociatividad regional

Con la conformación del Comité de Integración territorial (CIT); a partir del año 2016 se viene dialogando en torno a la armonización de los POT y fortalecimiento de la competitividad, buscando mecanismos de cooperación en torno a los problemas comunes entre los distintos municipios circunvecinos y la ciudad capital, pero aún no llega a tomar decisiones trascendentales por no tener un marco jurídico vinculante.

Como se puede apreciar son diversos los esfuerzos que hasta ahora han abonado el proceso de coordinación y de adopción y ejecución de proyectos de interés común entre los municipios de sabana centro, con los municipios cundinamarqueses, el distrito capital y su área de influencia y, por tal motivo, surge en este momento una

nueva voluntad colectiva por parte de los parlamentarios de la región con una reforma constitucional que contribuirá para que los municipios que tienen dificultades para cumplir eficientemente con las competencias asignadas en el actual esquema de descentralización del Estado.

Por tal razón, ofrecen a través de los mandatos establecidos en el acto legislativo 02 de 2020 la posibilidad de alcanzar definitivamente la construcción de un modelo de articulación e integración que logre transferir las competencias a una entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, con el objeto de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, sin perder la autonomía, situación que nos conduce a generar y construir colectivamente las reglas de juego que permita la consolidación del modelo de asociatividad más efectivo para que brinde bienestar a la comunidad de la región y adicionalmente madurar el proceso de abajo hacia arriba con los mecanismos se brindan en la ley 1454 por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones que en su articulado promueve procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades y en especial el artículo 16 donde se determina la constitución mediante una ordenanza de una provincia administrativa y de planificación, esquemas que contribuyen a establecer una gobernanza multiescalar y con los cuales el modelo de articulación e interacción puede estructurar su operatividad y consolidación.

1.2. Marco Normativo Existente

01	LEY 99 DE 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.	02	LEY 128 DE 1994 Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas Ley derogada por el artículo 42 de la Ley 1625 de 2013.	03	LEY 134 DE 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
04	LEY 136 DE 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.	05	LEY 142 DE 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.	06	LEY 152 DE 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
07	LEY 388 DE 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones	08	LEY 617 DE 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.	09	LEY 715 DE 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros
10	LEY 819 DE 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones	11	LEY 1176 DE 2007 Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Sistema General de Participaciones.	12	LEY 1454 DE 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.
13	LEY 1625 DE 2013 Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas..	14	LEY 1962 DE 2019 Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C.P.	15	LEY ORGÁNICA 1993 DE 2019 Por la cual se modifica el porcentaje de participación para la conformación de las áreas metropolitanas.

ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2020 (julio 22) Por el cual se modifica el artículo 325 de la constitución política de Colombia y se dictan otras disposiciones.

Figura 1. Marco Normativo. Fuente: Propia del Autor

1.3. Principios Rectores

La relación simbiótica entre el modelo de articulación territorial y la Sociedad se hace presente en todas sus dimensiones y es fundamental para la garantía efectiva de los derechos de los asociados asumir los siguientes principios rectores:

ASOCIATIVIDAD. El modelo propiciará la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de

escala, generar sinergias y alianzas competitivas a las autoridades municipales con el fin de lograr objetivos de desarrollo económico y territorial, así mismo promoverá la celebración de contratos plan y alianzas público-privadas para el desarrollo territorial.

AUTONOMÍA. Los actores involucrados y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones en materia de articulación territorial para gestionar sus actividades en aras a cumplir con sus fines y con estricta sujeción a las atribuciones que a cada uno de ellos se les haya específicamente asignado en la Constitución y la Ley, así como el poder de dirección política, que le es atribuido a cada entidad por la comunidad a través del principio democrático.

COMPLEMENTARIEDAD. Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales dentro del modelo de articulación, las entidades territoriales y los actores involucrados podrán utilizar mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios.

CONCURRENCIA. Para el desarrollo oportuno de actividades y acciones conjuntas hacia un propósito que pretende el objetivo común de mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados el modelo busca plena armonización, gestión y ejecución promoviendo la colaboración y respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada uno de ellos.

COHERENCIA. Apunta a relevar la imprescindible articulación que debe existir entre los elementos o componentes del instrumento que se propone: visión, ejes, objetivos iniciativas o acciones, asumiendo una aproximación iterativa y no solo secuencial. Además de su coherencia interna, este principio orienta sobre la necesaria articulación

entre el Plan y los otros instrumentos aplicados a nivel regional, tanto sectoriales como del propio gobierno regional.

CONTRAFLUJO. Asociado al principio anterior, indica la necesidad de coordinación e intercambio de información para asegurar la coherencia entre la planificación estratégica regional y la planificación nacional, interregional y local: planificación multinivel.

CONFIANZA. La Nación, las entidades territoriales y la figura de integración territorial actuarán de buena fe y sin alterar súbitamente las reglas de juego que regulan sus relaciones y con los particulares, cuando se busque efectivizar otros principios que demanden aplicación y que, dada la importancia que revisten en el asunto, deben prevalecer para lo cual otorgarán un período de transición para que ajusten su nuevo comportamiento.

COORDINACIÓN. Para efectos de la implementación del modelo, los actores involucrados del orden nacional, departamental y municipal del sector privado y público deben ejercer todas las competencias delegadas de manera articulada y deben de certificar que existe armonía, interacción y coherencia con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política.

DESCENTRALIZACIÓN. Para la asunción y la distribución de competencias entre la Nación, entidades territoriales y demás esquemas asociativos el modelo facilitará el traslado del correspondiente poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el nivel territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se

promueva una mayor capacidad de planeación, gestión y de administración de sus propios intereses, garantizando por parte de los involucrados y el nivel central los recursos necesarios para su cumplimiento.

EFICIENCIA. La Nación, las entidades territoriales y el esquema de integración territorial que surge de este modelo garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales y propenderán por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de desarrollo de la región.

EQUIDAD. El modelo de articulación en cada decisión e intervención adaptará las reglas que se caracterizan por el uso de la imparcialidad con el fin de hacerlas más justas y para reconocer el derecho de cada uno de los asociados, utilizando la equivalencia para ser iguales.

EQUIDAD SOCIAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL. El modelo de articulación territorial reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que existen entre diferentes municipios del departamento y buscará crear instrumentos para superar dichos desequilibrios; por ello la nación y las entidades territoriales propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los desequilibrios enunciados. Así mismo, los procesos de ordenamiento procurarán el desarrollo equilibrado de las diferentes formas de división territorial.

GRADUALIDAD. La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades administrativas y de gestión de la entidad administrativa de asociatividad regional.

INTEGRACIÓN. El departamento, el distrito capital y los municipios ubicados en zonas comprometida en el modelo de articulación pueden adelantar programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del ambiente y el desarrollo productivo y social, que permita asegurar un enfoque estratégico integrado de planificación, ordenamiento territorial y decisiones presupuestarias claves y que al mismo tiempo asuma la multidimensionalidad del desarrollo.

PARTICIPACIÓN. Durante el proceso de discusión y adopción del modelo de articulación e interacción, las autoridades de la Nación, las entidades territoriales y actores involucrados velarán por que se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la constitución política y la ley.

REGIONALIZACIÓN. El modelo de articulación e interacción promoverá el establecimiento de provincias administrativas y de planeación , Regiones de Planeación y Gestión, Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y productivas enmarcándose en una visión del desarrollo hacia la descentralización y la autonomía territorial, con el fin de fortalecer; el desarrollo regional.

RESPONSABILIDAD. La Nación, las entidades territoriales y la figura de integración territorial que surge de este modelo de articulación asumirán las competencias a su cargo y deben de responder por sus actos y sus decisiones, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera de los entes territoriales, garantizando su manejo transparente.

SUBSIDIARIEDAD. La Nación, las entidades territoriales en la implementación del modelo de articulación e integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades que carezcan de capacidad técnica, de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias, garantizando una toma de decisión lo más cerca posible del ciudadano

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. Para posibilitar un desarrollo socioeconómico en armonía con el medio natural, el modelo de articulación deberá considerar en sus estrategias, programas y proyectos criterios que le permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental, para ello adoptará acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social; propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las oportunidades y beneficios de desarrollo; haciendo énfasis en lo rural y promover la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

1.4. Objetivos Del Modelo

1.4.1 Objetivo General

Lograr una articulación territorial armónica, ordenada y funcional que dirija la gestión pública al mejor desempeño institucional, garantizando una gobernanza multinivel que responda a la productividad, competitividad y sostenibilidad, al desarrollo socioeconómico equilibrado de la región, y al goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, mejorando las condiciones de la calidad de vida y el desarrollo humano integral en el marco de la legalidad y la integridad.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Generar un desarrollo integral y ordenado del territorio, aprovechando los beneficios y oportunidades ofrecidos en el campo supramunicipal, desde la academia, los diferentes actores públicos y privados, que permiten diferentes alternativas para el avance sostenible y el desarrollo equilibrado y articulado que mejoran las condiciones de la calidad de vida.
- Desarrollar las sinergias positivas con la utilización racional del territorio y articulando una gestión de conservación, protección y restauración de la estructura ecológica principal que contribuyen al bienestar, la calidad ambiental y al desarrollo para los seres vivos.
- Orientar y liderar la formulación del sistema de movilidad que atienda los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga en la región, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en el área rural, en el

marco de la interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior.

- Mejorar la cobertura y calidad en la prestación oportuna y eficiente de los servicios Públicos domiciliarios y los equipamientos regionales necesarios que brinden atributos a la ciudadanía que habita el territorio.
- Brindar un direccionamiento y planeación estratégica que responda al análisis del contexto externo e interno que afectan la capacidad, logrando mayores niveles de competitividad y productividad con excelentes resultados territoriales e interiorizarlas a todos los servidores públicos y actores involucrados.
- Concentrar la intervención supramunicipal en los ámbitos de mayor valor agregado que puedan aportar un encadenamiento del abastecimiento, el desarrollo rural de la región y la seguridad alimentaria, maximizando las relaciones de complementariedad.
- Planear, ejecutar y controlar la Calidad de la gestión pública y coordinación administrativa de las entidades asociadas, actores involucrados y organismos públicos, generando resultados de bienestar ciudadano, con integridad y calidad
- Promover espacios de participación ciudadana generando acciones de evaluación y mejoramiento del uso de los recursos disponibles que atiendan a las políticas de transparencia, integridad y racionalización del gasto público.

1.5. Enfoques Estratégicos Para La Articulación Del Modelo

Lograr la implementación del modelo es un desafío importante, pretendiendo combinar los elementos científicos, técnicos, políticos, propios del ejercicio de generación de conocimiento con el propósito fundamental, que este sea aprehendido por la ciudadanía y participe activamente en su construcción.

Definir el enfoque estratégico bajo una concepción multidimensional y multiescalar del desarrollo, es imperativo para orientar las decisiones y la asignación selectiva de recursos y así, alcanzar los objetivos propuestos. Lo cual implica, trascender la actuación sectorial del Estado y proponer un modelo de gestión y de relacionamiento con la ciudadanía corresponsable de su propio desarrollo; se pretende orientar los recursos disponibles a la ejecución de tácticas o actividades de alto horizonte que resulten en evidentes niveles de competitividad y productividad, destacando como base el enfoque territorial, integrado, ciudadano e institucional y las características metodológicas que guían el mismo.

1.5.1. Enfoque territorial multiescalar

Incorpora una mirada sustentada en el territorio, que permite reconocer la diversidad y especificidades de cada zona de la región. Las diferencias en términos de condiciones, potencialidades y oportunidades que existen entre los territorios urbanos y rurales, priorizando la ordenación de éste, a partir de las características del medio físico, del sistema productivo y sociocultural con el fin de orientar las políticas, la acción y la inversión de una manera equitativa, de tal forma que se minimicen los impactos

diferenciales y, se garantice la inclusión de todos los territorios en las dinámicas de desarrollo referidas al uso social que permitan abordar la problemática con un alto grado de análisis en términos de escala y nivel de detalle para lograr una gobernanza multiescalar.

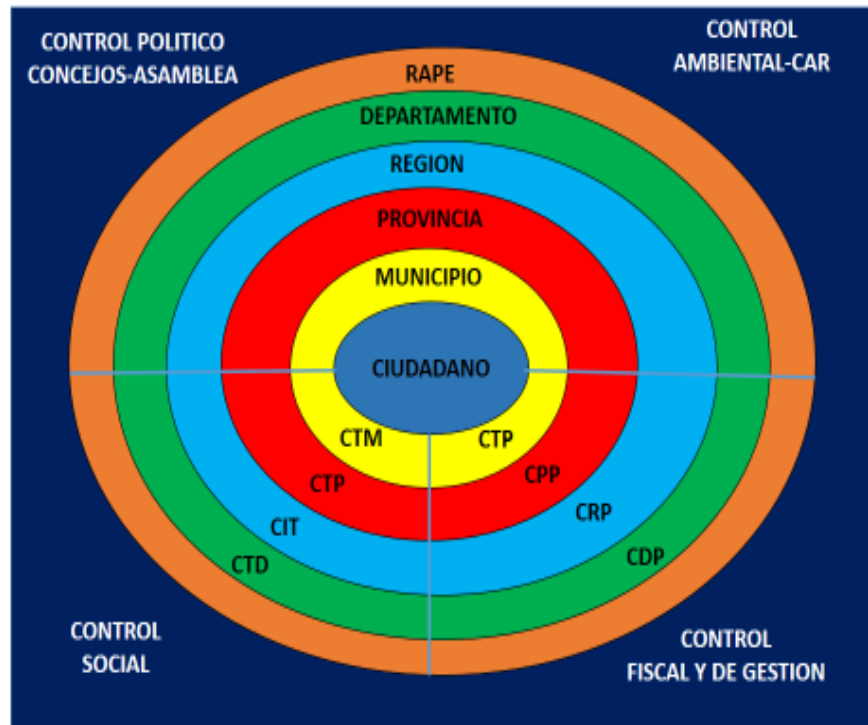


Figura 2. Gobernanza Multiescalar. Fuente: Propia del Autor

1.5.2. Enfoque poblacional

El modelo de articulación e interacción implica necesariamente, promover la equidad poblacional al reconocer diferencias por género, raza, etnia, credo, generacionales, orientaciones sexuales, por condiciones de discapacidad, situaciones de pobreza, desplazamiento, estructura general, las actividades humanas, el espacio en que se ubican, que indican condiciones y limitaciones diferenciales para acceder a

los beneficios del desarrollo y al sistema que entre ambos configuran, contando con la estrategia de abajo hacia arriba que promueve la participación, la apropiación y la corresponsabilidad de la población en la definición de su propio desarrollo.

1.5.3. Enfoque de Derechos

Para el modelo de articulación el enfoque de derechos implica un paradigma de desarrollo participativo, no discriminatorio, incluyente, que potencia a las personas en sus condiciones y capacidades, sujeto a rendición de cuentas, basado en derechos y libertades fundamentales, universales, inalienables indivisibles e interdependientes. Los derechos humanos de orden económico, social, cultural y ambiental considerados en las estrategias de articulación contribuyen a que las políticas públicas sean más efectivas. El respeto, la protección, la promoción y la realización de los derechos humanos son fundamentales para el bienestar general.

Los enfoques de derechos, poblacional y territorial son transversales en el modelo de articulación e interacción, y requieren de acciones de focalización que lideren y pongan en evidencia la necesidad de un cambio, desde las intervenciones uniformes hacia acciones diferenciales y específicas, es decir, que promuevan la equidad (reconocimiento de las diferencias) desde todos los ámbitos para lograr la inclusión.

1.5.4. Enfoque Institucional para la equidad

Garantizar el fortalecimiento institucional multinivel que permita a la administración regional ser gestora de su desarrollo en condiciones de equidad,

caracterizándose por el intercambio de conocimientos entre los equipos territoriales, a fin de generar una base de acuerdos respecto de las características y alcances del modelo y las herramientas metodológicas a emplear y la determinación y validación de la articulación, incorporando la cooperación técnica, la desconcentración de la gestión, el empoderamiento de comunidades y la implementación de sistemas de gerencia por resultados, como elementos esenciales para la consolidación institucional de los territorios.

1.5.5. Enfoque integrado y planificado

Aborda el sistema constituido, a su vez, por subsistemas integrados e interdependientes entre sí, con una gobernanza multiescalar respondiendo y fomentando la coordinación de acciones en diversos campos que evita la predisposición del estilo de desarrollo hacia el desequilibrio territorial; el conflicto entre interés público e interés privado, que conduzca la atención hacia definir y solucionar la manifiesta competencia entre sectores socioeconómicos y a la conflictividad entre interés local e intereses derivados de ámbitos superiores, a fin de resolver de modo acertado la problemática y adicionalmente aclarar la “imaginativa contradicción” entre conservación y desarrollo, y a sí mismo, verifique los patrones de consumo y comportamiento general de la población de la entidad regional.

1.6. Etapas Generales de Implementación del Modelo

Para la adecuada implementación del modelo se propone tomar como procedimiento cuatro etapas, tomando como marco los componentes del modelo. La primera es el alistamiento institucional y legal, la segunda las dimensiones de Implementación y operación del modelo, la tercera los instrumentos de ejecución y proceso de financiamiento del modelo y, por último, la cuarta etapa de medición y evaluación del modelo; las cuatro etapas por su complejidad serán desarrolladas en capítulos independientes.

Figura 3. Etapas de MOAIR. Fuente: Propia del Autor



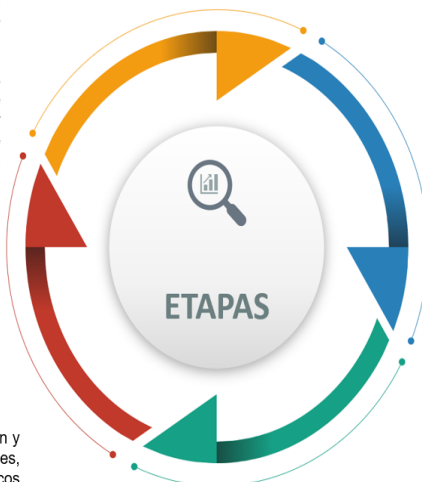
04 - MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

Se brindan a todos los actores los mecanismos, instrumentos y procedimientos para realizar periódicamente el control y la medición del desempeño institucional; el avance de las dimensiones y políticas, el grado de orientación de la entidad hacia la eficacia, la eficiencia y calidad en todos los objetivos, productos y/o servicios. También, si están respondiendo a las necesidades y problemas de las comunidades haciendo que de manera inmediata, después de tener los resultados del control y la medición, se diseñen e implementan acciones concretas de mejora que permitan aumentar la efectividad de la gestión para alcanzar mejores resultados



03 - INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE EJECUCIÓN Y PROCESO DE FINANCIAMIENTO

Es fundamental en esta etapa los criterios para la identificación y formulación de aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el modelo de articulación. Lo mismo que se identifican los mecanismos de financiación y los recursos de los que dispone el hecho sectorial y la figura asociativa para la financiación de su actividad, provienen básicamente de dos fuentes: las internas, que se refieren al capital que posee la figura asociativa y que toma de su propio patrimonio, y las externas, aquellas otorgadas por terceros, quienes a través de diferentes figuras jurídicas facilitan el acceso al capital requerido.



01 - PREPARATORIA Y DE ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD



Para esta primera etapa de la implementación del modelo se deben de identificar los actores involucrados y generar el conjunto de instancias que trabajen coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías y así, de esta manera el modelo marche y logre sus objetivos.

02 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL MODELO



Las entidades y actores involucrados para implementación de esta etapa deben operar el conjunto de las 5 dimensiones del modelo y las 24 políticas de gestión y desempeño institucional que, ejecutadas y realizadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el modelo de articulación e interacción regional MOAIR funcione.



CAPÍTULO II

ETAPAS

2.1. Etapa Preparatoria y de Adecuación de la Institucionalidad

Para esta primera etapa de la implementación del modelo, se deben de identificar los actores involucrados y generar el conjunto de instancias que trabajen coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías y así de esta manera el modelo marche y logre sus objetivos; a continuación, se presenta el contenido de cada subetapa y la forma que estas deben articularse.

2.1.1. Instancias y Actores Involucrados

En esta subetapa o segmento de la etapa preparatoria, se pretende la identificación de los actores involucrados en el modelo quienes tienen un interés (directo o indirecto) en el proceso de establecimiento del modelo de articulación o que pueden ser afectados positiva o negativamente por la ejecución y resultados del mismo. Estos actores pueden pertenecer a municipios, agencias, organizaciones, instituciones, grupos o individuos que influyen o controlan las decisiones, obstaculizan o facilitan la ejecución del modelo, que pueden ejercer influencia positiva o negativa sobre la planificación e implementación del modelo y adicionalmente logran persuadir o forzar a otros en la toma de decisiones para lograr un cierto curso en la acción.

Adicionalmente los actores involucrados son muy relevantes para la implementación del modelo, pues intervienen directa e indirectamente en el proceso de entrega de los bienes y servicios y tienen opinión y posición frente al modelo de

articulación, ya que se enfrentarán a situaciones que los benefician, es decir, a aspectos del entorno que pueden ayudarlos a conseguir sus metas o factores que los perjudican, influyen o afectan y van a suponer un obstáculo para lograr sus objetivos.

El modelo para involucrar a sus actores requiere una hélice cuádruple (4H) con un análisis profundo de sus características y un conjunto de elementos e interacciones, montados de forma concéntrica y solidaria en un eje que es el bienestar colectivo de la sociedad.

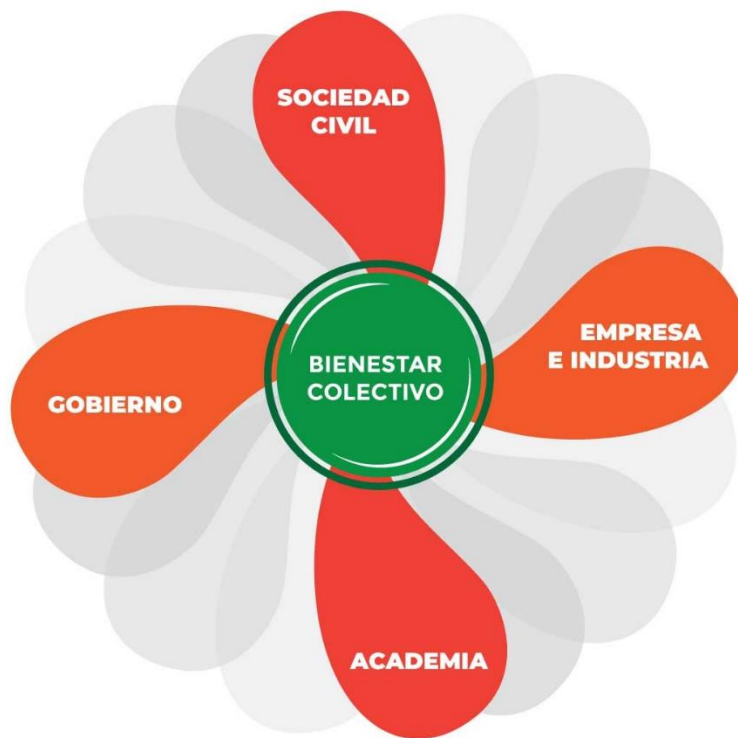


Figura 3. Sistema 4H. Fuente: Propia del Autor con base en la propuesta de la Universidad do Minho de Portugal.

Se caracteriza el modelo en una fuerte creencia en el poder de la articulación, cooperación y creación entre los actores involucrados en cada una de las hélices pues es un requisito previo para lograr estar en la vanguardia de un desarrollo sostenible a

través del modelo que sea capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

El sistema 4H para el modelo planteado, se sustenta a partir de trazado por (Yawson, R.M. 2009:9) citado en (Canales, 2017, pág. 207) donde expone:

“La triple hélice del estado, la universidad y la industria está perdiendo una cuarta esfera esencial: lo público. (...) La inclusión de la cuarta hélice se vuelve crítica, ya que el conocimiento científico es también evaluado por su robustez social y la inclusión que genera. (...) La cuádruple hélice forma parte de la etapa final de la estructura, debido a la necesidad de incluir lo público en el sistema de innovación”

Así mismo, para el Grupo de Investigación en Políticas Económicas de la Universidad do Minho de Portugal, el sistema de la cuádruple hélice debe estar compuesto por **la Academia, las empresas, los gobiernos y la sociedad civil.**

Es claro entonces que, a partir del entendimiento de las relaciones entre estos actores, sus sinergias, intereses y aportes, el Modelo de Articulación e interacción Regional-MOAIR, debe ser conducente al desarrollo integral de quienes lo adoptan, a la generación de redes de trabajo, innovación colaborativa, la innovación social, y la cooperación en todos sus ámbitos; en un estadio superior al tradicionalismo de Modelos de esta línea, el MOAIR bajo las anteriores premisas relega a un costado la disyuntiva teórica de los conceptos: exógeno-endógeno y se hace un planteamiento holístico, dinámico pero bajo la autonomía y respeto por la interdependencia de sus actores.

Finalmente es importante señalar que, para la activación y puesta en marcha de la 4H como motor del MOIAR, se deben apropiar y ejecutar los conceptos establecidos por Etzkowitz y Leydesdorff citado en (Canales, 2017, pág. 12), en relación con los requisitos previos a la ignición del sistema, a saber:

- a) Como paso previo, definir el paradigma de desarrollo integral.*
- b) En primer lugar, detectar las lagunas existentes en los modelos actuales de triple y cuádruple hélice (centrada en el consumidor).*
- c) En segundo lugar, definir la comunidad como esfera, al mismo nivel que estado, mercado y academia.*
- d) En tercer lugar, explorar las posibilidades de hibridación que ofrece el nuevo modelo y su correspondiente comprobación empírica.*
- e) Además, como un cuarto punto añadido, se consultará a expertos en desarrollo e innovación social, para validar el nuevo modelo”.*

En esta parte de este capítulo se debe precisar los actores involucrados de cada una de las hélices, su interés, su rol, los hechos y circunstancias, que tienen que ver con su problema y que requieren de una aclaratoria o solución, para poder lograr un objetivo.

Para ello, se propone un análisis del modelo de cuádruple hélice articulado en tres grandes ejes estructura, proceso y resultado:

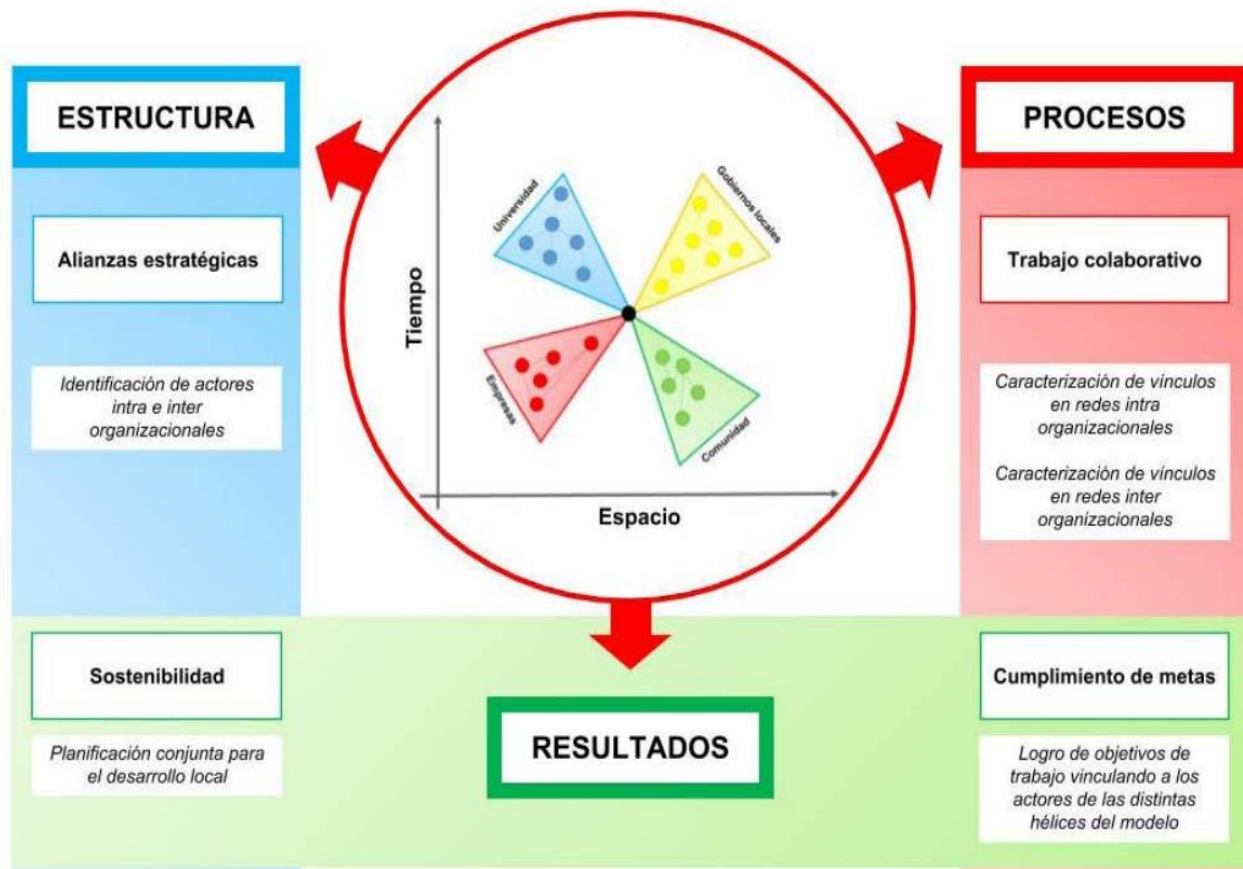
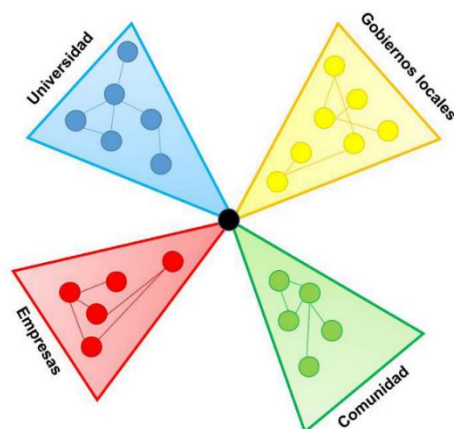


Figura 5. Estructura de la 4H. Tomado de (Rivera & Alfaro, 2018, pág. 27)



Estructura de la 4H. Tomado de (Rivera & Alfaro, 2018, pág. 27)

El eje de estructura, está compuesto por las alianzas estratégicas, presentes en toda la 4H, y que son los acuerdos establecidos por las partes de cara a lograr los objetivos en común deseados, donde a su vez, se alcanzan las expectativas de cada parte en cuanto a sus objetivos particulares. Es necesario aquí, tener presente la elaboración de planes de acción para determinar el uso de los recursos que conlleven a la materialización de altos niveles de Ventaja Competitiva del MOAIR. Es imprescindible en este segmento la identificación de los actores tanto intra como interorganizacionales.

El eje de procesos conlleva el trabajo colaborativo y a la innovación colaborativa como premisas a implementar. Por ello, el análisis y estudio de las relaciones, incluyendo las relaciones de poder y sus vínculos en las redes intraorganizacionales e interorganizacionales. En esta parte del proceso, se requiere profundizar sobre los vínculos de las redes existentes dentro de cada una de las hélices y determinar los lazos entre ellas.

Lo dicho conduce a poner en el análisis las predominancias de algún actor y los grados de influencia de cada uno de estos y, así pues, entender comprender cómo son las vías y características de la de interacción dentro del trabajo cooperativo.

En el eje de resultados, se observan dos variables: sostenibilidad y cumplimiento de metas. La primera para que sea comprendida desde la necesidad de conservarse y prolongarse en la línea del tiempo, para ello los ejercicios de planificación conjunta (con todos los actores) y frecuente evaluación son, de tajo, sus principales herramientas.

Una vez se ejecute esta sección de la estructura de la 4H, serán factibles como consecuencias directas y fluidas estarán per se, el logro de los objetivos y la satisfacción del desarrollo del MOAIR.

2.1.2. Oportunidades y Amenazas para la Articulación del Modelo

Identificar y analizar las oportunidades y amenazas que comprometen la sostenibilidad del modelo y que pueden contribuir o afectar negativamente la integración regional, en primera media, se realizó análisis y sustracción de información contenida en el documento Ocupación económica y planificación territorial de Bogotá y la Región vida ampliada de Cundinamarca. Bases para un modelo de ocupación económica territorial (MOET), construido por Cámara de Comercio de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Cámara de Comercio de Facatativá, Universidad del Rosario y Secretaría de Planeación de Bogotá hacia el 2016.

Este documento consta de 4 capítulos, a saber:

- **Marco estratégico.** Compila los elementos de referencia que fundamentaron la elaboración del documento;
- **Territorio de la economía de Bogotá y la Región Vida ampliada.** Plantea el enfoque y el análisis de la actividad productiva de Bogotá y la Región Vida ampliada, y su interacción con los principales elementos que estructuran el territorio;
- **Modelo de Ocupación Económica Territorial (MOET) de Bogotá y la Región Vida ampliada.** Aquí se propone la trayectoria de desarrollo en el territorio que debe seguir la región y muestra la localización de las actividades económicas en concordancia con los principales elementos.

- **Lineamientos de Ordenamiento Territorial y recomendaciones para la implementación del MOET.** Es en últimas una propuesta de las decisiones de ordenamiento territorial necesarias para el éxito del modelo y su implementación.

El documento hace una propuesta para 20 municipios del Departamento de Cundinamarca y, en su inicio plantea los resultados del análisis integrado de estrategias institucionales que componen (según el documento) 12 apuestas sectoriales que responden a criterios de afinidad productiva de la región.



Figura 6. Identificación de apuestas sectoriales estratégicas para Bogotá y los 20 municipios de la Región Vida ampliada en Cundinamarca. Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá; Universidad del Rosario; Gobernación de Cundinamarca; Alcaldía de Bogotá, 2016, pág. 32)

Es importante aclarar que, las 12 apuestas sectoriales muestran una línea conductora sobre la vocación de los territorios, basado en las fortalezas existentes, la capacidad instalada y las ventajas competitivas de los municipios.

Este documento, es un importante insumo para ser tenido en cuenta en ejercicios de planificación territorial, toda vez que, es una compilación muy precisa de información de carácter estratégico para la toma de decisiones en lo que se busca con el MOAIR.

El documento establece el concepto de la Región Vida ampliada-RV, como los nodos de desarrollo e instaura unas vocaciones con potenciales previos a seguir impulsando en cuatro (4) zonas y cuatro (4) nodos de aglomeración estratégica para las 12 apuestas sectoriales (descritas en la figura 6); en lo referente a las zonas identificadas en los municipios de la Región Vida ampliada se les asigna el nombre estándar de 'Zona RV'.

Para el caso de la Sabana Centro, cuenta con la identificación de la Zona RV Norte, Zona RV Nororiental y RV Nod empresarial Zipaquirá (Ver Figura 7)

La Zona RV Norte. Se inicia al noroccidente de Bogotá en la salida de la ciudad por la Autopista Norte. Cuenta con la presencia de altas densidades empresariales, fundamentalmente en el municipio de Chía y con extensión hasta Cajicá. Cuenta con aglomeraciones de unidades productivas vinculadas con 9 de las 12 apuestas sectoriales: Agropecuario-agroindustrial; Construcción y energía; Turismo y eventos; Salud; Servicios empresariales; Tecnologías de la información y las comunicaciones; Educación e investigación; Región sostenible; y Transporte y logística. (Cámara de

Comercio de Bogotá; Universidad del Rosario; Gobernación de Cundinamarca; Alcaldía de Bogotá, 2016, pág. 40)

Zona RV Nororiental. Ubicada también en el ámbito de influencia de la Autopista Norte, que comunica con Tunja, fundamentalmente en el área de influencia de los municipios de Sopó y Tocancipá, y que empieza a ampliarse sobre el mismo eje hasta el municipio de Gachancipá. Cuenta con aglomeraciones de unidades productivas vinculadas con 4 de las 12 apuestas sectoriales: Agropecuario-agroindustrial; Construcción y energía; Químicos; y Transporte y logística. (Cámara de Comercio de Bogotá; Universidad del Rosario; Gobernación de Cundinamarca; Alcaldía de Bogotá, 2016, pág. 40)

Nodo empresarial Zipaquirá. Aquí se generan procesos de articulación de escala regional con municipios del resto de Cundinamarca (con mayor diversidad de actividades productivas vinculadas a las 12 apuestas sectoriales en el caso del segundo de dichos municipios) (Cámara de Comercio de Bogotá; Universidad del Rosario; Gobernación de Cundinamarca; Alcaldía de Bogotá, 2016, pág. 40)

En el mismo documento se establece:

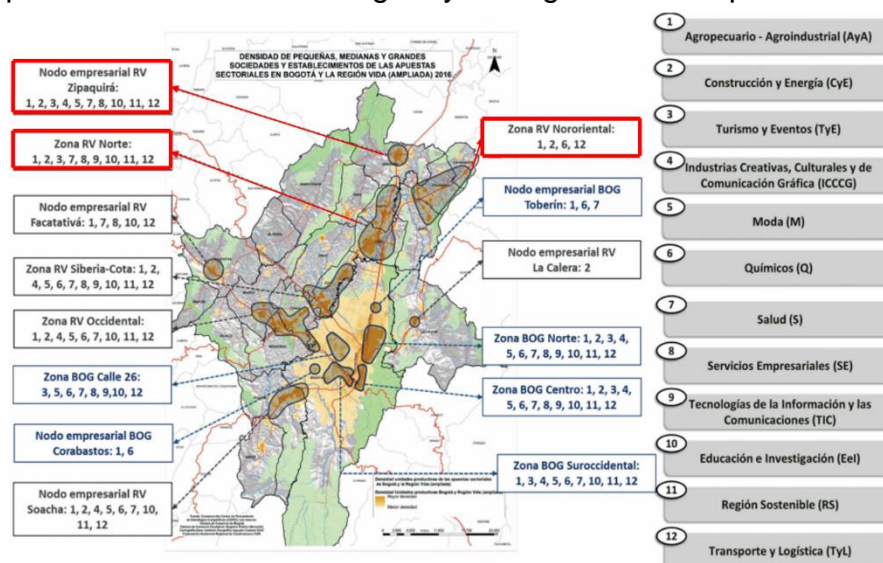
La caracterización de las 12 apuestas sectoriales de Bogotá y la Región Vida ampliada es desarrollada con base en su localización general, tendencia a la aglomeración en el tiempo, localización según eslabón productivo, así como en su densidad espacial el territorio. Dentro de las 12 apuestas se destacan: Construcción y Energía so, Servicios

Empresariales y Agropecuario-agroindustrial; ellas cuentan con la mayor cantidad de unidades productivas con presencia en el territorio

Es claro entonces que, Chía y Zipaquirá, para constituyen el Eslabón productivo, Insumos, transformaciones propias de la apuesta y comercialización, no obstante, en la Sabana Centro hay alta presencia de unidades empresariales pequeñas, medianas y grandes de la apuesta sectorial Construcción y energía.

Sin embargo, el lector puede observar los recuadros resaltados en la figura 7, a simple vista, es notorio la potencia de desarrollo de la Sabana Centro, donde aglomera prácticamente las 12 apuestas transversales iniciando con grandes actividades de del sector agropecuario, la construcción y energía, el turismo, las industrias creativas, Moda, químicos, salud, servicios empresariales, Tic, Educación, región sostenible y transporte y logística.

Figura 7. Articulación entre zonas y nodos de aglomeración estratégica con cada una de las apuestas sectoriales de Bogotá y la Región Vida ampliada



Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá; Universidad del Rosario; Gobernación de Cundinamarca; Alcaldía de Bogotá, 2016, pág.42)

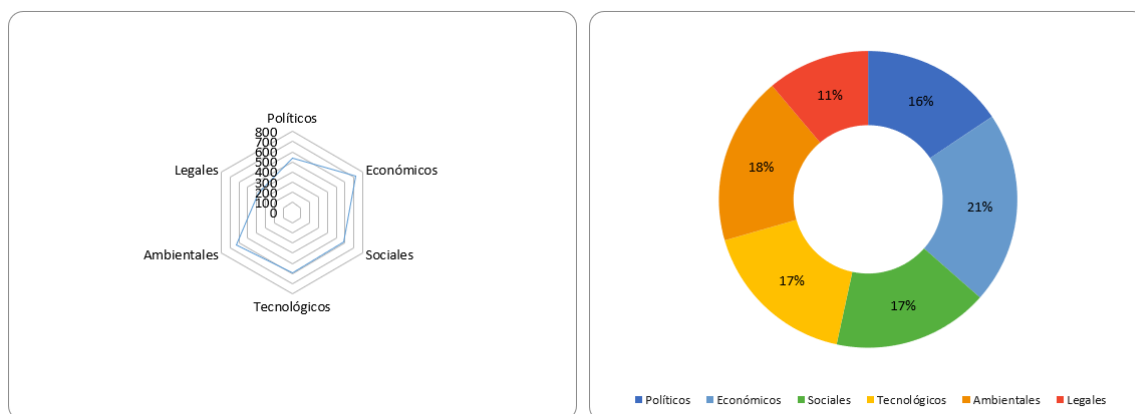
En segundo lugar, se hizo la ampliación del análisis con matriz de PESTEL. Herramienta utilizada en el MOAIR para analizar y monitorizar los factores macro ambientales (entorno del externo) que pueden tener un impacto en el Modelo.

Como resultados (ver tabla 1), dentro de las seis variables, predominan en su orden: Económico, ambiental, Tecnológico, social, Político y legal. Es importante realizar la lectura de la matriz PESTEL (Tabla 2). Allí se identifican los factores más predominantes resultado del análisis, para ello la herramienta (ya formulada) elige los cinco factores de los propuestos y se dispone en mecanismo de calcificación cualitativa en tres criterios: Importancia, Intensidad y Tendencia

Tabla 1. Análisis general de los factores PESTEL

Políticos	16%	536
Económicos	21%	718
Sociales	17%	580
Tecnológicos	17%	589
Ambientales	18%	630
Legales	11%	382

Figura 8: Dashboard PESTEL.



Fuente: Propia

Tabla 2. Matriz PESTEL

Factores Políticos (P)		Factores Económicos (E)		Factores Sociales (S)	
Top 5 Factores Políticos	Puntaje	Top 5 Factores Económicos	Puntaje	Top 5 Factores Sociales	Puntaje
Falta de articulación de los planes de desarrollo y POT	100	Mayor coordinación con las políticas económicas de nivel regional y nacional	100	Visibilizarían de la memoria viva y de la participación de la ciudadanía en la construcción de identidad	75
Necesidad de impulso de mecanismos asociativos de planeación y gestión	80	Desarrollo de políticas equitativas de transformación productiva	80	Recreación, actividad física y deporte como mecanismos que redunden en la felicidad de los habitantes del territorio.	75
Apropiación normativa y generación de leyes, ordenanzas y acuerdos consistentes con el modelo	80	Implementación de modelos y políticas de cooperación, transformación y asociatividad de la mano de la ciencia, tecnología e innovación para el campo	64	Vivienda y hábitat a partir de la cultura del territorio.	60
Orientación de decisiones pensando en la articulación e integración	64	Equilibrio de las políticas fiscales y tributarias de los municipios que generen recursos para el fortalecimiento de las debilidades de los territorios	64	Educación como elemento transversal para el mejoramiento de la calidad de vida de la región	50
Fortalecimiento de la gobernanza multiescalar	64	Equilibrio de políticas regionales de empleo decente	50	Prestación integral del servicio de salud en todos los rincones de los municipios de Sabana Centro, maximizando los recursos con los que cuenta la región.	50
Factores Tecnológicos (T)		Factores Ambientales (A)		Factores Legales (L)	
Top 5 Factores Tecnológicos	Puntaje	Top 5 Factores Ambientales	Puntaje	Top 5 Factores Legales	Puntaje
Establecimiento de políticas promoción y generación de Ctel en todos los niveles de la sociedad.	125	Reevaluación del sistema actual de movilidad entre los territorios de manera endógena y exógena, y la proyección hacia sistemas sostenibles articulados de transporte público y equipamientos que redunden en la mejora de la prestación del servicio.	125	Fortalecimiento de instrumentos que brinde calidad en las competencias de los servidores públicos	80
Armonización en los municipios de integran el modelo de lineamientos de Ciencia, Tecnología e Innovación.	80	Desarrollo de políticas de armonización entre la productividad del campo y la sostenibilidad del medio ambiente	125	Falta de mecanismos e instrumentos que afiancen la seguridad jurídica de los municipios partícipes del Modelo	75
Vinculación del sector empresarial en la investigación, diseño, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento.	80	Necesidad de establecimiento de un centro disposición de residuos sólidos desde la mirada de la CTeI y la vanguardia de la sostenibilidad.	100	Carencia de normas que consoliden la estructura de los modelos de esquemas asociativos territoriales	75
Establecimiento de parámetros y estrategias que conduzcan a la apropiación social de la CTeI.	80	Modelos de restauración ecológica involucrando la pedagogía y la acción participativa en todos los niveles de la sociedad	80	Necesidad del establecimiento de instituciones de observancia, y análisis de y participación ciudadana en el control Social de la gestión	64
Establecimiento de las capacidades del ecosistema y los indicadores del CTeI en el territorio.	80	Comprensión de la riqueza natural como parte del patrimonio y de los activos de la sociedad.	64	Adecuado control político para la gestión institucional	48

2.1.3. Alistamiento Institucional

Ya establecidos los actores involucrados y definido su interés de asociatividad las entidades implicadas en establecer el modelo deben organizar un consejo directivo y operativo encargado de la gestión e implementación del modelo de articulación e interacción regional, este debe de estar conformado por los altos cargos como el gobernador departamental , los alcaldes interesados y los directores de las asociaciones de municipios o directores de las provincias administrativas y de planificación de la jurisdicción departamental.

En cada entidad territorial que demuestra su interés en pertenecer a la entidad administrativa asociativa se debe contar con un equipo técnico de trabajo para lo cual expedirá un acto administrativo, mediante el cual se integra el Comité técnico de articulación territorial y debe tener en cuenta cuáles son sus integrantes y cuáles son las funciones que debe cumplir este Comité, de carácter municipal, provincial y departamental. A continuación, se presenta un modelo decreto para tales fines:

Nota 1: Modelo de Decreto municipal.

DECRETO No. XXX

(XX de XXXXXX 20XX)

POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ESTABLECER UN MODELO DE ARTICULACIÓN E INTERACCIÓN REGIONAL.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE (_____), CUNDINAMARCA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 315 NUMERAL 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY 136 DE 1994, LA LEY 489 DE 1998, LA LEY 617 DE 2000, LA LEY 872 DE 2003, LA LEY 909 DE 2004.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia fue modificado por acto legislativo 02 de 2020 donde el distrito capital, la gobernación de Cundinamarca y los municipios de Cundinamarca podrán asociarse a la región metropolitana, cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas.
2. Que la Ley 136 en su artículo 5 define el principio rector de la asociatividad para las autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo económico y territorial, propiciaran la formación de asociaciones entre las entidades territoriales que instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias, y alianzas competitivas.
3. Que la ley 136 en su artículo 148 define la asociación de los municipios como dos o más municipios de uno o más departamentos podrán asociarse para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, procurando eficiencia y eficacia en los mismos, así como el desarrollo integral de sus territorios y colaborar mutuamente en la ejecución de obras públicas.
4. Que de acuerdo con lo señalado en el literal a) del numeral 1° del Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, es facultad del Gobierno, en relación con el Concejo Municipal, presentar los Proyectos de Acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del Municipio.
5. Que la Ley 152 en su artículo 31 define el alcance de la planeación en las entidades territoriales, como autónomos en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la constitución y la ley.
6. Que el artículo 15 de la Ley 489 de 1998 establece que con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo.
7. Que para lograr la mejor decisión de la Organización Municipal se hace necesaria desarrollar dentro del Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración estipulada en la Ley 872 de 2003 grupos multidisciplinarios que analicen y presenten iniciativas de organización.
8. Que la ley 909 de septiembre 23 de 2004, "Por la cual se expiden las normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones", rige el sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.
9. Que la Ley de Participación Ciudadana es el instrumento mediante el cual se orientan los diferentes esfuerzos que desde la Constitución de 1991 se han venido desarrollando para lograr una democracia más incluyente, efectiva e incidente.
10. Que en párrafo transitorio 2 del acto legislativo de 2020 que modifica el artículo 325 de la constitución política se establece que a través de Una Ley Orgánica se debe definir el funcionamiento de la Región Metropolitana.
11. Que el artículo 2 de la ley estatutaria 1757 de 2015 establece que todo plan debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad.
12. Que en razón con lo señalado en el Acuerdo Municipal No. (____) de (____) que adoptó el plan de desarrollo (____) se estableció en el Eje (____).
13. Que dentro del eje (____) se crea en el programa de (____).

14. Que el municipio de (_____) está interesado establecer un modelo de articulación e interacción regional, con el objeto de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo.
15. Que es deber del municipio dentro del procedimiento y las condiciones de articulación e interacción regional, promover e incentivar la Participación Ciudadana bajo ejercicios permanentes de difusión, promoción y garantía al derecho a participar.
16. Que el municipio de (_____) Cundinamarca, debe socializar el proceso para tomar la decisión de establecer un modelo de articulación e interacción regional, y aunar sus esfuerzos para optimizar la gestión social y el desarrollo comunitario dentro del ámbito de la eficiencia administrativa.
17. Que la prestación y atención del servicio público, amerita la estricta aplicación de criterios de eficiencia como especialidad, oportunidad, austeridad y en general el desarrollo de una gestión pública orientada a resultados, dentro de los postulados consagrados en la Constitución, en las leyes y en especial los adoptados en el Plan de Desarrollo Municipal.
18. Que de acuerdo con las normas que rigen, regulan y orientan la prestación del servicio público, en el municipio se hace necesario realizar un proceso de socialización tendiente a la articulación e interacción con el Distrito Capital, municipios aledaños y la RAPE.
19. Que es deber del municipio el fortalecimiento de la visión de región y la planificación integrada en temas ambientales, de conectividad, CTel, movilidad, dinámica económica, servicios públicos y calidad de vida y el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo en estricta armonía con las disposiciones legales vigentes.
20. Que es necesario crear un director del proceso de socialización tendiente a la articulación e interacción con el Distrito Capital, municipios aledaños y la RAPE y un equipo técnico que soporte las decisiones del proceso.

Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de (_____),

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Créase el **COMITÉ MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN REGIONAL**, como Mecanismo institucional de la Administración Municipal de (_____) de carácter técnico asesor de la Alta dirección en temas de integración, cooperación y acercamientos interinstitucionales en materia del orden regional.

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVOS DEL COMITÉ. Son objetivos del Comité Municipal de integración regional.

1. Trazar, de conformidad con lo previsto en el Plan de Desarrollo del Municipio de (_____), un modelo de articulación e interacción con el Distrito Capital, municipios aledaños y la RAPE.
2. Fortalecer la visión de región y la planificación integrada en temas ambientales, de conectividad, Ctel, movilidad, dinámica económica, servicios públicos y calidad de vida.
3. Fomentar la coordinación, articulación, y seguimiento del modelo de articulación e interacción regional establecido frente a las acciones desplegadas a nivel nacional y departamental.

4. Promover el desarrollo económico bajo principios de productividad, competitividad, rentabilidad, inclusión y sostenibilidad, impulsando el emprendimiento, la economía naranja, la sostenibilidad, y empleo.
5. Promover la participación ciudadana generando y coordinando los espacios de encuentro que permiten, conocer sus inquietudes, y procedimientos para que sean incorporadas en el proceso articulación e interacción regional.
6. Identificar, determinar y priorizar los programas y proyectos que faciliten la integración regional y la planeación armónica del desarrollo autónomo y sostenible del municipio.

ARTÍCULO TERCERO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: El comité Municipal integración regional se regirá bajo los principios de:

Autonomía: La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la presente Ley orgánica

Equidad: Permitiendo la participación, el acceso y socialización del conocimiento a toda la sociedad, con el fin de fomentar, desarrollar y fortalecer el modelo de integración regional.

Transparencia: Actuar en todo momento sin interés particular alguno al momento de asesorar o hacer seguimiento a la adopción y ejecución de programas, metas y proyectos asociados al Plan de Desarrollo Municipal.

Coordinación: Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de las entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo

Desarrollo armónico de las regiones: Los planes de desarrollo propenderán por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de desarrollo de las regiones.

Moralidad: Actuar con rectitud, lealtad y honestidad.

Ordenación de competencias: En el contenido de los planes de desarrollo se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.

Participación: Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley.

Transparencia: Las decisiones debatidas y adoptadas deben ser de completo alcance a la comunidad.

Viabilidad: Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder.

Responsabilidad: Los servidores públicos asumirán las consecuencias de su actuación administrativa.

ARTICULO CUARTO. ENFOQUES. El comité Municipal integración regional se basará bajo los enfoques de:

Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias⁹. Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, (WCED, 1987) citado en (Gallopín, 2003, pág. 23).

Género Es una categoría que permite describir y analizar las diferencias y desigualdades que existen entre hombres y mujeres en una sociedad determinada, las cuales se manifiestan en asimetrías de poder y en la inequidad en el acceso a recursos y oportunidades ¹¹ (Observatorio de Construcción de Paz, 2011, pág. 5).

Comunitario Implica que las comunidades participan de manera significativa e importante en todos los aspectos de los programas que les afecten, fortaleciendo el rol de liderazgo de la comunidad como una fuerza impulsora de cambio ¹² (Agencia de la ONU para los Refugiados-ACNUR, 2013).

Territorial Entendido como el reconocimiento de las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y la adopción de medidas y acciones integrales para ser implementadas con participación activa de las comunidades, tendientes a garantizar la sostenibilidad socioambiental del Estado¹⁴ (Corte Constitucional, 2017).

Transformador En el marco de sus competencias, promueve un desarrollo integral que contribuya al progreso del territorio, destacando la participación ciudadana y la inclusión.

Diferencial Reconoce la existencia de grupos poblacionales que, por sus condiciones y características étnicas, trascurrir vital, género, orientaciones sexuales e identidades de género, discapacidad o por ser víctimas del conflicto armado, son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades.

Multicultural Relaciona el involucramiento de los diferentes grupos provenientes de diversas culturas que conviven en el territorio, durante el análisis, discusión y toma de decisiones.

ARTÍCULO QUINTO. COMPOSICIÓN. El comité Municipal integración regional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 será conformado por los siguientes miembros:

1. Alcalde de (_____) o su delegado.
2. El secretario(a) de Desarrollo Económico y Agropecuario.
3. El secretario(a) de Planeación y Urbanismo.
4. El secretario(a) de Hacienda.
5. El secretario(a) de Gobierno.
6. El secretario(a) de Obras Públicas.
7. El secretario(s) de Ambiente Natural.
8. Otras competentes

ARTÍCULO SEXTO. REUNIONES: Los miembros del Comité Municipal integración regional se reunirán, de manera ordinaria, por lo menos _____ (x) vez al mes

hasta la fecha de radicación de la propuesta para la ley orgánica Región Metropolitana.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Quorum decisorio del Comité Municipal de integración regional de (_____), será la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se adoptará por mayoría simple.

PARAGRAFO SEGUNDO: A partir de la fecha de radicación de la propuesta para la ley orgánica Región Metropolitana o la Ordenanza de las Provincias Administrativas y de Planificación, el comité se reunirá (____) veces al año, con el fin de dar alcance al plan al Establecimiento de un modelo de articulación e interacción con el Distrito Capital, municipios aledaños y la RAPE fortaleciendo la visión de región y la planificación integrada en temas ambientales, de conectividad, Ctel, movilidad, dinámica económica, servicios públicos y calidad de vida.

ARTÍCULO SÉPTIMO. FUNCIONES: Son funciones del Comité Municipal de integración regional de (____):

1. Planificar, dirigir, vigilar y controlar el cumplimiento de todas las actividades para determinar la conveniencia de establecer un modelo de articulación e interacción regional.
2. Preparar, discutir y presentar para aprobación del alcalde el cronograma de las actividades con fechas específicas, la temática a tratar y las actividades a realizar definiendo los lineamientos de discusión en mesas de trabajo, la metodología y mecanismos de participación ciudadana.
3. Fijar los lineamientos para estructurar los documentos, las ponencias, los trabajos y el programa técnico a desarrollar en cada conversatorio, mesa de concertación y participaciones ciudadana seleccionando coordinadores de las actividades e identificando ponentes y conferencistas.

4. Verificar, y corregir los documentos síntesis de cada proceso y presentarlos al alcalde para su aprobación y posterior socialización.
5. Verificar y validar la presentación y contenido del documento de iniciativa del modelo de articulación e interacción regional para aprobación del alcalde.
6. Coordinar los mecanismos, verificar el diseño y elaboración de impresos, afiches, programas, folletos, papelería especial, invitaciones, distintivos y todo lo relacionado con mecanismo de difusión para las mesas de trabajo y concertación con la comunidad.
7. Planificar y coordinar los protocolos, mecanismos y medios de comunicación para difundir y socializar las actividades programadas y la logística requerida.
8. Delegar en el personal a su cargo responsabilidades y asegurar que los pasos adecuados se lleven a cabo puntualmente.
9. Constatar el buen funcionamiento de los sistemas de información y medios de comunicación para brindar y suministrar oportunamente toda la información y material acerca de actividades de cada mesa, conversatorio foro o evento o de otra índole requerida.
10. Aportar su contribución en el proceso de evaluación cuando cada evento haya finalizado con el envío de las actividades, indicaciones, recomendaciones, sugerencias, herramientas y conclusiones, realizando un resumen que contenga lo que funcionó bien y lo que no funcionó.
11. Verificar, refrendar y otorgar aprobación previa de los documentos generados en el proceso y del anteproyecto de acuerdo que autoriza la adopción del modelo de articulación e interacción regional para posterior presentación de la administración al concejo municipal.
12. Cumplir con todas las funciones que le encomiende el alcalde municipal para alcanzar objetivos específicos de articulación e interacción regional para que se lleve a cabo en forma fluida y efectiva.
13. Preparar y presentar un informe de Rendición de cuentas cada semestre, de las actividades y temas tratados en el comité, como también los eventos realizados de alcance con la comunidad y su participación.
14. Convocar a los actores internos o externos necesarios para realizar capacitaciones o socializaciones en temas de integración regional, quienes tendrán voz, pero no voto durante los actos decisorios.

ARTÍCULO OCTAVO. SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaría Técnica del Comité Municipal de integración regional de (_____), será ejercida por la secretaria de (_____).

PARÁGRAFO: Las funciones de la Secretaría Técnica serán:

1. Convocar con anticipación a las sesiones del comité Municipal de integración regional de (_____).
2. Preparar la agenda de las reuniones.
3. Levantar registros de las sesiones mediante actas, listados de asistencia.

4. Las demás funciones que solicite el Comité en el marco de institucionalidad

ARTÍCULO NOVENO: Para apoyo y asesoría al comité de trabajo en todas las labores de coordinación, ejecución, supervisión y control de las actividades, se designará un asesor especializado en gestión territorial.

ARTÍCULO DECIMO. APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL: El Gobierno Municipal ofrecerá todo el apoyo logístico y administrativo al Comité Municipal Integración Regional para garantizar el eficiente cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO ONCEAVO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en el Municipio de (_____), Cundinamarca, a los (_____) (xx) días del mes de (_____) de (_____) .

ALCALDE MUNICIPAL

Ahora bien, cumpliendo los pasos enunciados quedará consolidado el alistamiento institucional y se debe proceder a generar los mecanismos necesarios para la incorporación de la sociedad civil en la construcción colectiva de las reglas de la asociatividad y la gobernanza multiescalar para que conjuntamente los actores definan ese marco legal que permitirá el afianzamiento del proceso asociativo.

2.1.4. La Participación Ciudadana en la Construcción Colectiva del Marco Normativo Requerido para el Modelo de Articulación

Para nuestro caso de estudio y con el fin de establecer la participación ciudadana la cual es indispensable en primera instancia para construir colectivamente el marco normativo que contribuya a establecer el modelo y en segunda instancia para autorizar y refrendar la participación de la entidad en el modelo de asociatividad

es importante describir todo el proceso de participación de los actores involucrados y donde en especial la comunidad exprese las reglas de juego con las que acompañarían el proceso de articulación e interacción regional.

Por la razón expuesta y para bien del establecimiento del modelo de articulación se ha aprovechado la coyuntura que en el momento existe y que ha sido generada por la reforma constitucional y la promulgación del acto legislativo 02 de 2020 que invita a la comunidad a aportar iniciativas en la construcción colectiva de la norma orgánica que establecerá el régimen político, administrativo y fiscal para la conformación de Región Metropolitana entre Bogotá, el departamento de Cundinamarca y los municipios cundinamarqueses que voluntariamente deseen vincularse, lo mismo se cultivan las acciones que viene adelantado la asamblea departamental con el fin de reglamentar las provincias administrativas y de planeación de acuerdo con lo contemplado en el párrafo del artículo 16 de la ley 1454 de 2011, normatividad que facilitará la implantación del modelo de articulación e interacción

La asociación de municipios de sabana centro “Asocentro” considerando esté invaluable proceso e interesada como es bien sabido en establecer el mejor modelo de integración y articulación no escatimo esfuerzos y se involucra en este valioso y oportuno asunto e iniciativa regional y nacional y emprende conjuntamente el proceso para dar apertura al diálogo, contando inicialmente con los once municipios asociados como interlocutores en doble vía, quienes realizan una efectiva participación en las audiencias públicas patrocinadas por el congreso de la república ,la gobernación del departamento y la ciudad capital, con una inigualable suma de esfuerzos y voluntades con el propósito de facilitar la toma de decisiones.

El primer paso, para el alistamiento institucional de acuerdo con las indicaciones de los alcaldes que componen Asocentro es enviar sus delegados para integrar el equipo técnico de trabajo con un funcionarios del gabinete por cada municipio y de esta manera se conforma el comité técnico de Asocentro, cuyo el propósito primordial es el de recoger y articular las iniciativas comunitarias que van surgiendo de las reuniones, foros y audiencias desarrolladas en cada municipio, para luego, en reuniones de trabajo conducidas por la diligencia e interés de la dirección de la Asociación constituir la propuesta articulada del marco normativo requerido para la asociatividad regional.

El comité técnico de trabajo liderado desde la Asociación de Municipios en cumplimiento de su noble finalidad , busca en primera instancia, brindar la estructura general del marco normativo requerido para la operatividad del modelo de articulación con una visión compartida que se construye en ejes estructurantes para la norma requerida, analizando la constitucionalidad de la propuesta y su correspondencia con el ordenamiento jurídico establecido en el Acto Legislativo 02 de 2020 ,en la ley 1454 de 2011 y con las iniciativas y aportes ciudadanos que surgen en las discusiones municipales y provinciales, de tal forma que en la siguiente sección se presenta el texto normativo que refleja con precisión, claridad y simplicidad, la voluntad política de todos los actores involucrados para establecer la figura específica de asociatividad territorial que permite a los municipios de Cundinamarca y a Bogotá organizarse para gestionar de manera eficiente los asuntos regionales; como complemento al marco legal , el proceso asociativo enfoca sus prioridades en seis temas trascendentales como son : el abastecimiento hídrico, la Seguridad alimentaria, la Movilidad, y

accesibilidad a los servicios sociales y económicos, el Uso racional del suelo y equilibrio territorial, el Saneamiento del río Bogotá y el manejo sostenible de los desechos, aspectos en los que centrarían las labores las figuras asociativas creadas.

Para beneficio del modelo de articulación es indispensable que el congreso de la república como lo determinó el acto legislativo 02 de 2020 tenga en cuenta para la aprobación del marco normativo las iniciativas ciudadanas que han surgido y que en el siguiente párrafo se presentan y estructuran, lo mismo que debe con claridad esta corporación adoptar el mecanismo que la comunidad ha considerado más viable para la refrendación y autorización de la incorporación de las entidades territoriales a la figura asociativa y así sin lugar a dudas facilitar la implementación del modelo asociativo y de articulación regional

2.1.5. Requerimiento Legal y Normativo

En esta sesión y como resultado de las iniciativas ciudadanas y el trabajo del comité técnico provincial se brinda el aporte presentado para el desarrollo de la normatividad jurídica que se centra en primer lugar en el contenido de la estructura general de la Ley Orgánica para la Región Metropolitana y de la ordenanza para la provincia administrativa y de planificación brindando los mecanismos para su integración formal, su estructura temática y el desarrollo material del marco normativo requerido, adicionalmente se brindan los ejes estructurantes con el fin de alinear los objetivos y construir consensos alrededor de la asociatividad regional para comprender cabalmente el tema sobre el cual se viene trabajando para una correcta definición del objeto y su ámbito de aplicación territorial.

Todos los ciudadanos, gremios y actores involucrados dentro del proceso han realizado y generado sus aportes, contribuciones e iniciativas, con el firme propósito que de manera propositiva, incluyente y participativa se plasmen en el contenido de la Ley Orgánica de la Región Metropolitana y en la ordenanza de la provincia administrativa y de planificación para que de esta forma se establezca la viabilidad jurídica para la creación voluntaria del modelo de articulación entre las entidades territoriales como una necesidad técnica y de racionalidad administrativa.

Es indispensable manifestar que, dentro del contenido y desarrollo temático se ha generado una metodología que incorpora un marco participativo, un componente técnico y el control político porque se considera que solo así, trabajando unidos se logrará pasar de buenas intenciones a realidades concretas que las entidades territoriales Bogotá y la Región lo requieren.

El siguiente contenido brinda organizadamente las iniciativas para estructurar el marco normativo buscando la preservación, promoción y protección de la Autonomía Territorial, entendida como la capacidad de manejar los asuntos propios; es decir, aquellos que le conciernen al ente territorial como tal, garantizando el principio de equidad territorial y comprendiendo que las normas se conviertan en instrumentos generadores de confianza entre Bogotá y los municipios aledaños facilitando la implementación del modelo de articulación, esto es un precepto robustecido por la CEPAL al argumentar que, al repensar en las Instituciones para el Desarrollo es imprescindible reconectarlas con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus

demandas y aspiraciones, para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe (ALC). (CEPAL, 2020)

Las iniciativas del marco normativo que a continuación se presentan buscan contribuir a un efectivo funcionamiento de la Región-Metropolitana y de la provincia administrativa y de planificación y generar su grado de soberanía en un claro y señalado Marco de Competencias que no vulnere la autonomía de los municipios integrados. Adicionalmente, se presenta una contribución con el establecimiento de mecanismos trazadores de las decisiones referentes al financiamiento, presupuestos de gastos y de inversiones, como un capítulo de suma importancia dentro de la normatividad requerida, eso sí, no será cesante, ni pasivo el papel de los territorios que a bien, acepten formar parte del modelo asociativo en cuestión y que las decisiones de inexorable transcendencia, en ningún caso, estén de manera exclusiva entre la alcaldía mayor de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca.

A continuación se relacionan los ejes estructurantes que sirven como insumo para iniciar una construcción colectiva de la ley y la ordenanza que nos lleve a constituir las reglas de juego para una Región Metropolitana y una provincia administrativa y de planificación, figuras administrativas necesarias para la operatividad del modelo de articulación y se recomienda al Congreso de la República y a la asamblea del departamento tener en cuenta esta iniciativa construida colectivamente por la gran mayoría de los actores involucrados para conseguir modular los esfuerzos cuyo propósito es la articulación e interacción regional.

La estructura de contenido general de la ley como de la ordenanza se propone en ocho capítulos y cada uno con un contenido mínimo a saber:

- ✓ El Capítulo 1 de disposiciones generales con el Objeto, la Naturaleza, los Principios, las Competencias, las Funciones, las Decisiones y el Grado de autonomía de la figura asociativa.
- ✓ El Capítulo 2 los órganos de dirección y administración compuesto por el Consejo Regional, funciones y competencias, la Mesa directiva, integración y funciones, el presidente del consejo regional- elección y funciones, las Comisiones temáticas especializadas permanentes, integración y funciones, el consejo provincial de planeación y administración, El director regional- proceso de nombramiento y funciones; la Secretaría técnica, Estructura administrativa y el personal; el Sistema de toma de decisiones que promueva el consenso, quórum y decisión; los Actos y contratos y las agencias especializadas adscritas.
- ✓ El Capítulo 3 del patrimonio y rentas provenientes del patrimonio-rentas, el Presupuesto de gastos e inversiones; los Mecanismos de financiamiento, la Capacidad fiscal municipal; la creación del Fondo provincial o regional; la Transferencia de competencias y recursos de la nación.
- ✓ El Capítulo 4 sobre la planificación integral con un contenido de la formulación y aprobación del plan estratégico de desarrollo sostenible regional o provincial; la Definición de la estructura ecológica principal; la Definición de criterios del modelo de ocupación del territorio; el Contenido y atribuciones de ordenamiento territorial; los Planes de acción sectoriales regionales o provinciales; los Programas de desarrollo con enfoque regional-PDER; la Participación ciudadana en los instrumentos de planeación; la Articulación y concertación con otros organismos asociativos; el Observatorio regional de planificación, el Consejo

regional o provincial de planeación y mecanismos vinculantes.

- ✓ El Capítulo 5 define los procesos de vinculación y asociatividad; el procedimiento y las condiciones para la asociación de los municipios a la región metropolitana o a la provincia administrativa y de planificación; la Participación ciudadana en la toma de decisión de asociatividad: el Procedimientos de dimisión.
- ✓ El Capítulo 6 los hechos metropolitanos o hechos provinciales incorpora los Parámetros y criterios para la identificación y priorización; las Cargas, beneficios y compensaciones; las Agencias especializadas por complejidad del hecho metropolitano o provincial; las Mesas temáticas municipales y provinciales de priorización.
- ✓ El capítulo 7 de participación ciudadana debe definir para la asociatividad de los municipios a la región metropolitana o a la provincia; para la identificación y priorización de hechos metropolitanos o provinciales; para la toma de decisiones; para la implementación de la norma jurídica; para la rendición de cuentas, para el control social veedurías y gobernanza.
- ✓ El Capítulo 8 del Control y vigilancia; el Control político sobre decisiones, el Control fiscal y de gestión, el control por la Autoridad ambiental y las Veedurías.

2.2. Etapa De Implementación y Operatividad Del Modelo

Las entidades y actores involucrados para implementación de esta etapa deben operar el conjunto de las 5 dimensiones del modelo y las 24 políticas de gestión y desempeño institucional, que, ejecutadas y realizadas de manera articulada e

intercomunicada, permitirán que el modelo de articulación e interacción regional MOAIR funcione (la implementación de estas dimensiones y políticas se desarrollarán en mayor detalle, en el capítulo III).

2.3. Etapa de Instrumentos y Mecanismos de Ejecución y Proceso de Financiamiento del Modelo

Es fundamental en esta etapa los criterios para la identificación, formulación de aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el modelo de articulación lo mismo que se identifican los mecanismos de financiación y los recursos de los que dispone el hecho sectorial y la figura asociativa para la financiación de su actividad, provienen básicamente de dos fuentes: las internas, que se refieren al capital que posee la figura asociativa y que toma de su propio patrimonio, y las externas, aquellas otorgadas por terceros quienes, a través de diferentes figuras jurídicas, facilitan el acceso al capital requerido; por la complejidad del tema se desarrolla en el capítulo IV.

2.4. Etapa De Medición y Evaluación Del Modelo

En esta etapa para evaluar el nivel de implementación del modelo de articulación e interacción y de la figura asociativa, se brindan a todos los actores los mecanismos, instrumentos y procedimientos para realizar periódicamente el control y la medición del desempeño institucional, el avance de las dimensiones y políticas, el grado de orientación de la entidad hacia la eficacia, la eficiencia y calidad en todos los objetivos

,productos y/o servicios y si están respondiendo a atender las necesidades y problemas de los ciudadanos, para que inmediatamente después de tener los resultados del control y la medición se diseñen e implementen acciones concretas de mejora que permitan aumentar la efectividad de la gestión para alcanzar mejores resultados.; este importante componente del modelo se desarrolla en el capítulo V.



Capítulo III

**Dimensiones para
la operatividad e
implementación
del modelo**

**MO
AIR**

CAPÍTULO III DIMENSIONES PARA LA OPERATIVIDAD E IMPLEMENTACION DEL MODELO

La implementación del modelo requiere de la ejecución de varias dimensiones a través de un proceso de integración y articulación que permite ascender de abajo a arriba, desde los niveles inferiores hacia los superiores; la planificación del modelo implica el desarrollo local que se aplica a los niveles territoriales más bajos (municipios) integrándose en un proceso ascendente en los niveles superiores (provincia y región) donde conjugan las actividades humanas que soportan y dan cauce al desarrollo, su correcta localización en el espacio y la pertinente regulación de su comportamiento.

El modelo debe lograr inicialmente un equilibrio dinámico entre las dimensiones de la sustentabilidad que irrumpen en lo ecológico o ambiental, lo social y lo económico pues no es posible alcanzar un desarrollo sustentable o sostenible si se impacta negativamente el ambiente, hay conflictos sociales o pérdidas económicas y corresponde mantener funcionales los sistemas ecológicos.

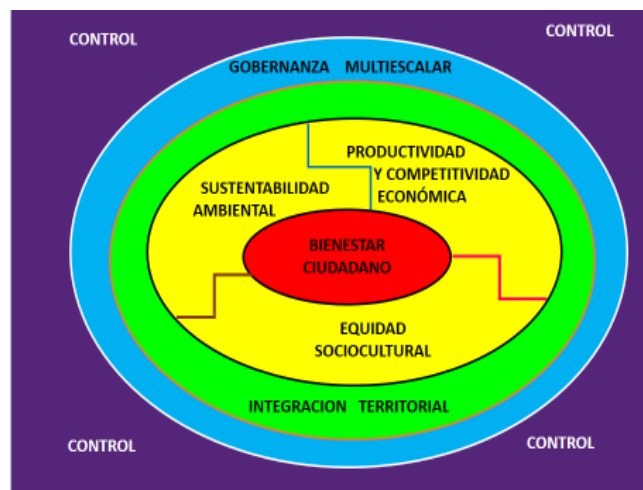


Figura 8. Operatividad del MOAIR. Fuente: Propia de Autor.

La operación del MOAIR se desarrolla mediante la puesta en marcha de cinco (5) dimensiones: la dimensión de sustentabilidad ambiental, la dimensión de equidad sociocultural, la dimensión de productividad y competitividad económica, la dimensión de integración territorial y la dimensión de gobernanza multinivel y gestión institucional.

Esto estructurado en veinticuatro (24) políticas de gestión y desempeño institucional, cada política tiene una serie de actividades, las cuales deben ser desarrollados a través de la planeación integrada, articulada, intercomunicada y bajo los lineamientos que se definen a continuación para su implementación, y soportadas en los principios rectores enunciados con claras estrategias que incentiven las alianzas estratégicas horizontales impulsando la colaboración, a nivel municipal, provincial, departamental a nivel nacional y transnacional entre diversos actores,

Lo dicho, permite además la vinculación del sector académico y el sector privado con la finalidad que de manera agregada se desarrollen procesos conjuntos, pero manteniendo la independencia de los involucrados, buscando la interconexión interna y externa de las áreas locales para compartir y replicar experiencias e involucrando la innovación que conlleva el desarrollo de soluciones nuevas, específicas y diferentes, utilizando recursos endógenos, herramientas o instrumentos que deben ser puestos en marcha de manera articulada e intercomunicada.

Las siguientes dimensiones acopian los aspectos más importantes de las prácticas y procesos, herramientas o instrumentos que adelanten las entidades públicas asociadas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan valor público.

Para cada una de las dimensiones identificaremos las políticas que invita el modelo a desarrollar, generando los lineamientos para que de esta manera se construya y se exponga el conjunto de acciones y decisiones para resolver cada problemática dentro de la figura asociativa, y por consiguiente se formulen las políticas aquí planteadas donde intervengan conjuntamente todos los actores involucrados y busquen de manera articulada dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad y brinden el uso estratégico de recursos para aliviar los problemas territoriales en cada materia, estableciendo las alianzas necesarias para concretar los fines específicos.

Este documento como bien se ha señalado no desarrolla ni formula las políticas solo pretende generar las pautas que darán contenido a esas acciones y decisiones en cada uno de los sectores de las diferentes dimensiones que estructuran el modelo de articulación e interacción para que se intente solucionar la problemática de diferentes tipos llámese ambiental, económico, social, de infraestructura, institucional entre otros.

3.1. Dimensión de Sustentabilidad Ambiental

El propósito central de esta dimensión sin pretender que sea la de mayor jerarquía, lo cierto es que es la motivación prioritaria del modelo, debido a que fue la conciencia del grave impacto sobre el ambiente, lo que impulsó inicialmente a buscar mantener el equilibrio ecológico, pues hoy se tienen las consecuencias de un desarrollo lineal incontrolado, que se expresa en fenómenos como el Calentamiento Global, la pérdida masiva de biodiversidad, la baja calidad del aire, la reducida calidad y

disponibilidad del agua muy susceptible al desabastecimiento, las afectaciones a la estructura ecológica principal, la reducción de terrenos para uso agropecuario, entre otros.

Esta dimensión debe lograr un equilibrio dinámico con las otras dimensiones, en cuanto el ámbito ecológico o medioambiental, se le puede entender como el sistema natural o transformado en que vive la comunidad, con todos sus aspectos sociales y biofísicos y las relaciones entre ellos, adicionalmente se asume como el marco orientador de un desarrollo sostenible, inclusivo y territorialmente equilibrado y pretende dentro del modelo sin lugar a dudas alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas en la perspectiva del año 2030.

Esta dimensión orienta a través de los lineamientos fijados en cada una de sus políticas los manejos apropiados del conjunto de ecosistemas naturales y seminaturales que tienen una localización, extensión, conexiones y su estado actual dentro de la región y que garantizan el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, aire, suelos, recursos biológicos y clima), como medio para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la prolongación de la vida, frenando el deterioro ambiental

La dimensión de sustentabilidad ambiental supone que la economía sea circular, que se produzca un cierre de los ciclos, tratando de imitar a la naturaleza diseñando sistemas productivos que sean capaces de utilizar únicamente recursos y energías renovables, y no producir residuos; por tal razón en las políticas identificadas en esta dimensión se busca incrementar las opciones y oportunidades disponibles para la sociedad, identificando líneas estratégicas para la inclusión en lo ecológico de

la base productiva de los recursos naturales y el sistema de soporte de la vida; en lo económico de mantener un flujo de beneficios para satisfacer las necesidades humanas; y en lo social una equidad distributiva y respetando los valores culturales.

Este documento como bien se ha señalado no desarrolla ni formula las políticas solo pretende generar las pautas que darán contenido a esas acciones y decisiones en cada uno de los sectores y para este caso en particular se refieran al medio ambiente.

3.1.1. Política de Conservación de la Biodiversidad

Para darle consistencia al desarrollo de la dimensión de sustentabilidad ambiental se hace necesario establecer esta política de conservación de la biodiversidad dentro del modelo de articulación, que propende por el cuidado y conservación ambiental de todos los recursos de la naturaleza, por el impacto de las actividades humanas sobre el entorno, los ecosistemas y la diversidad de especies que existen en la región ,y como razón primordial para ordenar el espacio y permitir opciones de uso de los recursos , conservar el patrimonio natural, cultural e histórico en el desarrollo de la figura asociativa y que la conservación de los recursos naturales, se conviertan en uno de los fines esenciales del modelo de asociatividad.

Con la adopción de esta política se le da la importancia a todo lo relacionado con el cuidado del ambiente, la naturaleza, el agua, el aire, el suelo, las plantas, los animales, los ecosistemas y paisajes naturales y la defensa de la estructura ecológica principal y con la clara intención de involucrar a la gran mayoría de ciudadanos del territorio para que de esta forma se entienda y comprenda que en la medida que se cuide y se conserve el medio ambiente, se estaría garantizando una

calidad de vida, un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras , lo cual implica que la conservación del medio ambiente y todos sus recursos naturales, debe ser más profunda y verdadera para tratar de minimizar el daño causado por el hombre y buscar despertar esa conciencia erudita

Se considera fundamental la conservación ambiental para el desarrollo económico y riqueza de toda la región y el país, pues se generan estrategias para que los ciudadanos conjuntamente con el estado como principales responsables de mantener el medio ambiente en beneficio de sí mismo, promuevan y pongan en práctica las medidas de conservación ambiental por medio de comportamientos y hábitos ecológicos que permitan combatir los problemas de la contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente.

Esta política le permite al modelo de articulación armonizar acciones con el fin de lograr una gestión eficiente en la conservación de la biodiversidad urbana y rural del territorio, aportando a la población una distribución justa y equitativa de los beneficios y los servicios ecosistémicos, así mismo garantizará la habitabilidad y la sustentabilidad de la región con el uso sostenible de sus componentes, reconociendo la importancia del contexto regional a partir del mejoramiento de la calidad de vida, el fortalecimiento del tejido social y la incorporación de la región en los procesos de gestión ambiental.

La verdadera intención de la política, conociendo que la biodiversidad es patrimonio de todos se ve reflejada en la capacidad de generar escenarios de cambio a través de la acción conjunta, coordinada y concertada de todos los actores

involucrados, para articular los componentes tangibles tales como las especies, ecosistemas, paisajes y comunidades e intangibles como los conocimientos ,innovaciones y las prácticas culturales asociadas, todos estos vitales y con un gran valor estratégico para el desarrollo presente y futuro de la región.

El modelo requiere que la política se cumpla estrictamente y por tal razón se generan a continuación algunas pautas para su promoción donde se establecen mecanismos para una clara Gestión Integral de la Biodiversidad y se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas regional, provincial y local ; estas pautas se centran en la conservación y cuidado de la naturaleza; en la corresponsabilidad y compromisos de todos los actores involucrados en el modelo, con claras acciones hacia el desarrollo económico y calidad de vida ,a la gestión del conocimiento, la tecnología e información, con una gobernanza multiescalar y un claro valor de confianza y una justa gestión del riesgo y suministro de servicios ecosistémicos.

Las pautas generalizadas que se consideran prioritarias para la adopción de la política tienen como objetivo fundamental preservar el medio natural y garantizar un crecimiento sostenible que no comprometa la capacidad de desarrollo de generaciones futuras; que garanticen la prevención como principal arma ante cualquier tipo de riesgo para el medio ambiente, identificándolo y evaluándolo de manera correcta , para determinar sus posibles efectos y actuar con prevención ante posibles ataques medioambientales.

Como la política se encamina a la protección ambiental por tal razón se deben establecer y determinar la manera como se imponen sanciones y tomar medidas contra

aquellos organismos o personas físicas que infrinjan alguna de las normas establecidas, para que no se presenten acciones peligrosas y de esta forma no se tengan consecuencias negativas para el equilibrio sostenible de la región.

Es vital que la política busque desarrollar y establecer las pautas de actuación en todo tipo de sectores que puedan resultar perjudiciales para la integridad del territorio desde sectores privados como la construcción o la industria hasta otros públicos como la política económica de la región o provincia, las normas establecidas y asumidas de protección ambiental garantizarán el respeto al medio ambiente.

Con estas pautas básicas y siguiendo los principios definidos por el enfoque ecosistémico, la política buscare un consenso y bajo esta condición que se ajuste a una normativa eficaz, de modo que el marco de acción permita generar un balance entre los diferentes intereses de los actores involucrados en el modelo frente a la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos derivados de esta, que son clave para el bienestar humano, pasando de esta manera a una verdadera gestión que promueva la corresponsabilidad social y sectorial, fomentando la participación social y el reconocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como un valor público y se reconozcan e incorporen en la planificación de las acciones a corto, mediano y largo plazo, para aumentar de manera sostenible la productividad y la competitividad regional y provincial, al tiempo que se protegen y mantienen las riquezas naturales y culturales del territorio y del país.

Se considera pertinente en este momento dentro de la política de biodiversidad de la dimensión ambiental del modelo de articulación, mencionar como líneas de

acción algunas medidas y estrategias que se deben empezar a poner en práctica para atenuar los efectos negativos sobre los ecosistemas estratégicos de la región y así pueda el gobierno regional establecer y tomar acciones para tratar de limitar la injerencia del ser humano en el medio ambiente y los cambios que en él pueda ocasionar. Todas las medidas y las acciones que buscan preservar el medio ambiente y que se engloban dentro de esta política de protección ambiental deben implementar la educación Ambiental como estrategia principal para asegurar el mantenimiento y la conservación de los ecosistemas estratégicos y lograr un cambio en la conducta ciudadana y regular su agotamiento, conservar y mantener los ecosistemas saludables, promoviendo el saneamiento ambiental para mantener y utilizar racionalmente el agua y la electricidad, mantener los espacios de las comunidades en buen estado, fomentando el mejor transporte ecológico o movilidad sostenible, la agricultura ecológica y turismo ecológico, promoviendo y participando en programas para sembrar la conciencia del conocimiento ambiental y sensibilizar a las personas sobre los problemas ambientales y cómo se puede conservar el medio ambiente.

3.1.2. Política de Restauración Ecológica

Como quiera que no solo se debe proteger y conservar la biodiversidad sino adicionalmente, debido al deterioro del medio ambiente se debe lograr revertir el desequilibrio ecológico que existe actualmente, lo que hace necesario generar dentro de la dimensión y el modelo de articulación una política de restauración ecológica con todas las acciones dirigidas a recuperar o recrear, en tanto sea posible, las condiciones originales del ecosistema regional y provincial, buscando en primera

instancia la regeneración natural cuando la degradación no es tan severa, pero adicionalmente implica más que esto; la restauración requiere de procesos de ayuda a la recuperación de un área, ecosistema, o paisaje degradado, dañado o destruido en la región, con el fundamental propósito de retomar su trayectoria ecológica, mantener la resiliencia, conservar la diversidad biológica y restablecer la funcionalidad de los ecosistemas y paisajes provinciales

El modelo de articulación y sus actores involucrados deben tener claro que la restauración ecológica es una actividad prioritaria a nivel provincial, regional y nacional y que representa una gran oportunidad para el logro los objetivos estratégicos de asociatividad y para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio global.

La restauración ecológica se debe incorporar en la implementación del modelo de articulación con acciones relacionadas a la reforestación y el control de la contaminación ambiental pero que el mejoramiento del ambiente y la restauración no solo dependan del Estado representado para nuestro caso por el gobierno provincial sino que se promueva el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y el diálogo ciudadano en aplicación de la Constitución Política donde se reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano como elemento esencial para el bienestar humano bajo la noción de desarrollo sostenible.

La política de restauración deberá disponer de acciones de conservación, asociadas al uso sostenible, el conocimiento de la biodiversidad y la restauración ecológica, reconociendo el rol crucial de la restauración para el cumplimiento de sus compromisos y generando mecanismos relacionados con la rehabilitación, creación de nuevos paisajes o rasgos ecológicos, recuperación, sustitución y mejoramiento de

la biodiversidad y de manera paralela, fortalecer el conocimiento científico, técnico y tecnológico en el tema para incrementar el desarrollo de redes temáticas que permitan la generación de espacios para el fortalecimiento de capacidades, la discusión y el intercambio de experiencias en restauración.

Se debe establecer una perspectiva amplia dentro de la política que implique una gestión socio ecosistémica que se simplifica en cuatro estrategias fundamentales que son de prevención, producción, protección y restauración y que requiere de una institucionalidad, una tecnología, unos procedimientos y un adecuado financiamiento y se logren con claridad medir los resultados y estos se mantengan y se califiquen como sostenibles y adicionalmente que los factores del daño se hayan controlado integralmente.

De la correcta formulación y aplicación de esta política se logrará pasar de la degradación hacia la cultura de restauración ecológica y bienestar colectivo con objetivos y metas factibles desarrollando la ciencia y las prácticas de la verdadera restauración que sin lugar a dudas involucren permanentemente las fases: investigación, diagnóstico, implementación, monitoreo y participación social.

Esta política realmente genera un cambio social que a través de los procesos eminentemente participativos conducirá sin equivocaciones a determinar e identificar cuáles son los factores que han provocado el daño a los ecosistemas, brindando las iniciativas de restauración que sean más eficientes y efectivas y a estar seguros que los resultados de la restauración se mantendrán en el tiempo pues de esta forma los factores del daño serán controlados y que las medidas de carácter biológico y ecológico serán suficientes para garantizar la perdurabilidad de la restauración.

3.1.3. Política de Seguridad Hídrica Y Gestión Integral

Es necesario que dentro del modelo de articulación se conozca qué es seguridad hídrica *“es la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socio-económico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.”*

Para las acciones y decisiones que se planteen en los lineamientos de esta importante y vital política se hace necesario que intervengan conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles con el fin de solucionar la difícil situación de los recursos hídricos en la región y los retos que se deben enfrentar a corto, mediano y largo plazo para garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad aceptable para todos los usuarios.

La ruta solidaria trazada en esta política significa el adecuado y eficiente suministro de agua para todos y el objetivo fundamental no es otro que la gestión integral del ciclo natural del recurso hídrico, ejecutando todas las acciones que brinden mejor calidad de vida de toda la población, respalde el crecimiento socioeconómico de la región y asegure la integridad de la estructura ecológica principal de la provincia.

Esta política de seguridad hídrica desarrolla precisamente el eje articulador de la región y es un tema central de integración que brindaría al modelo un

verdadero mecanismo que facilitará la asociatividad provincial y regional, por tal razón la figura asociativa se convertirá en ser la primera en adoptarla con el firme propósito y compromiso de avanzar rápidamente hacia su cumplimiento,

Se ha evidenciado precisamente que es indispensable e inaplazable abordar la preservación de la seguridad hídrica para un abastecimiento alimentario y es el motor que Justifica la necesidad de la asociatividad y articulación y es el mayor reto para generar mecanismos que contrarresten esos hallazgos y necesidades de intervención.

Por tal razón para la adecuada formulación de la política se debe ejecutar un apropiado y solido diagnostico con la participación de todas las instituciones sectoriales, representantes de todos los niveles de la administración central y entidades descentralizadas, responsables del manejo, administración, protección y regulación de los recursos hídricos, pues la demanda es gigantesca y en muy baja la capacidad productiva, para que este proceso sea validado en mesas públicas de concertación con representantes de todos los sectores y ciudadanos que utilizan este preciado recurso.

La política pública de seguridad hídrica debe estar orientada a toda la población, y en este caso se habla de política universal con el propósito de solucionar en primera instancia el acceso universal a agua de calidad y servicios de saneamiento, garantizando a todas las personas el uso de este bien y servicio con la calidad requerida ya que es considerado indispensable para participar plenamente en la sociedad.

Es importante destacar que la política de seguridad hídrica universal no puede ni debe permitir la presencia de inequidades económicas y sociales y debe ofrecer que los destinatarios reciban los beneficios de manera que el Agua brinde el crecimiento socioeconómico sostenible.

Todas las acciones y decisiones que a lo largo de la ejecución de esta política deben implementar la gestión integral preventiva de los riesgos relacionados con el agua y sus usos y el manejo óptimo de cada una de las cuencas hidrográficas para que sean saludables con el medio ambiente y siempre se tenga una verdadera Sostenibilidad hídrica.

La política de seguridad hídrica sin lugar a dudas reviste enorme importancia y ha sido de particular interés para la articulación del modelo y genera entonces la necesidad que se logre expandir la cobertura del servicio de manera universal en el sentido de que deben alcanzar a todos, o de lo contrario, sus efectos positivos no se materializarán y su inadecuada provisión del servicio afectará principalmente a los grupos sociales de menores ingresos.

Con esta política se logrará generar todos los mecanismos que mejoren el acceso al servicio de agua de buena calidad y optima cantidad, que produce estabilidad política y contribuye a la paz social, para que todos los pobladores no tengan frustraciones, se mejore la economía sustancialmente y el impacto positivo esperado abra nuevas oportunidades para el desarrollo de servicios de turismo, industrias y sociales.

Para concluir la política trae invaluable beneficios que aumentan el bienestar social, garantiza el derecho humano al agua, la eficiencia en el uso de agua, desarrollo agrícola, industrial, comercial, turístico, calidad organización y regulación institucional, sustentabilidad financiera del sector y gobernabilidad

Las recomendaciones finales en esta política es un llamado a la articulación a la apertura mental del trabajo en equipo pues son infinitos los beneficios que traen las decisiones, cuando la creatividad colectiva encuentra soluciones imaginativas y perdurables.

3.1.4 Política de gestión integral de residuos

Para esta importante política el modelo requiere que su fundamentación sea optima y que la formulación y adecuada implementación involucre los dos componentes que institucionalmente se deben fijar, en primer lugar todo lo relacionado al saneamiento ambiental como obligación a cargo de la figura asociativa generada por el modelo fijando con claridad los parámetros que orienten a establecer un marco de acción para cada una de las entidades involucradas, señalando las diferentes estrategias e instrumentos para fortalecer la acción en esta materia y como segundo y vital componente lo referido a la vinculación que el sector privado tiene en cuanto a la generación de sus residuos.

La política debe señalar y determinar con claridad en cuanto al sector privado, que se adopte como premisa indispensable la producción limpia, en lo referente a la minimización de residuos y la adopción y desarrollo de técnicas y acciones ambientales que deben adelantarse con eficiente desarrollo tecnológico, de modo tal

que la política de residuos para el sector empresarial e industrial sea un desarrollo específico y en lo posible de cero emisiones y tomen todas las medidas necesarias y desdoblen todos sus elementos para que este sea su verdadero resultado.

Para la gestión de los residuos que no puedan reducirse en el origen esta política debe exigir el cumplimiento de los parámetros y lineamientos que se señalarán en los objetivos de la política, lo cual implica que todas las entidades involucradas desarrollen los aspectos técnicos, económicos, administrativos, ambientales y sociales, involucrando la prestación del servicio de aseo en todas y cada una de las diferentes etapas que componen la gestión de los residuos sólidos: generación, almacenamiento, recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.

Para lograr los fines señalados en el párrafo anterior la política debe fijar objetivos puntuales que se desenvuelvan bajo los principios del desarrollo sostenible y se fundamenten en tres postulados: el primero la minimización del impacto ambiental negativo que causan los residuos, el segundo un crecimiento económico sostenible y el tercero el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general así como de las condiciones sociales de quienes intervienen en las actividades relacionadas con la gestión de los residuos.

El diseño de esta política ambiental debe contemplar en sus objetivos que se formulen la implantación, planificación y gradualidad de la gestión integrada de residuos sólidos, el análisis integral del ciclo del producto y la gestión diferencial de residuos aprovechables y basuras, también se debe establecer la responsabilidad de los generadores de residuos, lo mismo que la responsabilidad de las corporaciones

autónomas regionales y de todas las autoridades ambientales de los diferentes municipios asociados.

Bajo estos parámetros la política logrará cumplir con el objetivo fundamental que se sintetiza en lograr minimizar de la manera más eficiente, los riesgos que ocasionan los residuos sólidos a los seres humanos y al medio ambiente, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al crecimiento económico a través de objetivos específicos que tiendan a la minimización en el origen, con la adopción de la producción más limpia, modificando los patrones de consumo y producción insostenibles, creando mejores canales de comercialización y promoción y fortalecimiento de las cadenas de reciclaje con nuevos programas de aprovechamiento de residuos y mejorando la disposición final controlada.

Todos los programas que se logren formular deben ser efectivos y deben conducir al manejo integral ambientalmente adecuado de los residuos sólidos; pero para ello es fundamental conocer y dimensionar el problema a solucionar, quien lo genera y donde están localizados para así en todas las estrategias que se instauren ,apunten a focalizar las acciones en educación ambiental y participación ciudadana en definir los parámetros para la generación de información básica que permita establecer un adecuado sistemas de información sobre residuos sólidos y bajo esta condición se desarrolle una buena Planificación y coordinación institucional con el desarrollo de Ciencia y tecnología que permitan la Consolidación de la política integral de residuos sólidos.

3.2. Dimensión de Equidad Sociocultural

El propósito de esta dimensión dentro del modelo de articulación es permitir realizar las actividades que la conduzcan en materia social, a una eficiente acción pública y privada orientada hacia el logro de mayores niveles de igualdad social, favoreciendo la cohesión e inclusión social para lograr los resultados planteados y materializar las decisiones moldeadas en su planeación asociativa.

La dimensión de equidad sociocultural se localiza en el emprendimiento de procesos locales, provinciales y regionales generadores de identidades individuales y colectivas, desde los cuales se promuevan las capacidades de sus actores con el fin de potenciarlas en función del mejoramiento humano y de la calidad de vida y por tal razón si se pretende en el modelo un desarrollo sustentable debe considerarse las particularidades y originalidades culturales, al tiempo que debe lograr un equilibrio entre ellas.

De igual forma dentro de las políticas fijadas en esta dimensión se busca un desarrollo con crecimiento económico y de bajo impacto ambiental, eliminando las alteraciones y los desequilibrios sociales y ecológicos para no comprometer la sustentabilidad, pues una población marginada tiende a sobreexplotar los recursos naturales, mientras que una población educada, con salud, vivienda digna, bien alimentada y con calidad de vida, nos acerca más a la posibilidad de una acción ciudadana responsable y una asociatividad consolidada.

Las estrategias en esta dimensión y el esquema de trabajo deben convocar a la generación de redes de conocimiento que promuevan el diálogo y reflexión entre los diferentes actores involucrados sobre contenidos precisos que permitan comprender el contexto territorial (sociocultural) y deben generar los mecanismos verticales de gestión, donde la viabilidad y sostenibilidad de la población y el territorio son el objetivo.

Se pretende a continuación con los lineamientos de cada una de las políticas socioculturales asumidas por cada una de las entidades territoriales se unifiquen a nivel provincial y que con en el ejercicio de cada una de ellas individualmente se logre gestionar los activos unificados de la región central y de la provincia, contribuyendo de esta manera en la resolución de conflictos dentro de las sociedades adscritas, permitiendo la coherencia social ,para que se determinen las estrategias conjuntas en cada una de las políticas y se conviertan en acciones obligatorias para todos los integrantes involucrados en la figura asociativa que se ha generado bajo los lineamientos del modelo de articulación e interacción.

3.2.1. Política de Identidad Cultural

En esta política se considera como primera demanda que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, pues así lo determina la constitución política de 1991 y es demasiado importante para que no solo se contemple y centre en estos lineamientos y que por el contrario la asociatividad, profundice cada una de las decisiones y acciones para responder a las peticiones que desde este campo se reclaman, desde la sociedad civil y desde la academia.

Son múltiples los vínculos que debe tomar esta política empezando con el Patrimonio Cultural Mueble y los bienes muebles de interés cultural pues son fundamentales en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los actores involucrados de la región, pues a partir de ellos es posible construir, legitimar y mantener interpretaciones de momentos particulares de la historia y adicionalmente los conocimientos y las prácticas generales, fundan en las personas y colectivos sociales vínculos de cohesión e identidad con la región y su comunidad .

Al fijar la política se debe tener en cuenta a demás todos los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a los activos sociales de carácter cultural, que les dan a los actores involucrados sentido, identidad y pertenencia entendiendo entonces no sólo los usos, representaciones, y costumbres, que allanan sus raíces en el pasado y que se immortalizan en la memoria colectiva, sino también los apropiados en la vida contemporánea.

Es imprescindible y se debe en la formulación de la política, asegurar que los componentes y recursos culturales estén presentes en todos los espacios de la planificación y procesos de desarrollo con gran identidad cultural para así poder enfrentar un gran número de retos para su adecuada y próspera ejecución, adicionalmente no se puede desconocer en la región que existe una diversidad cultural que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea unas posibilidades variadas , y sustenta las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades de la región

Para los lineamientos y parámetros a largo plazo de esta política se hace ineludible asumir principios fundamentales y todos ellos enmarcados y encaminados a la promoción de la identidad cultural, a la protección de la diversidad cultural, al fomento de la creatividad y a la consolidación de la participación activa de la ciudadanía de la región con el claro propósito de institucionalizar en las organizaciones que han de asumir este encargo, un diseño con acciones y canales efectivos de interlocución con los diferentes actores culturales de la región.

Es ineludible estrechar y concretar las acciones a llevar a cabo que permitan poner en marcha la política cultural y de esa forma se enfrenten todos los retos, se asuma los obstáculos, imprevisiones e imprecisiones con decisiones firmes y estas a su vez permitan y faciliten los procesos de gestión institucional que contribuyan a hacer de la política cultural un componente fundamental del desarrollo de la región; solo así se logrará prever las problemáticas que se deriven de la aplicación de la política y disponer de suficiente capacidad de flexibilidad para atender a los cambios y controlar los medios para dotar de soluciones y capitales adecuados a los actores involucrados.

Para estructurar adecuadamente esta política cultural se deben en sus objetivos encaminar a fomentar un pluralismo realmente constructivo, con importantes estímulos, en el que la diversidad promueva la creatividad y la participación ciudadana en la vida cultural, con el fin de conservar y acentuar la importancia del patrimonio tangible e intangible, mueble e inmueble y fomentar las industrias culturales apoyando las formas y expresiones artísticas nuevas, emergentes

y experimentales. lo cual no significa subvencionar el consumo, sino de disponer de más recursos financieros a disposición del desarrollo cultural y del desarrollo humano.

3.2.2. Política de Vivienda y Hábitat

Desde el modelo de articulación e interacción se debe impulsar esta política con la finalidad de promover la reunión de los diferentes actores involucrados en materia de vivienda, para fortalecer la capacidad técnica y administrativa que permita la ejecución de la política pública de vivienda y hábitat.

Es indispensable que en esta política se generen los lineamientos que permitan ser liderados por todos los actores involucrando y logre construir consensos con los municipios y la comunidad, propiciando la creación de los instrumentos de planeación estratégica basado en el estado social de derecho y en el desarrollo humano, desde los principios de equidad, equilibrio y responsabilidad que logren garantizar el acceso a suelo seguro, ampliar la cobertura, innovar en la calidad de las soluciones habitacionales y la gestión de los recursos necesarios.

La construcción de esta política genera una gran oportunidad para decidir y participar en la identificación de necesidades y posibles alternativas para transformar la problemática de vivienda y hábitat que actualmente existen en la región y la provincia, nos permite fijar los lineamientos para profundizar en la identificación de los problemas de vivienda y hábitat relacionados con la cantidad y condición de las viviendas; la política y sus estrategias deben determinar los parámetros para equilibrar los lugares donde se debe construir y el uso adecuado del suelo, también se debe señalar el tipo de viviendas que se ofrecen, lo mismo que las necesidades de los

habitantes en cuanto al tamaño, el precio, la ubicación; adicionalmente la política defenderá y propiciará mecanismos que contrarresten el impacto negativo sobre el medio ambiente; es indispensable en la adopción de la política determinar los recursos y proyectos con que cuentan los municipios para dar soluciones; la participación de la comunidad y la conformación del Sistema Habitacional provincial.

Esta política requiere de una construcción colectiva con toda la comunidad de la región pues es la forma más adecuada para generar las condiciones de un hábitat digno y mejorar las condiciones de calidad de vida con capacidad ,sostenibilidad ,ordenamiento, infraestructura e innovación, bajo una perspectiva exhaustiva con acciones concretas que logren disminuir los niveles de necesidades, bajo los principios de integralidad y progresividad, pasando de un enfoque de demanda a un enfoque mixto, con el fin de fomentar la oferta de soluciones de vivienda con objetivos muy claros encaminados a la generación de oferta de soluciones de vivienda y mejoramiento para grupos de población vulnerable y desarrollo de estrategias fundamentales que conduzcan a producir suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario, buscando movilizar terrenos que no han sido urbanizados o edificados y gestionar predios que pueden ser densificados para la construcción de vivienda de interés prioritario.

En las estrategias deben de existir adicionalmente a la solución de vivienda nuevos espacios públicos y equipamiento social que garanticen la prestación de los servicios de movilidad y transporte; también se debe establecer mecanismos para el mejoramiento de forma integral de los barrios y viviendas mediante la orientación de inversiones en infraestructuras públicas y recuperación de los asentamientos de

origen informal fomentando de esta manera una verdadera cohesión social y finalmente se desarrollen acciones de titulación predial, y reconocimiento de edificaciones informales.

3.2.3. Política Educativa

Para el diseño y gestión del conjunto de decisiones y acciones con el propósito de formular los lineamientos de la política pública de educación se debe tener claridad que el Sistema Educativo Colombiano lo conforman: la Educación Inicial, la Educación Preescolar, la Educación Básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la Educación Media (dos grados y culmina con el título de bachiller), la Educación Superior y la Educación para el Trabajo y el Talento Humano.

La política educativa forma parte integral de todas las políticas adoptadas en las entidades territoriales y como quiera que la educación es un derecho universal se plantea entonces que se debe poner en práctica medidas y herramientas que sean capaces de generar objetivos estratégicos de larga duración, sostenibles en el tiempo, con proyectos y planes de acción debidamente formulados y planificados para proveer una educación de calidad, equitativa, incluyente, humana, como un bien público y social; con indicadores para medir los efectos, ha de ser un compromiso de las administraciones para impulsar las actuaciones que fomenten la mejora continua en los servicios educativos, por tal razón la política de calidad educativa necesita una filosofía, unas actuaciones prioritarias y unos instrumentos institucionales.

Esta política dentro del modelo de articulación debe buscar que en su diseño y elaboración se favorezca en primera instancia a la sociedad civil, especialmente a las clases menos favorecidas en términos económicos, sociales y culturales y que se ajuste integralmente a la exigencia hecha en la Constitución de 1991, que da origen para que se expida la Ley general de Educación o Ley 115 de 1994, como mecanismo para regular la educación, por tal motivo la política pública de educación debe dar respuesta a los problemas sociales y brindar un aporte que ayude a la comprensión de los mismos, y que a través de los diferentes planes de desarrollo y su articulación con las necesidades locales, contribuya a generar las estrategias y acciones correspondientes para solucionarlas.

Esta fundamental política educativa debe fortalecer las herramientas que garantice el derecho de las personas a este servicio público vital, que tiene una clara función social donde se busque el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, adicionalmente debe contar con acciones y decisiones de largo plazo que contribuyan a la transformación adecuada del sistema educativo y que se conviertan en estrategias integrales del Estado, para la generación de cambios sociales y económicos, que permitan el desarrollo de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región.

Se considera de vital importancia que todas y cada una de las acciones y decisiones que se generen en el espacio público para dar respuesta a los problemas sociales a través de la política pública en la educación, muestren su pertinencia y congruencia con los diferentes planes de desarrollo a nivel Nacional, Departamental y

Municipal en cuanto a calidad educativa y cobertura educativa, como indicadores de análisis de la realidad del sector para así señalar las principales pautas que rigen el sistema educativo y se logre generar un impacto significativo en el quehacer de las instituciones educativas, en sus equipos de gestión y sus docentes para mejorar el nivel educativo y brindar oportunidades a la gente para acceder a la información, a la cultura y al desarrollo de habilidades de pensamiento y comunicación con el resto del mundo.

La política educativa debe trazar acciones fundamentales para atenuar las desigualdades ya existentes en la calidad de la educación y la distancia que hay entre los sectores no oficial y oficial, la distancia existente entre los municipios de la región y la distancia entre las áreas urbanas y rurales y entre clases sociales, pues se hace evidente en el nivel de desempeño muy superior a favor del sector no oficial y en los niveles de desempeño inferiores en contra del sector oficial.

Para finalizar es imprescindible, en la fijación de la política que todos los actores involucrados se articulen e integren y en especial se tenga una activa participación de los altos directivos de servicios educativos de la región, para explorar las posibilidades de diversos procesos económicos y sus efectos sobre la estructura jurídico-política y económica del sistema educativo regional, desde un enfoque crítico social, que contribuya a superar las dificultades generadas por el modelo de globalización neoliberal, y se tenga el noble propósito de producir conocimiento científico para mejorar la calidad de vida y corregir los defectos del gobierno democrático, reconociendo que toda política pública implica una acertada decisión y que es

fundamental que los actores involucrados tengan clara intencionalidad para tomarla, resolviendo la problemática y sin duda aprovechen la gran potencialidad de la región y se atiendan sus intereses, reconociendo el carácter público de la decisión tomada, definiendo el rumbo para alcanzar el fin y así se fije el sentido que debe tener la educación en un momento y espacio determinados.

3.2.4. Política Integral de Salud

Para la fijación de los lineamientos que recojan el marco dentro de esta importante política se debe partir de reconocer que los problemas de salud son generados o potenciados por las condiciones ambientales, sociales, culturales, políticas, económicas, educacionales, de hábitat y genéticos que afectan a las poblaciones en los diferentes ámbitos territoriales que conforman la región y el país y que los determinantes sociales de la salud consolidan tanto los factores protectores de las condiciones de salud como las causas primarias de la enfermedad, por tal razón se deben establecer los mecanismos que promueva una actuación articulada, no solo de los distintos actores que hacen parte de la red de prestadores de servicios públicos y privados de salud, sino de todos los actores involucrados en los sectores sociales y económicos, como la academia, las entidades territoriales, los reguladores, los aseguradores, las organizaciones de usuarios y las entidades vinculadas con la investigación y el desarrollo.

Para la formulación de la política de Prestación de Servicios de Salud es primordial verificar el acatamiento a los principios rectores que reconocen la heterogeneidad de la región y del país, el proceso de descentralización, la posibilidad

de diferentes modelos de prestación de servicios, la rendición de cuentas, la atención centrada en el usuario, la participación ciudadana y la salud como objetivo final del sistema; de tal forma que se logren conseguir los objetivos trazados y el desarrollo de las estrategias y líneas de acción que sin lugar a dudas exigen el compromiso por parte de las autoridades sanitarias nacionales y locales de cumplir con el papel de rectoría y vigilancia, así como un trabajo articulado para lograr el mejoramiento en accesibilidad, calidad y eficiencia de los servicios y para que dentro de cada uno se definan estrategias, líneas de acción y proyectos o programas a ejecutar.

La Política de Atención Integral en Salud que tiene como propósito esencial garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población, debe contener las estrategias e instrumentos que permitan la transformación del modelo institucional a través de las acciones y decisiones que conlleven en primera instancia a la atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria, a una gestión integral del riesgo en salud con enfoque diferencial de territorios y poblaciones y el cuidado integral, reconociendo la necesidad de explorar y fortalecer todas las posibilidades que tienen las comunidades de organizarse para solucionar sus problemas de salud y de articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus usuarios, admitiendo adicionalmente la necesidad de generar capacidades e incrementar habilidades en los individuos, grupos, organizaciones, instituciones y comunidad, con el fin de lograr los objetivos y metas del sistema de salud.

La política debe adicionalmente buscar y desarrollar mecanismos alternativos de seguridad social para los trabajadores informales de la región, que sin dejar de

lado la participación del Estado, promuevan la organización y empoderamiento de los trabajadores y sus familias y la articulación de otros actores dentro del proceso, pues debe de enfrentarse en la prestación del servicio, la problemática de la informalidad que trae consigo costos de índole social y económica sobre los trabajadores, ubicándolos en un lugar de mayor vulnerabilidad frente a los riesgos a que puedan estar expuestos, y esto junto con el hecho de que por sus bajos ingresos no pueden financiar sus esquemas de seguridad social, disminuye la capacidad de respuesta en torno a las circunstancias potencialmente peligrosas que se pudieran presentar.

Finalmente, se considera que la política no debe escatimar esfuerzos para buscar e identificar estrategias que permiten la articulación y armonización del aseguramiento, la prestación integral de servicios de salud y el desarrollo de las acciones y decisiones con programas en salud pública de acuerdo con la situación de salud de las personas, familias y comunidades de la región.

3.2.5. Política del Deporte

Se hace transcendental que la política pública regional para el desarrollo del deporte la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo debe generar los lineamientos que permitan orientar las acciones y decisiones al verdadero desarrollo humano, con capacidad y asistencia técnica bajo un enfoque diferencial, lo mismo que la adopción de mecanismos que garanticen las condiciones de gestión institucional y el desarrollo de infraestructura para la consecución y sostenibilidad de altos beneficios.

El objetivo de la Política Pública para el Desarrollo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo debe generar desarrollo humano, con capacidad y asistencia técnica con enfoque diferencial, para lograr el objetivo se requiere fijar acciones que busquen inicialmente aumentar la participación, el fortalecimiento de programas y accesibilidad al deporte, la recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre con enfoque diferencia y territorial.

Los mecanismos que desarrolle la política deben buscar objetivos específicos que conduzcan a una alta participación de los ciudadanos en cada uno de los programas que brindan la oportunidad de acceso al deporte, la recreación, a actividad física en la región, para que se tenga un aprovechamiento adecuado del tiempo libre y se logre así descender sobre la construcción y establecimiento de la agenda que logre abordar las diferentes esferas mencionadas anteriormente y que han de ser conceptualizadas en términos incorporados, entendiéndolo desde la multidimensionalidad pertinente, siendo esta una superestructura enredada que debe ser entendida para analizarse en profundidad.

Las estrategias que involucre la política deben conseguir el desarrollo permanente de las capacidades de las personas y su formación integral, así como la consecución y sostenibilidad de altos logros, optimizando la comunicación, divulgación, información e investigación científica en el medio para mejorar, adecuar y construir la infraestructura deportiva necesaria, unificando la acción del Estado en todos sus niveles, nacional, departamental, provincial y local con el fin primordial del disfrute de una mejor calidad de vida por medio de los programas y proyectos que permiten a todos acceder de manera equitativa, libre e igualitaria al deporte.

3.2.6. Política de Equidad de Género

Para la formulación y ejecución de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres, dentro del modelo de articulación se deben determinar inicialmente los lineamientos que señalen en primera instancia que se requiere para su construcción la necesaria participación de los actores involucrados y que las acciones y decisiones garanticen los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género.

Esta importante política debe asegurar el pleno goce de los derechos de las mujeres que habitan la región, garantizando el principio de igualdad, el respeto a la dignidad humana y la no discriminación, teniendo en cuenta las particularidades urbana y rural, trayendo grandes beneficios sociales y económicos a través del aumento de la productividad y la competitividad de la región; por tal motivo la construcción colectiva de la política es consecuente con la equidad, incluyente y próspera para todos los grupos y las diversidades de mujeres como las afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, indígenas, campesinas, Rrom, así como para todas las mujeres de diversas opciones sexuales y a aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como también las mujeres en situación de desplazamiento, discapacidad, las mujeres cabeza de familia, las madres gestantes y las víctimas de diversas formas de violencia basadas en género.

Esta política en el largo plazo, garantizará una vida libre de violencias, y espera que las mujeres de la región con la puesta en marcha de acciones sostenibles superen la brecha y se contribuya para que ejerzan sus derechos y responsabilidades en igualdad frente a los hombres, fortalezcan su ciudadanía desde las diferencias y

diversidades, desarrollen sus capacidades en libertad y autonomía, que con el tratamiento intersectorial en forma articulada por parte del estado se logre que actúen como sujetos sociales activos frente a su proyecto de vida y continúen contribuyendo al desarrollo de la región y con su aporte exista un reconocimiento de la sociedad en su conjunto.

Los objetivos específicos que busca esta política deben centrarse en contribuir y garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres avanzando en la eliminación de las practicas que reproducen y refuerzan la violencia y la intolerancia, para lo cual se debe desarrollar una estrategia que garantice a las mujeres el acceso a las oportunidades y a los bienes y servicios que brinda el Estado, garantizando un enfoque diferencial de derechos que permita el reconocimiento de las diferencias y diversidades de las mujeres, lo mismo que la transversalización debe estar presente desde la planeación y formulación de programas ,proyectos, y actividades hasta en las formas de valoración de su efectividad en los procesos de monitoreo y evaluación, fomentando la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones y fortalecer el reconocimiento de sus diferentes formas organizativas.

Avanzar en la transformación cultural con la superación de los imaginarios sociales, creencias y prácticas que refuerzan la discriminación y condiciones de inequidad hacia las mujeres se debe considerar como un objetivo esencial en esta política , brindando oportunidades y condiciones para promover autonomía económica, el acceso a los factores productivos como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, la asistencia técnica y la capacitación, fortalecerán la institucionalidad para contar con recursos financieros, técnicos y humanos

3.2.7. Política de Discapacidad

Como resultado de un proceso de construcción colectiva donde sus características sean de participación democrática, concertada, intersectorial, diferencial, transparente y de articulación de los actores involucrados de la provincia se deben establecer y desarrollar los lineamientos del marco orientador para la inclusión social de las personas con discapacidad dentro del modelo de articulación para la figura asociativa regional.

Siguiendo con claridad los principios rectores fundados en la Convención de la ONU para las Personas con Discapacidad, se debe verificar como la política de Discapacidad está impactando al interior del nivel territorial y las formas de interacción entre la Nación, el departamento y los municipios donde debe predominar el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; La accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; para de esta manera se ponga en evidencia el acceso a bienes o servicios de la región como medio para la garantía de sus derechos.

La entidad pública que nace de la figura asociativa establecida en el modelo de articulación y las entidades asociadas serán responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, previendo la implementación de las políticas, planes

sectoriales e institucionales, programas y proyectos; que promuevan, protejan y aseguren el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de la población con discapacidad, sus familias y cuidadores, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1618 de 2013, el CONPES 166 de 2013, los municipios tendrán la responsabilidad de adoptar los ejes y las líneas de acción de la política, e implementarlas y/o armonizarlas en el marco de sus políticas o planes municipales de discapacidad de acuerdo con sus competencias, características territoriales y poblacionales.

Con el propósito fundamental de potencializar el impacto y legitimidad de la política, se debe precisar los mecanismos para que se cumpla con los lineamientos y se ajusten a las necesidades propias de la diversidad; que la gestión sea eficiente bajo las competencias, roles y responsabilidades de cada entidad territorial asociada y estar acompañada de un sistema permanente de monitoreo, vigilancia y control eficientes para que se pueda ofrecer una eficiente rendición de cuentas a la sociedad, adicionalmente se debe contar con los actores diversos que permitirán tener una visión multidimensional de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para su efectiva inclusión social y se debe entonces involucrar de manera directa personas con discapacidad y sus cuidadores, quienes deben exponer su punto de vista sobre los principios y objetivos que deben guiar la política pública con el fin de garantizar el goce pleno de sus derechos.

Finalmente, con el propósito de determinar cuáles son las variables de mayor incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y se permita determinar cuáles deberán de ser los ejes estratégicos de la Política

Pública regional en Discapacidad e Inclusión Social, se precisa que las variables críticas se encuentran en las categorías de Igualdad y no discriminación, mostrando así que estas variables ameritan el direccionamiento de la acción pública puesto que son aquellas que generan mayores transformaciones en el conjunto y adicionalmente se debe tener en cuenta que dentro de las variables activas se encuentran Igual reconocimiento como persona ante la ley, Acceso a la justicia y Participación política y pública; si se desarrollan estas recomendaciones expuestas se podrá construir y determinar que el problema central radica en el desconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, familias y cuidadores y la política formulada las debe garantizar a través del desarrollo de acciones integrales que involucren el diseño universal, con accesibilidad, rehabilitación, desarrollo de capacidades, participación y fortalecimiento institucional, orientadas al desarrollo integral, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

3.3. Dimensión de Productividad y Competitividad Económica

La dimensión de productividad y competitividad económica forma parte ineludible en la implementación del modelo de articulación regional y de desarrollo sostenible y es el espacio de partida para determinar el desempeño de una organización y su desarrollo económico articulado y con plena armonía con la dimensión de equidad social cultural y sustentabilidad ambiental, teniendo en cuenta el análisis temporal y

espacial de los principales procesos y dinámicas que registran los sectores económicos en los ámbitos rural y urbano de la región .

Esta Dimensión tiene un gran objetivo dentro del modelo que es mejorar la productividad y la competitividad de la región, donde se incluyen acciones para promover la integración productiva, los encadenamientos responsables y el emprendimiento y finalmente la promoción del desarrollo de productos y servicios responsables, a través de la creación y generación de empleo decente de calidad e inclusivo y los encadenamientos responsables, con un excelente abastecimiento y una seguridad alimentaria que favorezcan el empoderamiento de productores locales, del agricultor y de esa manera ofrecer las propias condiciones de comercialización con precios justos para una buena retribución de su trabajo .

Es importante precisar que la dimensión ante todo busca un desarrollo sostenible que proteja al ambiente, que replantee el desarrollo como el que hasta ahora se ha generado para que no solo se interese por las ganancias, sino que sea necesario lograr un crecimiento económico donde se impacte lo menos posible al ambiente y que no cause serios desequilibrios económicos, y como consecuencia no genere pérdidas sustanciales, pues traería consecuencia en una caída de la inversión, el desempleo y se estancaría la economía regional.

La dimensión con la fijación de las políticas que a continuación se señalan, busca una relación directa de la generación de empleo decente, con la generación del valor del sector empresarial en la sociedad por la cantidad de empleos creados tanto de forma directa como indirecta, de estas con el pago de impuestos municipales,

regionales y nacionales y adicionalmente la incidencia en la simplificación de trámites, los encadenamientos locales y responsables, para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento, entre otros.

Las políticas de esta dimensión hacen un énfasis específico en la necesidad de desarrollar una coordinación provechosa entre el sector privado y el sector público, así mismo considera que debe existir la creación de una institucionalidad efectiva, eficiente y eficaz en la implementación de cada una de las políticas que sean formuladas, para que estas generen las estrategias con un análisis cooperado sobre la tenencia y el uso del suelo, las actividades agropecuarias, el sector manufacturero, el comercio y la prestación de servicios personales, el mercado laboral y la urbanización y con este análisis de información recopilada técnicamente y compartida gremialmente, permita a los planificadores, a los consultores, investigadores y el público en general tomar la mejores decisiones para el desarrollo económico regional compartido.

El modelo de articulación sin vacilaciones requiere que los actores involucrados promuevan una mejora en la productividad del uso de los factores de producción y que cada una de las políticas de desarrollo productivo sea estructurada dentro de ejes fundamentales que implican la mejora sustancial de la educación, emprendimiento, la innovación, la creación y fortalecimiento de interrelación estratégica industriales o de servicios, y la internacionalización.

3.3.1. Política de Abastecimiento Agroalimentario

La fijación de esta política dentro del modelo demanda primordialmente el propósito de generar el marco orientador que permita determinar lineamientos y

acciones intersectoriales e integrales que reconozcan y brinden a todos los ciudadanos que habitan dentro de la figura asociativa la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad; bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida vigorosa y activa.

En esta política es bueno conocer que intervienen varios factores, entre los que se destacan, la calidad y variedad de alimentos disponibles, el nivel de ingreso de las familias, el nivel de educación y de conocimientos sobre alimentos y nutrición, las condiciones ambientales y de salud y las desigualdades sociales y económicas, factores que puede conducir a prácticas alimentarias inadecuadas y las debilidades del sistema de abastecimiento de alimentos afectando el derecho a la alimentación de los habitantes de la región, su seguridad alimentaria y nutricional y su calidad de vida.

Se considera que la política se desarrolle bajo los siguientes principios orientadores: Derecho a la alimentación, equidad social, perspectiva de género, sostenibilidad, corresponsabilidad, respeto a la identidad y diversidad cultural y el desarrollo sustentable y debe describir con claridad su enfoque de derechos humanos y Territorial, sobre la generación de desarrollo a partir de la producción y ordenamiento de las demandas alimentarias; la articulación de actores públicos con los ejes que garantizarán el derecho a la alimentación con soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y por tal razón su objetivo, se debe centra en superar de manera progresiva la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los habitantes de la región con estrategias que centren su acción en un sistema de abastecimiento y distribución de

Alimentos saludables y agua , en la Inequidad económica y social y propiciar Prácticas saludables de alimentación y nutrición en todos los momentos del curso de vida.

Adicional a lo expuesto, la política requiere de la participación de todos los actores involucrados en el modelo y así mismo la articulación de estos con los instrumentos de planeación que en cierta medida inciden en la seguridad alimentaria y nutricional y con la identificación de los mecanismos de financiamiento que permitan la puesta en marcha de las acciones establecidas para el cumplimiento de los objetivos.

En esta política el proceso de construcción, empoderamiento y participación, es transversal y se constituye como elemento fundamental al ser incorporado en cada una de las líneas de acción para su avance y el de todos los habitantes de la región , por lo cual señalará que para su coordinación y articulación la instancia encargada cuente con un equipo técnico idóneo e interdisciplinario, responsable de la gestión y administración de los recursos, la coordinación de operaciones y el logro de los resultados tendientes al mejoramiento de los indicadores de seguimiento de la política de seguridad alimentaria y nutricional y de los objetivos de desarrollo y de los objetivos de desarrollo sostenible en la región.

La política debe incorporar un sistema de medición de indicadores de seguridad alimentaria y nutricional que permita precisar y construir colectivamente una serie de tendencias y desafíos con el fin gestionar adecuadamente los datos, indicadores y evidencia que conduzca a contrarrestar el aumento de la pobreza y desigualdad de ingresos, el aumento de la tasa de mortalidad por desnutrición aguda, la competencia por los recursos naturales, los cambios en el abastecimiento de la ciudad y sus efectos en particular en las poblaciones más vulnerables, las pérdidas y

desperdicios de alimentos, los cambios en la estructura económica, la imperfecta ubicación de espacios de comercialización , y de esta manera poder rendir cuentas de la situación alimentaria y nutricional y adicionalmente sobre el mercado laboral y la gobernanza en la región.

3.3.2. Política del Sector Primario (Agropecuario)

El propósito del establecimiento dentro del modelo de esta política es de impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y una reforma rural integral, promoviendo condiciones adecuadas y generando los lineamientos para avanzar, hacia un campo con mayor equidad e idoneidad siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el país y así se logre una excelente provisión de bienes y servicios, una precisa inversión, una apropiada innovación, un próspero emprendimiento y el desarrollo esencial de la agroindustria para la generación de oportunidades de bienestar y mayor equidad en la población rural de la región

De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los principales desafíos que enfrenta el sector agropecuario para alcanzar una mayor competitividad y equidad en la Colombia rural, se propone que la política involucrada en el modelo de articulación regional para este sector debe seguir los lineamientos nacionales que orientan y concentran los esfuerzos en tres pilares fundamentales , para responder a los desafíos y lograr la equidad en el campo colombiano, como son: el Desarrollo Rural, la Productividad + Rentabilidad = Competitividad y la Institucionalidad Moderna y Tecnificada.

Teniendo en cuenta que el sector agropecuario engloba aquellas actividades económicas que se relacionan con la obtención de bienes y productos que provienen directamente de la naturaleza a través del conjunto de conocimientos y herramientas necesarias para la obtención de productos vegetales a través de su cultivo, es decir, se trata del producto “directo”, que no ha obtenido ninguna conversión. es necesario determinar en la política los lineamientos para el ordenamiento social y productivo de la tierra, la inversión en provisión de bienes y servicios públicos y la generación de ingresos a partir de empleabilidad y emprendimiento rural y agropecuario; adicionalmente como quiera que se pretende la transformación y ordenamiento de la producción agropecuaria, la gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos, la inversión y el financiamiento y la gestión integral de riesgos, son indispensable los lineamientos en este importante eje estructural de la política lo mismo que desde la Institucionalidad Moderna y Tecnificada se conciban las acciones transversales a los dos propósitos anteriormente expuestos.

Es fundamental que en esta política se encadenen los objetivos de la política de abastecimiento agroalimentario y se precise que se debe impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo condiciones adecuadas como ya se manifestó para la generación de oportunidades de bienestar y mayor equidad en la población rural, logrando así un Ordenamiento Social y Productivo de la tierra, un adecuado y ágil proceso de restitución de la tierra, un ordenamiento y respeto por el uso productivo al interior de la frontera agrícola.

La política al fijar directrices que favorezcan la generación de condiciones habilitantes para la productividad y competitividad del sector agropecuario y el

desarrollo rural busca que se establezcan estrategias prioritarias para mejorar la calidad y cobertura de la infraestructura asociada a la conectividad vial y digital, para hacer más eficiente la comercialización agropecuaria, conectando las zonas productivas con los mercados internos y externos, con programas puntuales donde se prioricen y focalicen los planes de formalización de la propiedad, proyectos productivos, apoyo a emprendimientos y demás estrategias de esta política pública.

Finalmente, esta política debe fijar lineamientos para establecer una visión del Servicio de Extensión Agropecuaria que supere la tradicional asistencia técnica e incluya innovadores procesos para la formación del capital humano, capital social, el uso apropiado de tecnologías de la información y la comunicación y un creciente acompañamiento para el acceso a nuevos mercados y la adopción de un desarrollo sostenible, de esta forma lograr conseguir que a través de programas de Consultorías, asesorías y servicios prestados a Instituciones y Organizaciones varias, de programa de desarrollo de proyectos de Innovación y Tecnología, se generen mayores ingresos a partir de la asociatividad y emprendimiento agropecuario y rural, para que los jóvenes, las mujeres y pequeños productores, logren promover la transformación productiva agropecuaria y pesquera y adicionalmente por medio del ordenamiento de la producción, el desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales, que integren la producción industrial con la de pequeños y medianos productores se precise un mejor aprovechamiento de los mercados con énfasis en la admisibilidad sanitaria y aprovechamiento tanto nacional como externo.

3.3.3 Política del Sector Secundario (Industrial)

Dentro de esta importante dimensión de productividad y competitividad económica el modelo requiere que se establezca un conjunto de recomendaciones y de lineamientos para el diseño y ejecución de la política pública encaminada a mejorar el desarrollo productivo en la región con programas de Emprendimiento e Incubadora de Empresas y de programas de Inserción a profesionales en el mercado laboral y la empleabilidad.

Se trata entonces que la política establezca los parámetros para el desarrollo productivo dentro de los procedimientos industriales y la diversificación del aparato productivo regional, encaminándolo hacia bienes y servicios más diversificados y sofisticados que transformen las materias primas del sector primario y brinden un producto final con valor agregado para el consumo de la población, centrándose allí actividades de minería, construcción, actividades textiles, actividades de fabricación de autopartes, etcétera, que permitan ofrecer solución a la mayoría de restricciones que enfrentan las empresas y que les impide incrementar la productividad y favorezcan el crecimiento de la competitividad y el rendimiento económico.

Es importante para el establecimiento de esta política tener en cuenta los lineamientos dados por el fondo monetario internacional y el banco mundial, donde recomienda a los países en vía de desarrollo que deben adoptar políticas industriales como una herramienta para propiciar el desarrollo económico y cerrar la brecha existente entre las economías avanzadas y emergentes.

Es vital para la implementación de esta política y para que su alcance y su propósito contribuyan al modelo de articulación, tener en cuenta lo planteado por Dani Rodrik, prestigioso economista del desarrollo, en una intervención, en el London School of Economics; donde compartió sus ideas sobre la política industrial moderna, aplicables al caso colombiano y en particular muy útiles para la adecuada ejecución de nuevas estrategias y de esta forma hacerlo de una manera efectiva y en esa línea sugiere los siguientes tres principios:

“el Primero, el éxito de la política industrial está en abstenerse de escoger ganadores (seleccionar sectores) para, en su lugar, dejar ir a los perdedores, el reto está en identificarlos con rapidez para retirar apoyos puntuales con cargo a recursos públicos, el Segundo, como los apoyos generan incentivos a la búsqueda de rentas, son indispensables los mecanismos de garrote; no todo puede ser zanahoria. Así, los subsidios productivos siempre deben estar condicionados, sujetos a cláusulas de salida, y cada acción sometida a procesos rigurosos y continuos de monitoreo y evaluación. Rodrik cierra sus recomendaciones con la siguiente pregunta: si los burócratas monitorean a las empresas, ¿quién monitorea a los burócratas? Responde argumentando la necesidad de mecanismos de transparencia y responsabilidad (accountability), entre los cuales están: declarar de manera precisa los objetivos con metas monitoreables, hacer públicas las solicitudes de empresas y gremios, rendir cuentas periódicamente, y designar la coordinación de la estrategia a un líder del más alto nivel que, eventualmente, si las cosas no salen bien, asuma la responsabilidad política”.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es indispensable que al establecer la política industrial para la figura asociativa regional esta esté ligada y sea coherente totalmente con la política nacional y como fin primordial se fomenten, el desarrollo equitativo, el impulso y fortalecimiento de cadenas que generen alto valor agregado y determinen la consolidación de la competitividad como única instancia de concertación para el crecimiento económico sostenible y el fortalecimiento de la institucionalidad donde se promueva un cambio estructural en la producción y mejoren su competitividad.

La política finalmente debe garantizar entonces la estabilidad a largo plazo del desarrollo de los sectores productivos estratégicos escogidos para la región , asegurando inversión estatal en servicios públicos que incentiven la inversión privada y generando adicionalmente un marco institucional que mantenga el compromiso con los actores privados con el cumplimiento de las normas, con decisiones y tarifas especiales y unificadas en la industria y comercio; lo mismo que se deben establecer medidas específicas adoptadas para estimular la producción de bienes durables que fortalezcan y promuevan la competitividad a las PYMES con apoyo y asesorías orientadas a cerrar la brecha de productividad a la vez complementada con subsidios y recursos financieros para proyectos encaminados a mejorar la asistencia técnica para que mejoren la calidad de la mano de obra y así mejorar su eficiencia productiva.

3.3.4. Política del Sector Terciario (Servicios)

El modelo de articulación e interacción requiere que se establezca para el tercer sector de la economía consistente en la prestación de servicios, los lineamientos para

desarrollar las actividades que tienen relación con este fin e incluye las actividades que engloban todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población y que incluye subsectores como el comercio, transportes, telecomunicaciones, la medicina, la enseñanza, las finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos que ofrecen o prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas.

Se trata entonces de generar lineamientos para la adopción de la política para que este importante sector y su correcto funcionamiento sean más productivo y competitivo y tenga efectos positivos en el desempeño económico y promover un amplio rango de posibilidades para mejorar el empleo y su calidad, poder atraer inversiones y fomentar el incremento de ingresos y diversificar las posibilidades productivas con calidad e innovación.

La política debe generar y acudir a los instrumentos más adecuados y utilizados que puedan dar orígenes a las estrategias ejemplares que faciliten la apertura comercial más ajustada y a través de una conveniente y firme superestructura con instituciones sólidas, con reglas de juego claras, con la apropiación de habilidades para la población que enfrenta ese gran cambio y les permita competir con grandes ventajas ante los modelos económicos implementados por la competencia exógena de la región.

Esta política entonces debe expresar el conjunto de principios, iniciativas, procesos y medios diseñados e implementados por la figura asociativa con el propósito de coordinar, regular y orientar la conducta de los actores económicos y sociales

involucrados, hacia la consecución de objetivos específicos en cada sector de interés regional y estatal.

Es indispensable dentro de esta política referirnos a la política turística pues es relevante para la provincia por su importancia e impacto en el desarrollo económico regional y se deben en este preciso momento articular las estrategias locales y canalizarlas por medio de planes regionales, programas y medidas normativas regionales, que faciliten el alcance de los objetivos o metas predeterminados en este importante reglón económico de la región por sus altos atractivos e interés de los turistas visitantes por su valor cultural exhibido, su significancia histórica, su belleza, aventura y diversión y ricos y encantadores sitios naturales.

Como quiera que el reglón turístico se ha considerado fundamental mecanismo de articulación regional la política debe consolidar estrategias que mejoren la competitividad, que busquen el mejoramiento de la infraestructura turística, que fortalezcan la promoción y la comercialización con un adecuado y eficiente sistema de información y adicionalmente se implementen estrategias que generen estímulos a la demanda y a la oferta y la figura asociativa disponga de recursos que fomenten y apoyen las iniciativas productivas y que cada una de estas citadas estrategias se despeguen a través de programas y acciones de carácter asociativo.

3.3.5. Política de Ciencia Tecnología e Innovación

Se ha considerado últimamente, que el camino lógico para armonizar bajo impacto ambiental y crecimiento económico es con innovación científica y tecnológica. Por esta vital razón, la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación se deben

usar para posibilitar los procesos productivos en niveles de alta productividad, pero con bajo impacto ambiental pues estos sin dudarlo son agentes transformadores claves para alcanzar un desarrollo integral y sostenible, y que contribuyen a trazar un camino propio para mejorar la calidad de vida de las personas y desarrollar los territorios, por tal razón el establecimiento de una política en esta materia constituye, por lo tanto, una hoja de ruta para avanzar en la dirección de una sociedad del conocimiento y de un desarrollo integral y sostenible.

El modelo de articulación e interacción debe incorporar dentro de la dimensión de productividad y competitividad económica la política de ciencia, tecnología e innovación, que a través de sus lineamientos se de orientación a las acciones y decisiones que deben proponer las formas de intervención del estado dirigidas a la generación, fomento, difusión y aplicación del conocimiento científico, así como el aprovechamiento de oportunidades o la solución de problemáticas sociales, ambientales y/o económicas, a partir de la CTel, la cual se ha construido alrededor de tres marcos principales que tiene como primer perfil el enfoque lineal de investigación y desarrollo seguido de un sistema nacional, departamental y regional de innovación, terminando con un cambio transformativo.

La política *“toma en cuenta un ecosistema que promueve espacios de confianza, aprendizaje y sinergia, donde fluye el conocimiento y prospera el desarrollo de la tecnología y la innovación, a través de una vasta y creciente red de conexiones y nodos entre actores del mundo de la investigación, la empresa, el Estado, el emprendimiento, la innovación, la educación y la sociedad civil.”*

Inicialmente, la principal preocupación de la política pública era mejorar la competitividad, para lo cual era necesario mejorar el vínculo entre diferentes actores, la capacidad de absorción de tecnologías, la generación de capacidades empresariales y el emprendimiento, ahora la política tiene como objetivo central el de orientar estratégicamente los esfuerzos de la región promoviendo, comprendiendo y utilizando la investigación en todas las disciplinas, la tecnología y la innovación para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región generando y orientando estratégicamente los esfuerzos de la región.

De acuerdo con los nuevos parámetros la política, debe conducir al cambio transformativo lo cual implica la inclusión de la sociedad civil y los ciudadanos, no solo como consumidores de conocimiento e innovaciones, sino también como promotores y generadores de los mismos. Buscando cambios a nivel de los sistemas socio técnicos, con base en el trabajo con nichos (Colciencias, 2018)

La política se debe formular con el propósito de formación de capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y cooperación internacional y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad, adoptando acciones y decisiones para el desarrollo científico y tecnológico y para la innovación que se conviertan en ejes fundamentales del desarrollo regional y de esta manera sirva para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, así como de referencia para la formulación de planes y estrategias nacionales de corto, mediano y largo plazo en materia de CTel, los cuales para aprovechar oportunidades y cerrar las brechas que la región requiere.

La política debe adoptar los ejes de acción que buscan fortalecer la apropiación social de la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación en la región, promoviendo su comprensión, valoración y divulgación, promoviendo en primera línea el aporte de la CTel en la identificación y construcción de posibilidades de futuro comprometidas con un desarrollo sostenible e integral y fortaleciendo el ecosistema en su conjunto, con políticas y programas que propicien un avance sustancial de la I+D+i y la colaboración permanente entre actores nacionales e internacionales. Para así lograr fortalecer las capacidades institucionales del sistema público y generar las condiciones de entorno que permitan que el ecosistema CTel aporte al desarrollo sostenible e integral de la región y del país.

3.4. Dimensión de Integración Territorial

Esta Dimensión es un factor vital del desarrollo del modelo de articulación con el propósito de entregar al planificador territorial herramientas de análisis para gestionar adecuadamente el territorio, entendido no solo como la manifestación espacial del poder sino también donde se pueden enfrentar las desigualdades territoriales y lograr obtener capacidades para articular y promover diálogos y pactos entre las diferentes escalas de gobierno y una crecientemente heterogénea y reclamante sociedad civil.

Con esta dimensión de integración territorial, en el cual a través de políticas y estrategias construidas colectivamente se pretende generar un alcance para influenciar o controlar recursos y personas, a través de la delimitación y del control de superficies específicas y por ende su área de autoridad.

Esta dimensión permite a todas las entidades territoriales asociadas definir la ruta estratégica que guiará su gestión territorial , definiendo las áreas donde se realizan las relaciones entre fenómenos físicos y humanos, que dan lugar a un paisaje particular con miras a satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios públicos por ello debe brindar las políticas y lineamientos para el desarrollo de los ejercicios de ordenamiento territorial, identificar las capacidades con que cuenta, sus condiciones internas y externas que la caracterizan , realizar su evaluación e identificar los riesgos que eventualmente puedan afectar su gestión.

La dimensión conforma el desafío actual de los habitantes de la región, especialmente para quienes se desempeñan en el quehacer diario de la planificación territorial, apuntando a que algún día podamos enorgullecernos de que la articulación del Ordenamiento Territorial contribuya a la equidad territorial y a reducir los impactos negativos de las actividades humanas en su propio territorio.

Para el desarrollo de esta dimensión territorial que constituye una perspectiva clave para la articulación de la región, se deberán tener en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño territorial con el fin de enfrentar grandes desafíos derivados de la heterogeneidad en materia de oportunidades y condiciones de vida.

3.4.1. Política de Planeación del Desarrollo Territorial

En este modelo se reconocen una política de carácter estratégico de largo plazo, que tiene que ver con la planificación del desarrollo de abajo hacia arriba incorporando

la dimensión espacial que analiza las formas de uso y ocupación del territorio para eliminar los altos niveles de atraso pues el modelo integra las potencialidades con que cuenta el territorio con la excelente producción de los diferentes sectores, por tal razón la política se centra en el aprovechamiento de las ventajas comparativas del territorio para lograr un crecimiento planeado, organizado, apremiado y equilibrado.

Esta política genera como premisa la participación ciudadana y la generación de espacios políticos con una eficiente utilización de los canales democráticos para que de forma planificada se elimine el distanciamiento ciudadano de las instituciones, brindándoles la posibilidad de intervenir en procesos decisorios y de integración regional con planes estratégicos formulados colectivamente que logren la consolidación de un sistema de centros urbanos interconectados que sustenten e estimulen la concepción de empleo productivo, el crecimiento económico regional y el bienestar social

La política contempla la consolidación del proceso de descentralización y la eficaz aplicación del gasto público para fortalecer los niveles donde se presentan las necesidades ejecutando decisiones que permitan satisfacerlas y fortalezcan la debilidad operativa de los municipios, adicionalmente la política de planificación territorial del modelo pretende eliminar los desequilibrios municipales buscando la articulación del sistema urbano-regional, racionalizando el uso del suelo con la densificación y no expansión de los municipios, aprovechando de manera planificada las ventajas comparativas proveyendo la infraestructura básica y productiva en las ciudades alternas que les permita hacer efectiva sus potencialidades con un desarrollo autosostenible y centros de apoyo a sus áreas de influencia.

Con los lineamientos expuestos de esta política se hace necesario el uso racional del suelo para fortalecimiento de las áreas agropecuarias, la eficiente asignación de recursos del estado en la prestación de los servicios básicos, la descongestión en transporte y la disminución de distancias a los centros de trabajo para lo cual en materia institucional se debe proveer de un marco legal y financiero para el desarrollo regional con una mayor generación de ingresos y empleos para sus habitantes.

Como estrategia fundamental para esta política y dentro de la dimensión de integración territorial la formulación del plan estratégico regional se considera como el instrumento rector del desarrollo regional pues es aquí donde se expresan las Ilusiones, los sueños, la visión como objetivo de primer nivel, la misión como el camino a recorrer, los objetivos estratégicos que permitan conseguir la imagen objetivo y los medios y mecanismos para su formulación, implementación y consecución. Este instrumento de planificación, establece el ciclo director de las acciones públicas y de coordinación con el sector académico y el sector privado para materializar los lineamientos, su operacionalización y concreción y así se obtiene colectivamente a través de la aplicación de otros instrumentos de planificación como programas y proyectos.

El proceso integrado de planificación debe definir con claridad la etapa del diseño con análisis de características y tendencias regionales donde se desarrolle en primera instancia el análisis estratégico regional que involucra la evaluación de variables modeladoras regionales, el análisis de planes de impacto regional e

instancias de análisis prospectivo luego se definan las brechas de desarrollo y al final de esta etapa se tenga la evaluación de escenarios prospectivos

Una vez efectuado todos los requerimientos anteriores se debe proceder al diseño estratégico que involucra la Visión de desarrollo regional ,los ejes de desarrollo, los objetivos de desarrollo , la Negociación político-técnica, la programación de Iniciativas y los Indicadores y línea base para así llegar al modelo territorial que incorpora el Contrato Plan y la Consulta pública y evaluación ambiental ,para luego entrar al proceso de Aprobación del consejo regional o de la junta provincial.

Para consolidar la implementación del modelo de articulación se hace vital que en su marco estratégico se contemple una visión regional integrada a largo plazo para que de esta manera permita guiar el desarrollo del región como mínimo para los siguientes 16 años, generando un sistema de coordinación y desarrollo económico y creación de riqueza no en el entendido de la monetización, sino en la riqueza de comunidades felices con desarrollo social; el mejoramiento del medio ambiente articulado al direccionamiento y programación de desarrollo metropolitano, estableciendo criterios y objetivos comunes para el desarrollo sustentable de los municipios asociados.

El plan debe establecer los parámetros para desarrollar una metodología que desde una perspectiva funcional, permita caracterizar, monitorear y representar espacialmente los componentes, procesos, servicios y arreglos de la biodiversidad al nivel ecosistémico que deben ser incluidos en la definición e identificación de la estructura ecológica principal a escala regional y territorial incorporando el tratamiento

adecuado de recursos naturales compartidos, el manejo adecuado de cuencas y la descontaminación del río Bogotá.

El plan definirá con claridad la visión, la misión y los objetivos estratégicos y de bienestar en relación con los Hechos Metropolitanos y las competencias otorgadas a la región Metropolitana y a la provincia; es indispensable que establezca las políticas, estrategias, lineamientos de programas y proyectos mediante los cuales se lograrán dichos objetivos con metas e indicadores específicos.

Este instrumento rector determinará los lineamientos para la localización de la infraestructura de transporte, servicios públicos, equipamientos y espacios públicos de escala metropolitana y provincial, planificando en el mediano y largo plazo la distribución de la población en los municipios de tal forma que el territorio sea sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.

El plan estratégico regional establecerá la definición teórica y metodológica de los Problemas Públicos, que, tomados dentro de construccionismo social (entre muchas otras corrientes), deben erigirse a manera de fenómenos contruidos socialmente para ser llevados a nivel de agenda pública, y con ello, nutrir el proceso de construcción de estas políticas públicas y las que haya lugar desde la visión horizontal de la Región Metropolitana, pero, bajo la mirada particular del enfoque territorial. Estos cúmulos de acciones deberán responder con las decisiones pertinentes en materia de expansión del perímetro urbano de los municipios, tratar de manera propicia y responsable la ocupación del suelo rural, respetando en todo momento la autonomía constitucional de los Concejos municipales.

El plan estratégico de desarrollo regional debe contemplar los Programas de Desarrollo con Enfoque Regional- PDER, y se deberán establecer dentro del marco normativo requerido para afianzar e institucionalizar el modelo , como un instrumento de planeación y gestión para la transformación estructural de los fenómenos que se identifiquen y prioricen como hechos metropolitanos, regionales y provinciales , pero que actuarán dentro de los municipios que compartan vínculos asociativos dentro del modelo Provincial, o que, por cuestiones geográficas, ambientales y socioeconómicas tengan relaciones conmutativas, garantizando en primera medida, los derechos de las comunidades bajo un enfoque transformador, diferencial y multicultural.

Adicional a los enfoques estratégicos mencionados para la implementación del modelo este valioso e ineludible instrumento podrá ser conformado por las siguientes estrategias que facilitaran su plena operatividad:

- La estrategia de abajo hacia arriba-bottom up: Que promueve la participación, la apropiación y la corresponsabilidad de la población en la definición de su propio desarrollo.
- El enfoque integrado: Que fomenta la coordinación de acciones en diversos campos.
- Las alianzas horizontales: Que impulsan la colaboración, a nivel nacional y transnacional entre diversos actores, permitiendo además la vinculación del sector privado y del tercer sector (ONG´S), bajo esquemas alianzas estratégicas, para que, de manera conjunta se desarrollen procesos con una finalidad común, pero manteniendo la independencia de los involucrados, ejemplo, modelo ('win-win relation').

- La colaboración en redes: Que buscan la interconexión interna y externa de las áreas locales para compartir y replicar experiencias.
- La innovación: que conlleva el desarrollo de soluciones nuevas, específicas y diferentes, utilizando, entre otras cosas, recursos endógenos.

Esta política de planificación de desarrollo territorial que opera de manera integral, a través del plan estratégico brindará las soluciones exhaustivas para la movilidad y el transporte Metropolitano que logren accesibilidad de la población a la explotación de los recursos territoriales, a los lugares de trabajo y a los equipamientos y espacios públicos, contemplará socialmente el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública para alcanzar los niveles crecientes de salubridad ambiental y brindará los parámetros para el mejoramiento de las condiciones de vida urbana y rural en todo lo que tenga que ver con la oferta del recurso hídrico y su ciclo natural a mediano y largo plazo.

Adicionalmente, este instrumento vital e indispensable en la política de La planeación integral regional debe contener claros lineamientos y un conjunto ordenado de objetivos, metas, actividades y recursos para el manejo y disposición de los residuos sólidos del entorno metropolitano, fundamentado en la política de gestión integral de los mismos lo mismo que debe analizar la demanda efectiva de vivienda de interés social y las características de la oferta de vivienda, principalmente su estructura de costos y generar los mecanismos para la gestión del suelo para este tipo de vivienda que apunten principalmente a ampliar la cobertura de vivienda para los grupos más pobres.

Por último, el plan examina una fase final clave en su configuración con el fin de ligar la política de planeación estratégica del desarrollo regional a las decisiones de

inversión para funcionalidad del modelo, aspecto que en términos ejemplares debiera considerar una interface entre los objetivos y compromisos contenidos en esta política y la planificación del presupuesto, es importante que en este evento el modelo promueva , igualmente, mecanismos e instrumentos para la participación de diversas fuentes de inversión de distintos niveles: nacional, regional y local, públicos y privados incluso recursos aportados por instituciones supranacionales

El plan generará en su etapa de gestión y ejecución los mecanismos apropiados para el monitoreo con mesas técnicas territoriales y sectoriales, con un adecuado seguimiento de cada una de las iniciativas y el fortalecimiento de las unidades técnicas formuladoras que brinden difusión de los avances del Plan ; adicionalmente para su evaluación y actualización el plan generará mecanismos de evaluación política por el consejo regional o junta provincial ,la evaluación técnica de niveles de logro en el diseño estratégico, la evaluación de indicadores y se generarán las Actualización del rediseño estratégico.

3.4.2. Política de Articulación Territorial

Para afianzar la dimensión de integración territorial el modelo debe contar con una política que facilite la articulación entre los instrumentos de planeación de las entidades territoriales y la necesaria coherencia que debe existir entre los diferentes niveles; por tal razón la implementación de esta política de articulación territorial requiere componentes de alianza de los actores involucrados en el modelo de asociatividad regional los cuales deben convocar a todas las organizaciones sociales, empresas privadas e institucionalidad pública con el fin de que asistan en la construcción de una agenda común de intereses territoriales.

En la actualidad no hay política pública de ordenamiento solo concurre para nuestro caso la ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que establece que el ordenamiento territorial debe propiciar las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional, y establece que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad nacional encargada de coordinar la formulación, preparación y seguimiento de políticas y planes nacionales de Ordenamiento Territorial y su articulación con el Plan Nacional de desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades territoriales, así como entre los distintos niveles de gobierno. Para la coordinación horizontal intersectorial y vertical inter-territorial se apoya en el Consejo Nacional de Planeación que sirve de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

Se debe entender esta política de articulación territorial como los parámetros para las relaciones de negociación entre los actores involucrados con miras a definir procesos, acciones y relaciones concretas de concertación que facilitarán que el modelo de articulación sea considerado como el instrumento de carácter estratégico, articulado para el desarrollo con un horizonte de largo plazo.

La política debe buscar por esencia la especialización de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos de la sociedad, estableciendo el marco de restricciones y posibilidades que otorga el territorio para su materialización respecto del uso de su territorio y aporta fundamentos técnicos para orientar la gestión pública regional; desde este punto de vista, permiten establecer compromisos relevantes y

viabiles para la implementación del modelo y establecer las herramientas en función del modelo de ocupación territorial.

El propósito fundamental de la política de articulación, conociendo que en este nivel no existen mecanismos consolidados de articulación y coordinación horizontal entre los planes de desarrollo socioeconómico y los planes de ordenamiento territorial, dado el carácter incipiente del ordenamiento territorial se proponen definir las siguientes estrategias y sistemas; en primer lugar para la Gestión Integral del ciclo natural del Agua (captación, almacenamiento, distribución y tratamiento); sistemas regionales de Vías y Transporte Público Urbano (colectivo, mixto, masivo, individual tipo taxi); sistemas de Equipamientos sectoriales para la región ; estrategias para la seguridad ciudadana; la estrategia para la vivienda social y prioritaria en el ámbito regional y los instrumentos para la gestión de suelo dirigida a este propósito; la estrategia fundamental para el Ordenamiento del suelo rural y suburbano.

La política de articulación territorial debe fijar como imperativo que las normas acogidas por el modelo sean de carácter obligatorio y las entidades territoriales que se asocien deben sujetarse y adoptar en sus planes de ordenamiento territorial los objetivos y criterios establecidos por el modelo en materia referida a los hechos provinciales, metropolitanos y regionales , lo mismo que se adopten los mecanismos que garanticen el reparto equitativo de cargas y beneficios, generados por el ordenamiento territorial articulado ;adicionalmente la política debe establecer los mecanismo para la articulación y armonización entre el ordenamiento ambiental y el territorial a través del acatamiento integral de las determinaciones ambientales que son de carácter vinculante para los planes de ordenamiento territorial.

Por último, esta política pretende establecer que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), como Autoridad Ambiental, la coordinación de los siguientes instrumentos de ordenamiento ambiental y su articulación con las políticas de desarrollo socioeconómico y de ordenamiento territorial, tales como: Sistema de áreas protegidas, Planes de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas (POMCA), Zonificación de Riesgos de Desastres y Zonificación de Ecosistemas estratégicos.

3.4.3. Política de Infraestructura y Equipamiento

El modelo de articulación fija esta política pública enfocada a la infraestructura y el equipamiento sectorial, con el propósito fundamental de fijar los lineamientos para coordinar, planear, estructurar, ejecutar, administrar y evaluar los proyectos para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de tal forma que los actores involucrados en la implementación aborden los principales problemas sociales y ambientales derivados del rezago en mantenimiento en la infraestructura existente.

Al fijar esta política se debe tener claro que para lograr y desarrollar una infraestructura sólida y un equipamiento sectorial pertinente se hace estrictamente necesario la articulación de la labor de todos los actores y avanzar con sinergias entre los diferentes niveles de gobierno y organismos empresariales; solo de esta forma la comunidad regional alcanzará mayores niveles de bienestar y calidad de vida, dentro de un marco de equilibrio y sustentabilidad.

El camino implica que la política identifique con claridad absoluta la visión conjunta de la nación, los departamentos, las regiones, las provincias y los entes territoriales, para poder promover y financiar armónicamente los proyectos innovadores en distintas líneas de acción que permitan desarrollar una verdadera gestión orientada a la movilidad y a la promoción de tecnologías limpias y una excelente seguridad vial.

Lo anterior significa sin duda alguna que la política debe establecer como premisa para su perfeccionamiento de una estrategia específica de carácter presupuestario en la cual se deben ordenar un conjunto de proyectos de inversión, identificándolos y evaluándolos desde su viabilidad económica y proponer mecanismos que permitan la incorporación de iniciativas de concesión u otras formas de asociación público privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o relacionados; esta la política debe generar lineamientos para planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos su diseño y construcción, lo cual hace indispensables que se fijen instrumentos y acciones para captar y capacitar recursos humanos suficientes para construir y operar la infraestructura.

Dentro de las posibles estrategias de la política se debe concertar, crear y administrar un banco de proyectos de infraestructura y equipamiento público regional, que sean susceptibles de desarrollarse mediante concesión u otras formas de asociación público privada y susceptibles a ser financiados por el sistema general de regalías para proyectos regionales y provinciales adicionalmente se debe definir las

metodologías y procedimientos en las etapas de planeación, pre adjudicación, adjudicación, post-adjudicación y evaluación de proyectos a su cargo.

Para una correcta operatividad del modelo de articulación y de la figura asociativa que se genere la política debe fijar los lineamientos para que sean desarrollados y ejecutados los proyectos por agencias especializadas según el tipo infraestructura pública y se logren establecer las metodologías apropiadas para elaborar los estudios para definir tasas, tarifas, contribución de valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, explotación y mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los proyectos a su cargo.

Como quiera que los hechos provinciales, metropolitanos y regionales identificados y priorizados requieren de la infraestructura es importante en esta política precisar que el proceso asociativo es fundamental para resolver la logística, la forma de financiar y de ejecutar prioritariamente en los sectores de la movilidad y el transporte, en los Servicios públicos, en el abastecimiento y seguridad alimentaria en la reactivación económica y desarrollo regional, y en seguridad, convivencia y justicia e indispensable e inaplazable la infraestructura requerida en el Ciclo integral del agua potable y el saneamiento básico.

Finalmente, resulta de particular importancia fijar dentro de la política la estrategia para capacitar al personal del sector, para que tenga un perfil social que le permita atender las inconveniencias que se suscitan cuando se construye infraestructura sectorial y su equipamiento, pero no por eso menos importante, y si es

indispensable puntualizar por un entrenamiento a la población mediante herramientas didácticas para el uso responsable del equipamiento sectorial.

Es ineludible, que el modelo para su plena articulación dentro de la dimensión de integración territorial oriente y determine obligatorias todas las acciones y componentes relacionados en esta materia de las políticas de planeación del desarrollo territorial, de articulación territorial y de infraestructura y equipamiento se ejecuten de acorde con los lineamientos establecidos por el marco legal del modelo y definidos en los instrumentos de articulación de acciones entre los actores nacionales, las entidades territoriales y la sociedad civil.

3.5. Dimensión de Gestión Institucional y Gobernanza Multinivel

Para hacer posible el desarrollo sostenible del modelo y como se ha manifestado en las dimensiones descritas anteriormente, si se desea alcanzar un equilibrio dinámico entre lo ecológico, lo económico, lo social y lo territorial es indispensable y absolutamente necesaria la gestión institucional y de una gobernanza multinivel lo cual nos lleva a concluir que sin los acuerdos fundamentales entre los actores involucrados no es posible la plena implementación del modelo de articulación regional sustentable.

Por las razones expuestas, la dimensión institucional debe generar las políticas y estrategias para que las instituciones y actores involucrados sean capaces de hacer funcionar los consensos básicos para lograr implementar el modelo de articulación e

interacción regional; pero esto solo se consigue si en primera instancia se incorpora al proceso una verdadera democracia participativa con un compromiso inclusivo, libre, consiente y efectivo de los ciudadanos en las decisiones de operatividad y planificación regional para ejercer efectivamente sus derechos políticos y de control sobre las instituciones del Estado.

Adicionalmente, es necesario en esta dimensión que las políticas establecidas brinden los instrumentos y herramientas para hacer unas instituciones sólidas que garanticen la aplicación del marco normativo que se adopte en pro de los objetivos de la articulación y de asociatividad para el desarrollo sustentable del modelo teniendo en cuenta que solo los sistemas realmente democráticos, con armonía de poderes y respeto a la voz ciudadana, pueden servir de plataforma a este tipo de desarrollo.

3.5.1. Política de Gobernanza Multiescalar

Para la dimensión de gestión institucional la política de Gobernanza multinivel debe ser ejemplar para generar las acciones coordinadas de la asociatividad, para trabajo conjunto de todos los actores involucrados especialmente entre las autoridades locales, provinciales, Departamentales y de los distintos niveles de gobierno nacional para crearla y aplicarla con responsabilidad compartida y hacerla más efectiva, desarrollando estrategias de trabajo coordinado y positivo que contribuyen de manera firme al modelo de articulación e interacción regional.

Lo expuesto implica sin duda alguna, que hay que enfatizar y focalizar la atención no sólo en una sola entidad territorial sino también en las entidades territoriales de una provincia o de una región y por tal motivo a la hora de reflexionar

sobre planificación, gobernanza y desarrollo territorial sustentable se conciba desde la óptica provincial o regional a si se podrá entender con claridad total la gobernanza como un proceso de coordinación y conducción multiescalar, multinivel y policéntrica, y se reconozca como el proceso técnico y además político con toda esa complejidad, pero con un fundamental resultado de desarrollo articulado.

Para plena incorporación de la política se define la gobernanza como el conjunto de procesos de regulación por medio de los cuales los distintos actores influyen en las acciones sociales, económicas y ambientales y en sus resultados (Lemos y Agrawal, 2006). Cuando nos referimos a gobernanza según lo planteado por estos autores se presume la extensión de diversos actores, y que la gobernanza a nivel corporativo en algún sentido implica la coexistencia de los actores comunitarios con otros actores situados a nivel local y en otros niveles territoriales o jurídicos y administrativos. En este sentido, la gobernanza es policéntrica o multicéntrica, porque extender procesos de gobernanza demanda asumir la presencia de diversos actores que tienen grados de autonomía entre sí, por lo que constituyen diversos centros de toma de decisiones.

Dentro de esta política se debe de adoptar como característica fundamental que la gobernanza no solo es policéntrica sino además , multiescalar y multinivel, porque se produce un entramado de escalas de diversos niveles como el comunitario, el municipal, el provincial , regional, nacional e internacional por tal motivo se debe concebir para el modelo de articulación la gobernanza a multinivel porque opera en diversos niveles, en una escala como la jurídico-administrativa y esto es propio de los sistemas socio ecológicos, que operan desde formas mixtas de regulación, que incluyen organizaciones y reglamentaciones nacionales, regionales y locales,

articuladas con las organizaciones y reglas comunitarias (Veldkamp 2011) y según (Brondizio et al, 2009) la gobernanza policéntrica es definida como “arreglos institucionales que facilitan la coproducción, mediación, traslado y negociación de información y conocimiento al interior y entre niveles”

Teniendo claro las características enunciadas anteriormente, no cabe duda que la política de gobernanza requiere de acuerdos entre todos los actores involucrados que se encuentran situados en diferentes escalas y niveles y así bajo esta inferencia poder abordar toda la problemática e igualmente generar iniciativas en diferentes escalas y niveles que establecen un gran desafío para el modelo de articulación porque adicionalmente su conformación se genera con actores interdependientes, donde las acciones de unos afectan sin lugar a dudas el bienestar de otros por tal razón implica una coordinación, desconcentración y descentralización en la toma de decisiones.

Por ello, los sistemas policéntricos son sistemas con grados diferenciados de descentralización respecto a la toma de decisiones. En este marco, Ostrom (2015:365) plantea: “Con el término “policéntrico” me refiero a un sistema en el cual los ciudadanos son capaces de organizar no sólo una, sino múltiples autoridades de gobierno a diferentes escalas (...). Cada unidad tiene una considerable independencia para elaborar y hacer cumplir las reglas en un dominio de autoridad establecido y para un área geográfica específica.”

Por todas las razones expuestas, la política de gobernanza debe verse dentro del modelo como la organización que germina en un sistema sociopolítico, como el resultado conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores involucrados

donde como ya se ha manifestado se caracteriza por ser producto de los acuerdos entre la sociedad y el poder, utilizando métodos que garanticen reglas donde todos ganan y el bienestar colectivo sea el resultado final.

Si se logra trabajar bien en la construcción del modelo de articulación y bajo esta importante política se conduce a que las autoridades ,municipales , provinciales y regionales puedan conjuntamente colaborar con las nacionales y entre todas proporcionarse apoyo técnico, financiero, económico ,tecnológico o todos conjuntamente, garantizando la coherencia entre los planes locales, provinciales y los regionales para desarrollar visiones claras y coherentes , estableciendo mecanismos de financiación más favorables, generando condiciones de mayor seguridad y estabilidad que atraigan la inversión y así se logre compartir experiencias, competencias y conocimientos para facilitar la difusión de buenas prácticas y acciones innovadoras.

La adopción de esta ineludible política, permite congrega recursos, competencias y técnicas y combinar distintas competencias de trabajo colaborativo, técnicas y recursos de planificación para avanzar aprovechando las economías de escala, ahorrar tiempo y hacer que las cargas de trabajo sean más fáciles de llevar, gracias a que las autoridades locales y regionales comparten la carga mejorando el nivel de asunción de responsabilidad de las acciones, lo expresado converge en acciones más visibles, efectivas, coherentes y menos onerosas.

La consolidación de esta política nos conduce a optimizar los procesos de gobernanza multinivel, y nos lleva a implementarla dentro de los principios rectores que buscan la apertura y la transparencia, propiciando que la información llegue

fácilmente y sea bien comprendida por todas las partes interesadas y el público en general, que la participación sea amplia para todas las partes involucradas y que la Responsabilidad sea definida concretamente con los objetivos claros y la función específica de cada uno de los actores involucrados, que la efectividad conduzca a resultados esperados y se puedan evaluar sus consecuencias y por último que con plena coherencia se logre garantizar la articulación de acciones y decisiones.

3.5.2. Política de Modernización y Fortalecimiento Institucional

Al establecer esta política de modernización y fortalecimiento institucional dentro del modelo de articulación se pretende brindar a la figura asociativa, las orientaciones y lineamientos para lograr alinear el direccionamiento estratégico fijado en la dimensión de articulación territorial y sus políticas de planeación del desarrollo territorial y articulación territorial con una estructura organizacional y un modelo de procesos que facilite la operación y desarrollo gerencial.

La política de modernización de la gestión pública y el fortalecimiento institucional con el fin de lograr el objetivo general de Orientar, articular, interactuar e impulsar a todas las entidades territoriales hacia el proceso de asociatividad y a la modernización con una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo de la región, considera fundamental brindar los lineamientos con la finalidad de presentar la forma de su organización y de la identificación de lo que se puede desarrollar para mejorar e implementar las herramientas necesarias que brindarán como producto final la eficiencia, la eficacia y

la transparencia en el manejo de la figura asociativa y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Con el propósito de definir las directrices internas para el diseño organizacional, la adopción e implementación de la política de diseño organizacional y fortalecimiento institucional se enmarca dentro de los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, cuyo principal propósito se fundamenta en optimizar la gestión de la organización a partir del fortalecimiento de su estructura organizacional y el modelo de operación alineado con las políticas de planeación del desarrollo territorial y articulación territorial.

Los lineamientos que debe señalar esta política se centran en definir la estructura organizacional con la distribución interna de las diferentes dependencias con las respectivas funciones generales requeridas para cumplir con sus propósitos fundamentales y misionales para generar resultados y por tal razón su diseño debe estar soportado en una correcta definición de procesos y competencias asumidas o cedidas por las entidades asociadas y técnicamente justificadas a partir de la cadena de valor definida y los procesos que la componen, pues son la principal unidad de análisis a la hora de determinar y fortalecer capacidades en la figura asociativa.

Se considera que, el marco normativo requerido para el modelo debe precisar los pilares de la organización con clara determinación de establecer, sus órganos de dirección, el presupuesto por resultados, la gestión por procesos y la organización institucional, el servicio civil meritocrático, y el seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del conocimiento; lo cual implica en primera pretensión tener en particular un Consejo Regional o una junta provincial, como autoridad de superior jerarquía, y un

director de la figura asociativa determinada y lo mismo que las unidades técnicas que según sus estatutos fueren indispensables para el cumplimiento de sus funciones y competencias.

El modelo de articulación regional demanda de la política de fortalecimiento institucional que, como mínimo se requiera y se establezca en sus directrices y lineamientos de un máximo órgano de gobierno de la región o provincia y debe estar conformado por los alcaldes de las entidades territoriales que se asocien y cada uno con igualdad de derechos y deberes y pleno acatamiento del principio de equidad y su respectiva mesa directiva.

El modelo requiere que por particularidad se constituyan comisiones especializadas regionales: integradas por un grupo de trabajo compuesto por alcaldes de las entidades asociadas los cuales se deben encargar de las discusiones y aprobación en primera instancia de los planes, programas y proyectos en área o materia específica; las comisiones que se sugieren son: comisión para asuntos sociales y culturales, comisión para asuntos económicos y tecnológicos, comisión para asuntos ambientales, comisión para asuntos de infraestructura y ordenamiento territorial y comisión de manejo de lo institucional y legal, con la asistencia técnica de las secretarías departamentales del sector respectivo.

Para la dirección de la entidad administrativa de la figura asociativa la política institucional, generará los mecanismos para que el funcionario sea seleccionado de la lista de elegibles a través de un proceso meritocrático efectuado dentro del periodo constitucional de los asociados, y en lo posible sin posibilidades de reelección inmediata.

Como se ha establecido en la política de planificación territorial y teniendo coherencia con la operatividad institucional, se requiere que la política institucional genere las directrices para la creación, elección y conformación del consejo territorial de planeación de la figura asociativa que estará integrado por las personas que designe el director de la entidad asociativa, de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que defina el órgano supremo y deberán estar integrados por representantes de su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios.

De acuerdo con las competencias asumidas por la figura asociativa se establecerán las Unidades técnicas indispensables, con el fin de garantizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de la figura asociativa.

Para la ejecución de los planes, programas y proyectos esta política debe generar las directrices para constituir las agencias técnicas con el fin de ejecutarlos y de responder a los requerimientos técnicos de las comisiones especializadas y brindar asistencia técnica en la formulación del plan estratégico de desarrollo asociativo.

Es indispensable que la política de modernización y fortalecimiento institucional determine los lineamientos para definir mecanismos apropiados en la toma de todas las decisiones de la entidad administrativa por parte de las entidades integrantes respetando el principio de equidad regional y teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- ✓ Respeto integral de la autonomía y la equidad regional, el grado de acuerdo o unanimidad requerido.
- ✓ La toma de decisiones a la que se llega mediante la concertación del mayor número posible de opiniones, lo que implica una transacción que no requiere votación sino consenso
- ✓ El acuerdo de la mayoría de los participantes, persigue el objetivo de resolver o atenuar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria.
- ✓ Las opiniones minoritarias deben tomarse en consideración pues es improbable forzar el cumplimiento de la decisión.
- ✓ Se deben identificar y discutir todas las inquietudes, generar nuevas alternativas, combinar elementos de múltiples alternativas y tomar las decisiones a tiempo.
- ✓ El sistema de toma de decisión debe poner énfasis especial en la participación ciudadana.

La política de modernización y fortalecimiento institucional debe brindar los lineamientos para que la operación y funcionamiento del modelo, que sea por procesos y procedimientos y tenga, además, esta forma una ordenada interacción de actividades, identificando con claridad cuáles son los productos y servicios que entregará la figura asociativa dando efectivo cumplimiento a los grupos de valor, al contexto y la normatividad que le aplica.

Por tal razón la política analizará los insumos planteados en sus competencias dentro del plan estratégico provincial y/o regional, donde se tengan en cuenta el análisis de contexto, las caracterizaciones de los grupos de valor y la priorización de sus necesidades y su despliegue en las características de los productos y servicios y las obligaciones misionales que debe cumplir dentro de los requisitos normativos.

Una vez definidos los productos y servicios se debe identificar el ciclo de actividades principales, es decir las etapas consecutivas e interrelacionadas para generar ese producto o servicio, que permitirá identificar los procesos necesarios para la operación de la entidad y una vez identificadas las actividades comunes, se definirán los procesos que enmarcan la operación de la entidad asociativa, los cuales serán objeto de caracterización definiendo los rasgos diferenciadores de los procesos como ,insumos, salidas, proveedores, clientes y riesgos asociados que permitan ver de manera integral y secuencial la esencia del proceso y el aporte que hace a los objetivos institucionales y finalmente se deben clasificar por el tipo que corresponda teniendo en cuenta que son estratégicos, misionales, de apoyo o de evaluación, no se puede excluir ningún producto por tal motivo el análisis debe ser integral examinando la totalidad de los productos y servicios identificados por la entidad, considerando las actividades comunes, de modo tal que se establezca el mapa de procesos.

Dentro del contexto de la política de fortalecimiento institucional, se debe facilitarle el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad asociativa y a través de distintos canales; bajo principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad en el servicio, teniendo presente las

necesidades, realidades y expectativas del ciudadano y adicionalmente esta política facilitara el acceso a los tramites y otros procesos administrativos que brinda la administración asociativa implementando acciones orientadas a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos.

3.5.3. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Regional

El propósito fundamental de la participación ciudadana, desde la perspectiva de la gobernanza, y su fundamental papel en los procesos de formulación de la política pública en la gestión regional debe generar lineamientos para el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos y está ligada integralmente a los modelos de democracia.

A partir de la expedición de la nueva Carta Política de 1991, se operó un giro radical dentro del sistema constitucional del Estado colombiano, con el fortalecimiento de la democracia participativa y el señalamiento de nuevos mecanismos de participación. La imperiosa necesidad de la intervención ciudadana en la toma directa de las decisiones que a todos atañen y afectan, así como en el control permanente sobre su ejecución y cumplimiento determinó una extensión e incremento de los espacios de participación de la comunidad, así como de procedimientos que garanticen efectivamente su realización. Lo anterior impuso un rediseño de la participación del ciudadano, tradicionalmente restringida al proceso electoral, para incluir esferas relacionadas con la vida personal, familiar, económica y social de los individuos en cuanto identificados como verdaderos sujetos sociales. (Corte Constitucional, 2000)

La participación ciudadana es indispensable en todas las instancias de la construcción del modelo de articulación e interacción por tal motivo la política debe en primera instancia fijar todas las directrices para la construcción colectivamente del marco normativo que contribuya a establecer el modelo asociativo por tal motivo se debe fijar los parámetros de participación ciudadana para que se identifique las necesidades requeridas por los ciudadanos para la garantía de sus derechos o para la priorización de las mismas logrando así que el modelo asociativo oriente el objetivo de la formulación de su plan, programa o proyecto.

Para el transcurso de la consolidación del proceso asociativo se debe reglamentar el mecanismo adoptado en el marco normativo y de esta manera la participación ciudadana decidirá sobre la determinación de asociatividad, si es conveniente bajo los parámetros fijados en la ley la vinculación de su entidad territorial a la figura asociativa.

La política debe fijar adicionalmente los parámetros para que, en la formulación de planes, programas, o normas que se requieran expedir y en su ejecución la participación ciudadana, sea decisiva, convocando a los interesados a intervenir, e incorporando las mejoras que tengan lugar de acuerdo a los comentarios recibidos a sus ideas que apoyen a la entidad en la identificación y solución de problemas.

Un momento que la política debe precisar al establecerse las directrices para la participación ciudadana en la identificación y priorización de los hechos regionales, metropolitanos y provinciales para lo cual se debe contemplar los mecanismos necesarios para que la comunidad participe activamente en la iniciativa de programas y proyectos con claros criterios de identificación y priorización, con tal propósito se

recomienda analizar el capítulo IV de dinámicas sectoriales y mecanismos e instrumentos para el proceso de financiamiento y su adecuada operatividad, donde se establece con claridad los pasos para priorización y ejecución de los hechos metropolitanos, regionales o provinciales.

La política de participación ciudadana establecerá necesariamente los mecanismos para el Control y evaluación e invitará a la ciudadanía a hacer el seguimiento, evaluación y control a su gestión, creando canales para que de manera permanente opine sobre las consecuencias y manifieste su interés en hacer control social sobre los resultados e impacto de los mismos.

La política de participación ciudadana debe constantemente propiciar un debate amplio sobre el balance y rediseño de la oferta institucional de la figura asociativa y fortalecer una oferta articulada de instancias y canales que fomente el relacionamiento entre los niveles locales, provinciales, regionales y nacionales, determinando y mejorando los espacios de rendición de cuentas al igual que los demás escenarios de participación expuestos, de manera que se garantice la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública; en el marco de lo dispuesto en artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, por tal razón el proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres elementos centrales, que permitan garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a participar y vigilar la gestión, como son la información, el dialogo y la responsabilidad; para concluir, el modelo asociativo debe incluir en los planes de gestión de manera explícita la forma cómo se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia.

Por último, la política de participación ciudadana brindará los mecanismos más apropiados para desarrollar estrategias que faciliten su adopción por tal razón se sugiere tener en cuenta los siguientes pasos para que se garanticen los derechos de participación en las fases de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública:

1. Identificar y caracterizar los grupos de valor, sus necesidades de información, los temas que despiertan mayor interés con el fin de garantizar que a los escenarios de participación acudan personas interesadas en conocer los avances de su gestión para así analizar las debilidades y fortalezas.
2. Revisar todas las actividades de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en las cuales se generarán espacios de participación ciudadana, identificando los temas que pueden ser de interés para éstos y los escenarios en los que se puede empezar a involucrarlos para que su aporte incida en la toma de decisiones
3. Identificar si la participación ciudadana hace parte de la fase de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y/o evaluación de la gestión pública, para definir claramente los canales y los medios que se emplearán para llevar a cabo dichas acciones y actividades.
4. incluir todas las acciones transversales de sensibilización, capacitación y apropiación de conocimiento dirigidas a la comunidad y a los servidores públicos con el fin de resaltar los temas más relevantes de la entidad para lograr una verdadera interacción y adecuada participación.

5. Asignar el talento humano, lo mismo que los recursos presupuestales y materiales que se requieran para brindar los mejores y efectivos escenarios para la participación y lograr ejecutar las acciones diseñadas para la implementación eficaz y efectiva de los mecanismos de participación ciudadana.
6. Establecer metas e indicadores cuantificables con los cuales sea posible hacer un adecuado y estructurado seguimiento a todas y cada una de las actividades de participación ciudadana y de los grupos de valor e interés específicos en la gestión de la asociatividad.
7. Desarrollar las herramientas, instrumentos y mecanismos que permitan una adecuada sistematización y consolidación de los resultados obtenidos en cada espacio de participación de la ciudadanía para cada etapa del ciclo del proceso de gestión institucional y sirvan para divulgar los resultados y para la retroalimentación de las partes comprometidas.

Todos estos procesos y procedimiento incorporados en la política de participación ciudadana, generarán un adecuado diálogo e interacción cultural con los diversos grupos de valor y diferenciando que su papel no se reduce a meros conceptos y que sus posturas fueron vinculantes en el marco de construcción colectiva de una eficiente gestión institucional.

3.5.4. Política de Integridad

Con la implementación de esta política que es relevante para la dimensión de gestión institucional y gobernanza multinivel, pues en ella, se busca que la figura asociativa desarrolle una cultura ética que refuerce la transparencia y por tal motivo genere la autorregulación como uno de los puntos más notables para el modelo y sus responsabilidades administrativas dentro de un adecuado sistema integral de ética e integridad.

Es necesario determinar como premisa fundamental que la Política de Integridad debe ser incorporada por la entidad asociativa desde el momento de la planeación permitiendo aumentar la confianza por parte de los actores involucrados en la hélice cuádruple de articulación del modelo.

Esta importante política debe generar los mecanismos de articulación plena de todos los actores involucrados y por tal razón, partiendo desde la entidad asociativa la cual debe ver la integridad reflejada en la inclusión en los diferentes instrumentos de planeación y direccionamiento, en las acciones encaminadas a institucionalizar y fortalecer la transparencia, en la participación de los ciudadanos en la gestión, en la escogencia por mérito y en la cualificación de sus servidores, seguidamente desde la óptica de los funcionarios o servidores públicos como ejes fundamentales de la entidad asociativa se debe implementar dentro del marco de las acciones cotidianas de su labor, así como en su ingreso y permanencia en el servicio y por ultimo desde la parte de los ciudadanos quienes deben asumir un papel de corresponsabilidad y participación en la gestión pública dentro del cuadro de una gestión más abierta e incluyente.

Entendiéndose entonces que la integridad es una característica personal, que en el sector público se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor, requiere entonces que por parte de cada miembro que integra la figura asociativa se despliegue un comportamiento especial un deber ser particular y una manera específica de actuar bajo el sentido de lo público.

Esta política debe definir los mecanismos ,instrumentos y herramientas que integran el sistema de ética e integridad cuyas partes fundamentales se deben establecer bajo los parámetros integrados por un código de integridad y manual de organización y procedimiento claro, que delimite las funciones y responsabilidades y que especifique las cadenas de mando ,con clara socialización y publicación que introduzca a los miembros de la organización, con el sistemas y los mecanismos que sean realmente aplicables y con un claro sistemas de control, vigilancia y auditoría que examinen periódicamente el cumplimiento regulatorio de su acatamiento y empoderamiento en todas las áreas de la figura asociativa y se aseguren la transparencia y la publicidad de sus intereses.

“Para una adecuada y efectiva implementación del Sistema integral de ética e integridad, una vez se haya establecido el código de integridad se debe fijar los lineamientos para crear un Comité de Ética que promueva la ética empresarial, vigile el cumplimiento y establezca sanciones y a la vez se cuente una línea de denuncia confidencial a medios para reportar las conductas infractoras diseñando las estrategia de comunicación interna y externa y así se logre transmitir los valores del Código de integridad , las funciones del Comité y la línea de denuncia”.

3.1.5. Política Integral de tratamiento de Riesgos en la Gestión

En esta parte del documento de establecimiento del modelo, se hace clara referencia a las directrices para gestionar el riesgo en cada una de las etapas, con la metodología que se debe adoptar para que permita que la gestión de riesgos de la estructura del modelo y del desarrollo de cada uno de sus objetivos específicos y dimensionales permita cumplir cabalmente con cada una de las etapas diseñadas en el proceso que implica: identificación, evaluación, calificación, priorización, mitigación y monitoreo del riesgo.

Con esta política de gestión de riesgos, se proyecta que la figura asociativa que propone el modelo de articulación cuente con unos lineamientos generales para que sea aplicable a todos los procesos, proyectos, productos de la entidad y a las acciones ejecutadas por los servidores y todas las partes involucradas durante el ejercicio de sus funciones.

Teniendo en cuenta que el "riesgo" se define como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto negativo sobre el cumplimiento de los objetivos; por ello es que la gestión de riesgos del modelo de articulación debe plantear la protección y creación de valor a través de la identificación y valoración de los riesgos, iniciando por la estrategia y haciéndolo extensivo a cualquier nivel de actividad seleccionado por la propia organización.

El modelo de articulación debe definir su política del riesgo tomando como referente los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en los procesos, así como los del Modelo Estándar de Control Interno, en lo referente a las

líneas de defensa, los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo de FP – 2018, la cual articula los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital y la estructura del Sistema Integrado de Gestión – SGI en el módulo de riesgos.

Todos los procesos y dependencias dentro del modelo deben unificar los lineamientos en los aspectos comunes de las metodologías para la administración de todo tipo de riesgos y fortalecer el enfoque preventivo con el fin de facilitar a la entidad, la identificación, análisis y evaluación de cada uno de ellos, debe determinar los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos (esquema de las líneas de defensa) y proporcionar información derivada del monitoreo a la gestión de riesgos, con el establecimiento de acciones de control detectivas y preventivas para los riesgos identificados y la actuación correctiva y oportuna ante la materialización de los riesgos identificados

Es importante e indispensable que dentro de la implementación del modelo de articulación se deba reconocer esta realidad y por ello al poner a disposición los lineamientos de esta política de gestión de riesgos, se considera como una herramienta con enfoque preventivo y proactivo para el manejo de los riesgos, así como el control en todos los niveles de la entidad.

La implementación incluye los niveles de responsabilidad y autoridad por líneas de defensa frente al riesgo donde se defina prioritariamente que en primera instancia la línea estratégica debe establecer y aprobar la política de administración del riesgo con énfasis en la prevención del daño antijurídico, la primera línea debe identificar y valorar los riesgos que pueden afectar los programas, proyectos, planes y procesos a

su cargo y actualizarlos cuando se requiera , para la segunda línea su fin primordial se centra en asesorar a la línea estratégica en el análisis del contexto interno y externo, para la definición de la política de riesgo, el establecimiento de los niveles de impacto y el nivel de aceptación del riesgo y acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en la identificación, análisis, y valoración del riesgo y definición de controles en los temas a su cargo y con enfoque en la prevención del daño antijurídico y con relación a la tercera línea su acción se centra especialmente en proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos.

En la política de gestión de riesgo, debe quedar explícita la guía de acción donde en su primera pretensión se asuma el riesgo, se defina su periodicidad ,se formule el mapa de calor y se administre por medio de las actividades propias del proyecto o proceso asociado y se realice el reporte mensual de su desempeño; posteriormente se presente el accionar ante los riesgos materializados y su tipología desarrollando el seguimiento a cada acción de control en cada proceso y con la adecuada revisión se logre la eliminación del riesgo.

Esta importante e ineludible política, llevará en la implementación del modelo a asumir su adopción y de esta manera se logre alcanzar los objetivos estratégicos, por tal razón, no es posible su aplazamiento y como prioridad se hace necesario establecer los recursos que se requieren para gestionarla y no escatimar esfuerzos para mitigar impactos.



CAPÍTULO IV

**DINÁMICAS SECTORIALES Y
MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA
EL PROCESOS DE FINANCIAMIENTO Y
SU ADECUADA OPERATIVIDAD**

MO AIR

CAPÍTULO IV

DINÁMICAS SECTORIALES Y MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA EL PROCESOS DE FINANCIAMIENTO Y SU ADECUADA OPERATIVIDAD

4.1. Dinámicas Sectoriales

El modelo de articulación e interacción es esencialmente el instrumento que permite la planificación integral y la gestión asociativa de las entidades territoriales y contribuye al proceso de construcción colectiva del territorio y esta asociatividad tiene que darse de manera progresiva, gradual y flexible, logrando así una adecuada organización político administrativa del estado en el territorio, generando y fomentando el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos lo cual implica que el modelo asociativo debe identificar y asumir aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman la región metropolitana o provincia administrativa y de planificación y por tal razón debe establecer los mecanismos para priorizar los programas que los amortigüe, determinando su ejecución a través de un componente altamente técnico, teniendo en cuenta que el ámbito de competencias solo le permite actuar en los campos asociados

a las competencias que le han sido transferidas o delegadas dependiendo del alcance del fenómeno generado.

Por lo mencionado anteriormente es indispensable en esta parte del documento que establece el modelo de articulación , definir con claridad cuál es el contenido y desarrollo de los parámetros de identificación y regulación de hechos provinciales y los hechos metropolitanos y estructurar una metodología que incorpore un marco participativo, un componente técnico y el control político, con el objeto de garantizar la ejecución de planes y programas y proyectos de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a cargo de la figura asociativa que brinda el modelo.

A continuación, se proponen los parámetros que se deben definir un hecho metropolitano o provincial dentro de los siguientes criterios técnicos fundamentales:

1. Se debe establecer una definición clara que exponga de manera unívoca y con precisión la comprensión del concepto de lo que es esencialmente el Hecho Metropolitano y el hecho provincial.
2. Se debe precisar el alcance territorial donde haya claridad que el territorio es el soporte físico de la región metropolitana o la provincia y el espacio legítimo para el ejercicio de sus competencias donde el criterio y prioridad gira en torno a tres elementos, las actividades humanas, el espacio en que se ubican y el sistema que entre ambos configuran.
3. La eficiencia económica se debe demostrar con la óptima utilización de los recursos disponibles con las combinaciones de menores costos y mayores

beneficios que maximicen la satisfacción de la comunidad y la solución integral de sus necesidades de bienes o servicios que no ofrecen las entidades territoriales individualmente.

4. Se tiene que demostrar la capacidad técnica de la región metropolitana o la provincia administrativa y de planificación para movilizar los conocimientos, las aptitudes y las competencias especializadas necesarias para cumplir los objetivos estratégicos de manera más eficientes y eficaces que en el nivel municipal para lograr satisfacer las necesidades y las prioridades de la comunidad.
5. Demostrar la capacidad financiera que se tiene por la región o la provincia administrativa y de planificación para poder llevar a cabo inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo, tanto corto, medio o largo plazo con el fin de lograr los objetivos previamente determinados asegurando liquidez y margen en las diferentes operaciones que no prometen individualmente los municipios.
6. Explicar la magnitud cuantitativa del impacto social del cambio significativo y positivo en las personas y comunidades como resultado de una acción, actividad, proyecto, programa o política al contrarrestar el Hecho Metropolitano o hecho provincial y solucionar el problema de la población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios).
7. Ofrecer una Organización político-administrativa que admite evaluar si el soporte institucional y administrativo que exige la atención del hecho metropolitano o hecho provincial debe corresponder con un nivel superior al municipal, como la

instancia más idónea para entender el problema o situación desequilibrante.

Para determinar la priorización y ejecución de un hecho provincial o metropolitano se definen los siguientes criterios encasillados en una estructura piramidal.

1. En primera instancia, requiere que la iniciativa municipal y ciudadana para la atención del Hecho Metropolitano o provincial sea refrendada por el Consejo Territorial de Planeación, donde están representados todos los actores municipales involucrados en el desarrollo territorial (ver figura 1).
2. En segundo orden, la iniciativa debe ser priorizada por el Consejo de Planeación provincial y aprobado por la junta directiva de la Provincia Administrativa de planeación y determinar si es un hecho identificado es provincial si es un hecho regional o metropolitano el cual debe continuara con el tercer paso.
3. El tercer paso, corresponde al hecho metropolitano que debe tener la viabilidad primaria de carácter técnico, económico, ambiental y social a cargo de una de las Comisiones Especializada del Consejo de planificación Regional con apoyo y asistencia técnica de las secretarías departamentales del sector y las Agencias Especializadas.
4. El cuarto paso es la Aprobación o devolución del hecho metropolitano por parte del Consejo Regional como máximo órgano de gobierno.
5. El quinto paso determina la Ejecución del hecho sea provincial, metropolitano

o regional por Agencias Especializadas: Estas se enfocan en un Hecho específico, en el cual tienen especialidad y una vez asumido proveen atención específica y entregan resultados de alta calidad; estas agencias pueden ser de naturaleza pública, privada o mixta.



Figura 9. Criterios de Priorización de ejecución con estructura piramidal. Fuente: Propia del autor.

Se considera como hecho ese fenómenos o situaciones ciertas que responden a problemas o potencialidades que afectan, impactan o benefician a un número plural de entidades territoriales que comparten dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, que se encuentren vinculadas institucionalmente en la provincia de sabana centro, en la Región Metropolitana y cuya acción coordinada garantiza resultados de mayor efectividad, equidad o equilibrio.

1. Hechos provinciales: corresponden a la escala territorial y vincula los municipios de la misma provincia administrativa y de planificación, en la cual se presentan relaciones cuya dependencia funcional se expresa en situaciones provinciales de convergencia entre sus miembros asociados.
2. Hechos Metropolitanos: corresponden a la escala territorial de alta proximidad con respecto a la ciudad de Bogotá, en la cual se presentan vínculos de movilidad residencial y conmutación intensos entre el nodo urbano central y un territorio urbano-rural que conforma la aglomeración metropolitana principal.
3. Hechos Regionales: corresponden a una escala sub regional más extensa, que excede el entorno de lo “circunvecino” y vincula municipios más distantes que no colindan con el Distrito Capital o cuya relación funcional no se limita a los nodos, sino que se expresa en situaciones más generales o de convergencia entre todos los miembros.

Los Hechos provinciales, metropolitanos y regionales identificados y priorizados que se consideran que el modelo asociativo debe abordar son los siguientes:

1. Movilidad y transporte;
2. Servicios públicos;
3. Abastecimiento y seguridad alimentaria;
4. Desarrollo económico regional (reactivación);
5. Seguridad, convivencia y justicia;
6. Ciclo del agua.

Para que la ejecución del hecho provincial, metropolitana tenga un adecuado control político y ciudadano sobre la atención del hecho metropolitano o el hecho provincial se deben establecer con claridad en el proceso de regulación normativa del modelo con los siguientes componentes.

1. Mecanismo claro que establece con iluminación la manera de ejercer el control político sobre la atención del hecho metropolitano o del hecho provincial a través de los concejos municipales y la asamblea departamental.
2. instrumentos, que permitan a los concejos, a la asamblea ejercer sabiduría sobre el director de la región metropolitana, el director de la provincia administrativa y de planificación y contribuir al mantenimiento del balance de poder entre las distintas ramas del poder público;
3. Mecanismos e instrumentos para realizar las siguientes actividades del control:
 - ✓ Las citaciones e informes;
 - ✓ La Moción de censura;
 - ✓ La Audiencia Pública;
 - ✓ y los Mecanismos virtuales.

Para garantizar la afectiva participación de la comunidad en el proceso de seguimiento a los hechos metropolitanos o a los hechos provinciales se propone que la reglamentación y los parámetros faciliten y brinde los mecanismos para una adecuada interacción mediante los cuales los ciudadanos puedan opinar sobre cada uno de los

hechos metropolitanos o provinciales y se logre crear un Consejo ciudadano provincial ,metropolitano y regional como Instancia de veeduría ciudadana donde exista delegación y representación de las Juntas de Acción Comunal con claras funciones y acciones temáticas.

Adicionalmente, se ha considerado que es necesario que la norma defina el mecanismo más apropiado para que el municipio con mayor impacto del hecho metropolitano o el hecho provincial por su concentración, alcance e incidencia socioeconómica y ambiental tenga prelación en la decisión de la ejecución del hecho metropolitano o el hecho provincial.

4.2. Patrimonio y Rentas del Modelo de Articulación y Asociatividad

La financiación del modelo es vital e indispensable para su operatividad, por tal razón a continuación se sugieren los mecanismos que nos brinden la accesibilidad y disponibilidad de diferentes fuentes e instrumentos alternativos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo para la asociatividad territorial , ya que normalmente como se ha vivido en la financiación de esquemas asociativos se dispone de una suma limitada de recursos financieros para realizar las operaciones y por tanto se necesita en alguna medida tener certeza sobre cuáles pueden ser las posibilidades de obtener los recursos para satisfacer las inversiones relacionadas con el desarrollo territorial.

Es necesario precisar que debe existir de acuerdo con sus competencias de parte del congreso de la república y de la asamblea departamental la regla que de

claridad ante la insuficiente normatividad sobre la generación, accesibilidad y disponibilidad de fuentes de financiación para los esquemas asociativos y deben brindar de manera clara las facultades, los procedimientos y los mecanismos que ofrezca alternativas ante la debilidad operativa debido a la carencia de recursos para financiar su funcionamiento y desarrollo.

Por tal razón se sugiere que se faciliten y reglamente los mecanismos de financiación para la operatividad, funcionamiento y ejecución de proyectos de las asociaciones para que tengan impacto territorial, pues el artículo 17 de la ley 1454 señala que una vez conformados los esquemas asociativos, adquieren la naturaleza de entidades administrativas de derecho público, dotadas de personería jurídica, pero no define los mecanismos para el patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman y que permita prestar conjuntamente servicios públicos que pueda cumplir funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional y ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación pero no hay la delegación de recursos para consolidar ese mandato legal.

Mediante ley 2056 de 2020 el Congreso de la Republica rediseñó el régimen de distribución de regalías en Colombia, adoptando el Sistema General de Regalías -SGR-. Esta reforma fortalece el enfoque regional en la planificación, busca reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población generando acceso para las regiones, pero son limitados los mecanismos para los demás esquemas territoriales, sin embargo, se solicita que en la reglamentación se debe emitir por parte del gobierno nacional y departamental los mecanismos adicionales para incentivar la asociatividad y su operatividad.

Como el modelo genera la asociatividad y esta es la mejor herramienta que permite abordar de manera mancomunada, el diseño, implementación y ejecución de programas, proyectos y acciones de desarrollo de interés común, se presentan las siguientes iniciativas para que las autoridades nacionales, el congreso de la república, el gobierno departamental y la asamblea brinden los mecanismos y fuentes financieras para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo, competitivo y de gobernabilidad de los territorios.

El desarrollo territorial de la provincia y la región solicita de una alta inversión para brindar la infraestructura pública que lo soporta, razón por la cual el modelo demanda para su funcionalidad de mecanismos que en primera instancia gestionen alternativas para financiar el avance de la infraestructura lo cual implica un mayor esfuerzo de fiscalización aunque se precisa que no es necesario la creación de nuevos impuestos sino que sea a través de los ya existentes para que se optimicen , casos como la contribución por la valorización del suelo pues se considera que el propietario ha tenido un enriquecimiento sin justa causa y su incremento es ajeno a sus propias inversiones y este no contribuye directamente sino por el contrario la realización de inversiones públicas le corresponden a todos los ciudadanos que viven en la jurisdicción territorial con sus impuestos, por las razones expuestas se deben introducir acciones que contrarresten este fenómeno y que afecten el ingreso potencial del propietario por la acción del gobierno y se institucionalice el cobro de la plusvalía y valorización por los derechos a mayor edificabilidad del índice básico establecido y valorización del suelo y su uso potencial de acuerdo con los POT; estos mecanismos que a pesar de existir en el país no está bien establecido por las entidades

territoriales y tampoco contribuyen directamente al desarrollo de proyectos de nivel provincial ; por tal razón se concluye que se debe aportar un porcentaje importante de estas contribuciones y con esos aportes la figura asociativa logre un adecuado desarrollo y la prestación colectiva de servicios a todos los municipios asociados.

La inversión se debe generar en elementos tangibles incorporados en un plan estratégico provincial que articule todos los instrumentos de planificación territorial y financiera y diferencie sus aportes con lógica dependencia de su categorización y sus ingresos corrientes.

Las fuentes de ingresos corrientes actuales que poseen los municipios se deben reorganizar, las cargas y beneficios deben ser estandarizados y los estatutos tributarios deben ser unificados en todos los municipios de la jurisdicción y articularlos con los instrumentos de planeación e instrumentos de presupuestación y de ordenamiento territorial.

El reto de financiación del desarrollo implica también un gran desafío para que utilicemos todo lo relacionado con la actualización del valor real de los predios pues, en conocido el atraso existente en el valor catastral de los predios en la región, con relación al valor comercial que considera su propietario y que cobra como precio de su bien; pero que no es el que se utiliza como la base de liquidación del impuesto predial ,situación que se visualiza y se percibe por la incapacidad del estado y sus organismos nacionales; lo cual de acuerdo con el nuevo marco normativo la figura asociativa creada ,deberá ser facultada para tal propósito y de acuerdo con su capacidad se constituya como gestor catastral y en asocio con operadores catastrales legalmente constituidos puedan desarrollar esta importante gestión de actualización.

La normatividad y reglamentación fiscal y financiera para que el modelo funcione de manera adecuada a través de los esquemas asociativos debe brindarle las siguientes acciones específicas e involucrar en su contenido mecanismos o instrumentos que establezcan el régimen de financiación y sus ingresos puedan provenir de los impuestos, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas o permisos que perciba en ejercicio de entidad administrativa y que le hayan sido otorgadas o reconocidas y adicionalmente con aportes tales como:

1. El porcentaje de los aportes de participación con destino a la financiación de las funciones del esquema asociativo que establezcan los acuerdos municipales, ordenanzas departamentales y leyes nacionales.
2. Establecer un porcentaje de participación de las sumas recaudadas por concepto de la contribución de valorización y/o plusvalía por la ejecución de obras o decisiones de carácter municipal y de carácter asociativo territorial.
3. El porcentaje del 15% del total del recaudo de impuesto predial de los inmuebles ubicados en la jurisdicción de la respectiva figura asociativa.
4. Las partidas presupuestales que se destinen para la asociatividad territorial, en los presupuestos nacionales, departamentales, distritales, municipales o de las entidades descentralizadas del orden nacional, departamental, distrital o municipal.
5. El producto del rendimiento de su patrimonio o de la enajenación de sus bienes.
6. El producto por el cobro de tarifas de los servicios públicos que de acuerdo

con la delegación de competencias municipales y departamentales sean prestados por la asociatividad y sus agencias especializadas.

7. Porcentaje de los Recursos provenientes del recaudo de peajes con destino a la financiación de proyectos viales.
8. Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos.
9. Las donaciones que reciban de entidades públicas o privadas.
10. La participación en los recursos del SGR para esquemas asociativos.
11. Los recursos por un porcentaje del 10% del impuesto a la construcción de nuevos proyectos dentro del territorio del esquema asociativo.
12. Los recursos por asunción de las competencias delegadas nacionales, departamentales y municipales.
13. Reglamentar los requisitos especiales para que la figura asociativa pueda acceder al crédito público.
14. Las donaciones que reciban de entidades públicas o privadas.

Se constituirá el Fondo de Desarrollo Región Metropolitana- FONDEREM y el fondo de desarrollo provincial **FONDEPROV** para que pueda tramitar proyectos que sean cofinanciados por el sistema general de regalías y sean ejecutados dentro de la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca o en las provincias administrativas y de planificación creadas por la ordenanza.



CAPÍTULO V

**SISTEMA DE MONITOREO,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y
EVALUACIÓN**

MO AIR

CAPÍTULO V

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

El establecimiento de este modelo de articulación e interacción promueve el mejoramiento continuo de la figura asociativa, razón por la cual ésta debe establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.

Por tal motivo en primera línea el control interno es clave para asegurar de manera razonable que al implementar cada una de las dimensiones operativas del modelo se cumplan con su propósito y con la adopción de cada una de las políticas que las estructuran., adicionalmente es fundamental que el modelo adopte los principios de buen gobierno, gestión pública orientada a resultados, oportunidad, transparencia, participación y servicio al ciudadano, y lucha contra la corrupción, que determinarán el ejercicio de las funciones asignadas a la figura asociativa en este modelo.

5.1. Control Interno

Es importante anotar que en este modelo de articulación el esquema de asociatividad se enmarca en las mismas normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización política administrativa del Estado en el territorio y tal como lo establece la ley 87 de 1993, el Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos en la mencionada ley. En tal sentido, el MECI es el Modelo que deberá seguir implementando los lineamientos para la operatividad de este modelo.

Como se ha establecido el objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).

Al desarrollar dentro del modelo una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua, es necesario tener claro que la estructura del Modelo Estándar de Control Interno contempla dos elementos fundamentales: el primero un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de defensa, Línea Estratégica, primera, segunda y tercera línea de defensa donde las responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están distribuidas en varias áreas y no se concentran en las oficinas de control interno; el segundo, una estructura de control compuesta por cinco

componentes, ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control información y comunicación y actividades de monitoreo.

5.2. Control Político

El modelo para su monitoreo, seguimiento, control y evaluación determina de un conjunto de responsables como de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz del cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los hechos provinciales y metropolitanos y el uso eficiente y eficaz de los recursos asignados para su funcionamiento de operatividad misional.

Este control político contemplado en la Carta Política, que inicialmente quedó en manos del Congreso de la república, ejercido exactamente por cada una de las cámaras sobre el Gobierno nacional. Pero ese control no solamente fue otorgado al legislativo, sino que también fue establecido para que las asambleas departamentales y concejos municipales lo aplicaran sobre los gobernadores y alcaldes, con ocasión de sus funciones y para este caso sobre el director ejecutivo de la figura asociativa generada en el modelo de articulación e interacción.

En efecto, este control que se realiza en nombre de la opinión pública tiene como presupuesto fundamental buscar un equilibrio de poderes, el cual difícilmente se logra debido a las características que rodean los distintos sistemas de gobierno. El control político sobre la dirección de la figura asociativa generada por la implantación del modelo se recomienda se efectúe a través de diferentes medios, citaciones y

debates, nombrando comisiones investigadoras, requiriendo informes al director ejecutivo, empleando la moción de censura. En este sistema, el control político requerido brindará los mecanismos de un debido proceso y puede llegar hasta la destitución al operar la llamada moción de censura

Adicional al control político sobre los hechos metropolitanos o los hechos provinciales la ley y la ordenanza deben establecer con claridad la manera de ejercer el control político sobre las competencias, funciones y las decisiones en la región metropolitana y de la provincia administrativa y de planificación a través de los concejos municipales y la Asamblea departamental. Por tal motivo se deben garantizar los diferentes instrumentos, que permite a los concejos, asamblea y legisladores ejercer sabiduría sobre el director de la Región Metropolitana y el director de la provincia administrativa y de planificación, sus órganos de dirección y administración y contribuir al mantenimiento del balance de poder entre las distintas ramas del poder público.

1. Citaciones e informes para indagar sobre las acciones y/u omisiones de los funcionarios de la Región Metropolitana o de la provincia administrativa y de planificación, así como para obtener información relevante de su gestión.
2. Moción de censura: Puede promoverse cuando el director de la Región Metropolitana o el director de las provincias administrativas y de planificación citados por los Concejos Municipales o la asamblea del departamento de Cundinamarca para responder un cuestionario y no concurre a la citación o no se excusa de manera justificada, o por acciones u omisiones que vayan en contra de la naturaleza y el desempeño del cargo. Dando lugar a la separación de su cargo cuando las corporaciones se ratifiquen en la decisión de acuerdo

con la reglamentación existente.

3. Audiencia Pública: La autoridad responsable podrá habilitar un espacio para que todos aquellos ciudadanos, habitantes y/o instituciones intermedias, que puedan verse afectadas por una decisión de la región metropolitana o provincia administrativa y de planificación y tengan un interés particular en el acto definitivo a sancionarse, expresen su opinión sobre el asunto objeto de la convocatoria.
4. Mecanismos virtuales: Para garantizar la efectiva participación de la comunidad en el proceso se propone que la entidad facilite los mecanismos virtuales de interacción mediante los cuales los ciudadanos puedan opinar sobre cada uno de los temas priorizados, estos mecanismos pueden ser como formularios virtuales, foros y videoconferencias donde sea posible acoger las consideraciones de la comunidad.

5.3. Sistema de Monitoreo, Seguimiento Evaluación y Control

Sin perjuicio de las funciones que se ejerzan a través del control interno, el control político, se podrá contralar y supervisar las labores por medio de los componentes de monitoreo, seguimiento, control y evaluación por parte de la comunidad y los actores involucrados en el modelo de articulación para lo cual definimos con claridad y que consiste cada componente para regulación de sistema y operatividad del modelo.

1. Monitoreo. Consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información correspondiente a la administración de los recursos asignados a la figura asociativa y su ejecución, por tal razón los directivos de la asociatividad son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información que se requiera, e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes.

2. Seguimiento. Consiste en la verificación periódica y selectiva en forma directa de la ejecución y resultados de las inversiones financiadas por las diferentes rentas establecidas en su presupuesto y patrimonio en términos de eficacia, eficiencia, calidad y cumplimiento de los requisitos legales y para tales efectos se practicarán las visitas de inspección y propiciarán espacios de participación ciudadana para el control social.

3. Control. Consiste en la adopción de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias por parte de la autoridad competente, para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz o sin el cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios y ejecutores de los recursos asignados a la figura asociativa. Se adelantarán las actuaciones administrativas previstas en el procedimiento que para el efecto se establece en la ley que regule la materia.

Los resultados de las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y control serán divulgados a la opinión pública en forma periódica.

4. Evaluación. Consiste en la valoración periódica y selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de las inversiones financiadas con asignaciones presupuestales a la figura asociativa en términos de eficacia, eficiencia, calidad y el impacto de las mismas.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la evaluación que les corresponde a los organismos de control determinados en la Constitución Política y las normas que regulan los esquemas asociativos.



CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

MO AIR

CAPÍTULO VI RECOMENDACIONES

Con el fin de que este modelo de articulación e interacción pueda implementarse satisfactoriamente, se debe adicionalmente tener en cuenta imprescindibles recomendaciones que conducen a profundizar y armonizar plenamente el proceso, pues sin duda alguna el fortalecimiento de la descentralización con figuras asociativas es la mejor opción a largo plazo para el progreso del Estado.

Los acontecimientos y nuevas realidades geográficas y socio-territoriales originarias del proceso de globalización que en este momento se advierte, solicitan figuras de organización territorial dúctiles que se puedan conformar fácilmente con base en la voluntad de los gobiernos y el apoyo político del estado, por tal razón se precisa que la asociatividad se presenta como el verdadero espacio para el desarrollo de estrategias conjuntas de manera práctica, pues este esquema emprende la planificación y gestión estratégica en ámbitos provinciales y regionales.

Estas recomendaciones finales contribuyen a aminorar los obstáculos para que exista una relación positiva entre cohesión social y desarrollo territorial y que se enmarca en primer lugar por la búsqueda de la consolidación del nivel regional y provincial, la coordinación entre niveles de gobierno como factor decisivo para el afianzamiento de los objetivos de la descentralización y la asunción de la planeación y gestión multiescalar.

Como quiera que la asociación de municipios de Sabana Centro Asocentro es una institución de carácter asociativo que representa a los once (11) municipios de la provincia de sabana centro en el departamento de Cundinamarca y se ha mantenido solida durante 30 años a pesar de la transiciones de los periodos de gobierno defendiendo y promoviendo la descentralización, la autonomía territorial , la democracia y la gobernabilidad provincial, ha venido trabajando de manera articulada con los gobiernos locales y departamentales se recomienda tomarla como la base primordial del modelo; por sus experiencias y buenas prácticas pues viene presentando iniciativas que se han venido construyendo colectivamente el fortalecimiento integral de la gestión de los gobiernos municipales y provinciales.

Una vez tomada en cuenta la recomendación inicial se presenta con insistencia la enumeración de las encomiendas que se deben desarrollar para impulsar el progreso autónomo y autosostenible y poder gestionar de manera conjunta alianzas estratégicas, cada una de estas recomendaciones las precisaremos posteriormente

- ✓ Generación de un marco normativo apropiado y debidamente reglamentado
- ✓ Generación de asistencia técnica para fortalecer la gobernanza multinivel
- ✓ Vinculación y armonización de la academia al desarrollo regional
- ✓ Creación del sistema de información y seguimiento de la asociatividad.
- ✓ Delegación de competencias al nivel regional y provincial.
- ✓ Adecuación y ajuste de la figura asociativa al MIPG.

6.1. Generación de un Marco Normativo apropiado y debidamente reglamentado

Para lograr una asociatividad territorial armónica, ordenada y funcional y dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional garantizando una gobernanza multinivel y responder a la productividad, competitividad y sostenibilidad, al desarrollo socioeconómico equilibrado de la región, y al goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, mejorando las condiciones de la calidad de vida y el desarrollo humano integral, se hace necesario el marco de la legalidad y brindar alternativas jurídicas como medios y no como fines del proceso asociativo, por tal motivo la construcción normativa de la asociatividad requiere concertar una visión de desarrollo territorial en el marco de una identidad común donde se establezca la viabilidad jurídica para la creación voluntaria del modelo de articulación entre las entidades territoriales como una necesidad técnica y de racionalidad administrativa, se recomienda entonces para este requerimiento tener en cuenta los ejes estructurantes presentados en el numeral 2.1.5. Requerimiento legal y normativo, de este documento y que sin duda sirven como insumo para iniciar una construcción colectiva de la ley y la ordenanza que nos lleve a constituir las reglas de juego para una Región Metropolitana y una provincia administrativa y de planificación e implementación del modelo.

6.2. Generación de asistencia técnica para fortalecer la institucionalidad y la Gobernanza Multinivel

Es de vital importancia generar un programa de asistencia técnica pues es la variable de mayor relevancia en el proceso de asociatividad donde se debe generar y

fortalecer la capacidad institucional, la gobernanza multinivel y el desarrollo de competencias con visión regional, buscando el desarrollo organizacional cuyo objetivo común es fortalecer la productividad, competitividad y sostenibilidad territorial, para promover el desarrollo social integral del territorio y mejorar las condiciones de vida de los pobladores.

Se hace indispensable dentro del programa desarrollar diferentes mecanismos de atención a las necesidades específicas en materia de gestión institucional asociativa, acompañados de instrumentos técnicos para mejorar la prestación de los servicios de su competencia por tal razón las instituciones estatales vinculadas al programa deben de realizar un acompañamiento y seguimiento y fomento permanente a las entidades asociadas en el desarrollo de estas actividades establecidas dentro del programa de apoyo para el fomento de esquemas asociativos territoriales, teniendo como objetivo principal la formación de líderes con el fin de sensibilizar y empoderar a la población del territorio en la cultura de esquemas asociativos.

El programa de asistencia técnica debe poseer como mínimo particularidades que determinen la oportunidad, pertenencia, eficacia, calidad conceptual logrando caracterizar las organizaciones comunitarias, ambientales, sociales o productivas para alcanzar a consolidar el fortalecimiento asociativo territorial y generar mecanismos que logren a través de la capacitación proporcionar conocimientos para la innovación y afrontar el cambio, con el asesoramiento se deben proporcionar ayudas para la toma de decisiones y el acompañamiento estará orientado a la solución a dificultades y debilidades territoriales.

El establecimiento del programa de asistencia técnica de acuerdo a la capacidad de gestión desarrollada permitirá elaborar líneas de acción que con las estrategias mencionadas se convierta en un valioso e ineludible instrumento que impuse los siguientes elementos:

- ✓ Un enfoque territorial donde se reconoce la diversidad y especificidades de cada zona, en especial la rural.
- ✓ Una estrategia de abajo hacia arriba-bottom up que promueve la participación, la apropiación y la corresponsabilidad de la población en la definición de su propio desarrollo.
- ✓ Un enfoque integrado que fomenta la coordinación de acciones en diversos campos.
- ✓ Unas alianzas horizontales que impulsan la colaboración, a nivel departamental a nivel nacional y transnacional entre diversos actores, permitiendo además la vinculación del sector privado y del tercer sector (ONG ´s), bajo esquemas alianzas estratégicas, para que de manera conjunta se desarrollen procesos con una finalidad común, pero manteniendo la independencia de los involucrados, ejemplo, modelo ('win-win relation').
- ✓ Una adecuada colaboración en redes que busca la interconexión interna y externa de las áreas locales para compartir y replicar experiencias; con un conjunto de actores y relaciones, que mediante una gestión efectiva en virtud del desarrollo de sistemas de innovación territorial, favorezcan la generación de capacidades integrales, implementando iniciativas de desarrollo territorial,

generando inclusión e integración productiva, permitiendo la consolidación institucional a nivel nacional, regional y municipal con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.

- ✓ Una innovación que conlleva el desarrollo de soluciones nuevas, específicas y diferentes, utilizando, entre otras cosas, recursos endógenos.

La ejecución de este programa maximizará la calidad de la implementación y el impacto del proceso de asociatividad territorial y su contenido técnico nos conduce a entender la gobernanza como un proceso de coordinación y conducción multiescalar, como el conjunto de procesos de regulación por medio de los cuales los distintos actores influyen en las acciones socio-culturales y en sus resultados, que implica la coexistencia de los actores comunitarios con otros actores situados a nivel local y en otros niveles territoriales o jurídicos y administrativos que requiere asumir la presencia de diversos actores que tienen grados de autonomía entre sí, por lo que constituyen diversos centros de toma de decisiones.

6.3. Vinculación y Armonización de la Academia al Desarrollo Regional

Sin lugar a dudas la investigación y la gestión del conocimiento son variables influyentes y determinantes en procesos de asociatividad y son claves para compartir aprendizaje e identificar buenas prácticas en materia de procesos de asociatividad territorial, por tal motivo es fundamental el rol de las instituciones universitarias de la

región en la formación del capital humano y el fortalecimiento del ordenamiento y la planificación territorial.

La importancia del carácter social de la vinculación universidad y sociedad es una condición impostergable de legitimación de la universidad con su entorno y el buen vivir de la comunidad, es precisamente en que sin desconocer la necesidad de una sólida formación técnica y científica de los estudiantes, el propósito de formación respalda en dar una formación integral que le permita a la institución intervenir en el entorno con las capacidades necesarias para generar dinámicas de cambio hacia una asociatividad territorial más justa y copartícipe.

Es necesario fortalecer la gestión de la vinculación de la universidad con la sociedad como estrategia para consolidar el desarrollo institucional por tal razón el ordenamiento legal debe sin prorroga alguna robustecer la construcción de soluciones conjuntas para los problemas de su entorno y del país en relación con los objetivos de la asociatividad territorial.

Este marco normativo debe generar acciones legales que promueva la cooperación para que el sector académico y su entorno social logren promover el desarrollo más coherente con las realidades del territorio y así conjuntamente la sociedad, la academia y el estado logren construir colectivamente tareas en bien del desarrollo territorial.

Que importante para la asociatividad territorial lograr la articulación de todos los actores involucrados en una visión conjunta para el mediano y largo plazo en temas como prestación efectiva de servicios públicos, estructurando los instrumentos de planeación local desde una perspectiva regional con una educación diversificada en su

oferta, potenciando la vocación productiva del territorio e impulsar redes de emprendimiento y economías de escala.

6.4. Creación del Sistema de Información y Seguimiento de la Asociatividad.

Es indispensable que la institucionalidad cree un sistema de información que sirva como soporte para el proceso de captación, transformación y comunicación de la información y se adapte a las necesidades puntuales de los esquemas de asociatividad territorial y resulte eficaz para facilitar la información precisa y eficiente en el consumo de recursos, de esta manera ayuda a las instituciones públicas a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante, para los procesos fundamentales y las particularidades de la organización asociativa .

Se hace necesario para la asociatividad territorial como nuevo esquema de ordenamiento producir y poseer información válida para la posterior toma de decisiones enmarcada en un ciclo de madurez continuo que posee las siguientes características en sus fases de creación:

- ✓ Investigación preliminar, identificación de fortalezas y amenazas;
- ✓ Definición de las necesidades y requerimientos,
- ✓ Diseño;
- ✓ Desarrollo y documentación del software;

- ✓ Pruebas;
- ✓ Implementación y mantenimiento;
- ✓ Identificación de debilidades y oportunidades.

El desarrollo de cada uno de los Componentes del Sistema permitirá tener pleno conocimiento que consiente validar las decisiones a través del monitoreo que consiste en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información correspondiente a la administración de los recursos entregados para sus competencias y su ejecución, con un seguimiento que permite la verificación periódica y selectiva en forma directa de la ejecución y resultados de las actividades desarrolladas con los recursos entregados en términos de eficacia, eficiencia, calidad y cumplimiento de los requisitos legales, con el control se permitirá la adopción de medidas preventivas y correctivas, y con la evaluación se desarrollará la valoración periódica y selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades generadas con los recursos, en términos de eficacia, eficiencia, calidad y el impacto de las mismas.

6.5. Delegación de Competencias al Nivel Regional y Provincial

El marco normativo que se establezca debe con absoluta claridad generar la asignación de las competencias a cada esquema asociativo para que le permita tomar las decisiones en lo relacionado con los temas objeto de su competencia, las cuales

tendrán superior jerarquía sobre las de los entes que se asocien y así mismo lograr reunir las competencias nacionales, departamentales y municipales que hoy se encuentran dispersas, con tratamiento parcial y sin curso de continuidad en la región, generando optimización de esfuerzos y de recursos , asumiendo e interviniendo exclusivamente en el campo de las competencias que solo le sean transferidas o delegadas por la nación, la gobernación y los municipios que la conforman las cuales pueden ser:

- ✓ Identificar, planear, priorizar y ejecutar las dinámicas y fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios
- ✓ Le corresponde la función de planificación sectorial y regional, programando y coordinando el desarrollo armónico, integrado y sustentable del territorio provincial, regional y de los municipios asociados promoviendo la celebración de convenios interadministrativos para la prestación de servicios públicos, cuando se evidencien razones técnicas y económicas.
- ✓ Determinar los parámetros que permitan definir la estructura ecológica principal de la jurisdicción territorial atendiendo por supuesto las disposiciones de mayor jerarquía en especial las contempladas en la ley 99 de 1993, determinando el suelo de protección ambiental, con sus linderos y sus condiciones mínimas de manejo y protección, definiendo las normas de ocupación del suelo rural y su vocación ambiental, agrícola, ganadera o productiva y actividades análogas.

- ✓ Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial, las directrices, orientaciones específicas y mecanismos para la integración, coordinación y articulación de los POTS de las entidades que conforman la figura asociativa , contribuyendo a la planificación de los procesos de ocupación futura del territorio teniendo en cuenta factores como sostenibilidad ambiental, socioculturales , vocación agroindustrial regional, turismo, prestación de servicios públicos, seguridad alimentaria, conectividad vial, conurbación y modelos de desarrollo urbano y vivienda.
- ✓ Tomar las decisiones territoriales que articulen el ordenamiento logístico regional para la movilidad y transporte de carga y pasajeros con el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial regional, puertos y aeropuertos con un adecuado seguimiento a la articulación de los proyectos y planes de movilidad urbana con los POTS y sus instrumentos intermedios o complementarios de planeación.
- ✓ Desarrollar la planeación integral del recurso hídrico que involucra la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, transporte y distribución del agua potable y tratamiento de aguas residuales antes de vertimientos a las cuencas; articulando integralmente el sector con el rol transversal que posee la Corporación Autónoma Regional (CAR), encargada de elaborar y gestionar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA).
- ✓ Definir el esquema que optimice la prevención, minimización, separación, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, en los municipios, distrito, provincias y

región a través de programas de inclusión de recicladores de oficio, estrategias de educación a la población, la ubicación de los centros de clasificación y aprovechamiento y demás elementos necesarios para avanzar en la implementación de una política de desarrollo sostenible.

- ✓ Dar los lineamientos para que los entes territoriales tomen decisiones que promuevan la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en sus territorios que permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social y que garanticen el acceso de estos desarrollos a los servicios públicos, ejecutando conjuntamente los planes, programas, proyectos, obras de infraestructura de interés social, económico, tecnológico, ambiental, físicos, cultural, territorial, de la región.
- ✓ Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los entes territoriales que la integran, y si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su prestación de manera subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que la figura asociativa sea un prestador oficial o autorizado.
- ✓ Promover la implementación del catastro multipropósito en la figura asociativa que servirá para contar regionalmente con información precisa y actualizada del territorio para el diseño de mejores políticas públicas y aumentar el acceso y derecho a la propiedad de la población.

6.6. Adecuación y Ajuste de la Figura Asociativa al MIPG.

Como quiera que el modelo de articulación e interacción genera una figura asociativa de carácter público con el objetivo de dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos se hace necesario que dentro del marco de la legalidad y la integridad esta entidad figura asociativa además de los informes de control debe desarrollar un plan de actualización bajo los parámetros del MIPG con las adecuaciones y ajustes necesarios para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de su gestión .

Tomando como referencia la Medición del Desempeño Institucional, el modelo de articulación e interacción es autónoma en definir el esquema que mejor considere para adelantar dichas adecuaciones y ajustes, pero la recomendación pertinente para este fin y para definir la ruta de adecuación es acoplarse al alcance, a las herramientas metodológicas y los atributos de calidad de cada una de las dimensiones operativas que hacen parte de MIPG y sus políticas.

Las acciones de intervención y decisión llevarán a determinar los recursos humanos, financieros, técnicos, de infraestructura, que requiera el modelo de articulación, así como definir responsables de su ejecución y a partir de ello, tomar la decisión de cuales acciones son las que se deben priorizar para obtener el resultado esperado de manera clara y sean comprensibles para quienes deben llevarlas a cabo.

BIBLIOGRAFIA

Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2011). Ciudades e Igualdad de Género. Boletín No. 6, noviembre de 2011. Disponible en: http://portalterritorial.gov.co/apc-afiles/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/boletin_noviembre_2011_2.pdf

Aguilar, A. y Lima, F. ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2009. Recuperado de: www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm

Aguilar, L.F. (1996). El estudio de las políticas públicas. México D.F.: Ed. M.A.P.

Aguilar Luis F. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El enfoque de políticas públicas. 2º. Foro Internacional Movilización por la primera infancia. Bogotá junio de 2005.

Álvarez Díaz, A.E. (1992). Análisis de políticas públicas. Caracas: CLAD.

Alfaro, Raquel (2009), Fomento de la eficiencia de las empresas estatales de agua potable y saneamiento, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Serie Recursos Naturales e Infraestructura N.º 141, LC/L.3010-P, Santiago de Chile (disponible en Internet en: <http://www.eclac.org>).

Banco Mundial (2017). *Informe sobre el desarrollo mundial. La gobernanza y las leyes*. Cuadernillo del Panorama General. Washington DC, Estados Unidos: Banco Mundial

Barnes, C. (1998). Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión de las personas con discapacidad en la sociedad occidental. En Barton, L. & Torres, J. (eds.), *Discapacidad y sociedad*. Madrid: Morata.

Barraza Morelle. C. y Gómez López. C. (2009). La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La Despenalización parcial del Aborto en Colombia. Un derecho para las mujeres. Bogotá. Disponible en: <http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/IMG/pdf/Despenalizacion-3.pdf>

Bayón, F. (1999). 50 años del Turismo Español. Un análisis histórico y estructural. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces S.A.

Bertranou F. Economía informal, trabajadores independientes y cobertura de la seguridad social en Argentina, Chile y Uruguay. Santiago de Chile: Oficina Internacional del Trabajo; 2007, p. 20.

Bertrán, M. (2017). Domesticar la globalización: alimentación y cultura en la urbanización de una zona rural en México. *Antropología*. Elsevier., 51, 2, 123–130., 51, 2, 123–130. Booth S & Coveney

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (2010), Agua potable, saneamiento y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina y el Caribe, Iniciativa de Agua y Saneamiento (disponible en Internet en: <http://www.iadb.org>).

Benavides, G.F. (2015). “Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano”. *Suma de Negocios*, 6(13), 66-73. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.005>

Benavides, G.F. y Venegas, S.P. (2013). “Una aproximación a la competitividad, las tendencias y la política pública en el turismo colombiano”. *Revista de Análisis Turístico*, 16, 1-12.

Bocanegra, H. (Enero-junio, 2006). Globalización y política pública educativa en Colombia. *Diálogos de Saberes* (24), 33-50

Bohoslavsky, Juan Pablo (2011), Fomento de la eficiencia en prestadores sanitarios estatales: la nueva empresa estatal abierta, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Serie Documentos de Proyectos, LC/W.381, Santiago de Chile (disponible en Internet: <http://www.eclac.org>)

Cámara de Comercio de Bogotá; Universidad del Rosario; Gobernación de Cundinamarca; Alcaldía de Bogotá. (2016). *Ocupación económica y planificación territorial de Bogotá y la Región vida ampliada de Cundinamarca. Bases para un modelo de ocupación económica territorial (MOET)*. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.

Campos, N. A. (2016). *Sistemas alimentarios, semillas y complejidad. Una mirada al sistema alimentario colombiano*. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Campoy, I. (2004/2005). Una aproximación a las nuevas líneas de fundamentación de los derechos de las personas con discapacidad. *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, nº 8, 2004/2005, ISSN 1575-7382

Canales, M. U. (2017). *Estado, Mercado, Academia... Y Comunidad. Una Cuádruple Hélice Para El Desarrollo Integral Y La Innovación*. Madrid, España: Universidad Pontificia De Comillas De Madrid- Facultad De Ciencias Humanas Y Sociales.

Cátala, J.P. (2001). Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico. *Revista Instituciones y Desarrollo* (10)

CEPAL. (15 de Septiembre de 2020). <https://www.cepal.org/>. Obtenido de <https://www.cepal.org/es/comunicados/recuperar-la-confianza-ciudadanos-instituciones-publicas-es-fundamental-retomar-senda>

CIAT. (2018). *Productividad de la tierra y rendimiento del sector agropecuario medido a través de los indicadores de crecimiento verde en el marco de la Misión de Crecimiento Verde en Colombia*. Bogotá D.C.

Cobo, EA, Sandoval, C, & Alvarado, YM. (2013). Registro para la localización y caracterización de la discapacidad, en relación a los marcos de referencia. *Hacia promoc. Salud.* 2013; 18(2):41-54.

Congreso de la República. (2013). Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Bogotá: Autor.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2002). Seminario 'Perspectivas Innovativas en Política Social'. Santiago de Chile: CEPAL.

Corte Constitucional . (06 de Febrero de 2013). Sentencia C-054/13. *Sentencia C-054/13*. Bogotá:

Corte Constitucional. (31 de Mayo de 2000). Sentencia C-643/00. *Sentencia C-643/00*. Bogotá.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos, serie Mujer y desarrollo, N°16 (LC/L.957):

Cunill-Grau, N. (2014). La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales. Un acercamiento analítico conceptual. *Gestión y Política Pública*. Vol. 23 (1), pp. 5-46

David Gómez-Álvarez, Robin Rajack, Eduardo López-Moreno, Gabriel Lanfranchi. *Gobernanza Metropolitana: El gobierno de las metrópolis para el desarrollo urbano sostenible*

D'Elia Yolanda y Maingón Thais. (2004). "La equidad en el Desarrollo Humano: Estudio conceptual desde el enfoque de igualdad y diversidad". En: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Venezuela

DEPP-DNP. (2010). Guía metodológica para mejorar el proceso de formulación de políticas públicas en Colombia. Documento elaborado por economía urbana. Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación-DNP. (2015). El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Misión para la Transformación del Campo. Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación. (2012). Evaluación institucional de la política nacional de discapacidad complementada con una evaluación de resultados cualitativos sobre la población con discapacidad. Bogotá:

DNP. (2014). Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas. Dirección de seguimiento y evaluación a políticas públicas, Bogotá.

DNP. (2016). Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia. Estudio de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas. Bogotá.

DNP. (2016). Política Nacional para la gestión integral de residuos sólidos. Conpes 3874. Bogotá.

Domínguez Blanco, María Elvia. (2004). "Equidad de género y diversidad en la educación colombiana". Disponible en:

<http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205/2481>

Dueñas Ocampo, S. P.-O. (2014). El concepto de consumo socialmente responsable y su medición. Una revisión de la literatura. Estudios Gerenciales.

Durall J & García S. (2015). El Derecho Humano a la Alimentación y al Agua. Madrid

Eroles, C. (2009). Naturaleza de la discriminación contra las personas con discapacidad. En C. Eroles & H. Fiamberti, Los derechos de las personas con discapacidad. Análisis de las convenciones internacionales y de la legislación vigente que las garantiza. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Felipe Barrera-Osorio, Darío Maldonado y Catherine Rodríguez, Calidad de la educación básica y media en Colombia: diagnóstico y propuestas, Bogotá: Universidad de los Andes (CEDE), 2012.

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. (2010). Estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia: Programa integral contra violencias de género. Bogotá.

Gamboa, L. B. (2009). Ponencia sobre el libro de Boaventura de Souza "Democracia y participación. El ejemplo del presupuesto participativo de Porto Alegre". *Derecho y Realidad*, 20.

Gobierno de Colombia. (25 de noviembre de 2013). Documento CONPES 3784 de 2013. Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Bogotá, Colombia. Obtenido de equidadmujer.gov.co:

<http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/Conpes-3784-Mujeres-victima-conflicto-armado.pdf>

Georghiuo, L., Harper, J. C., Keenan, M., Miles, I., & Popper, R. (2011). Manual de Prospectiva tecnológica. Conceptos y práctica. México: Flacso México.

Gómez-Benito C & Lozano C. (2014). ¿Consumidores o ciudadanos ? Reflexiones sobre el concepto de ciudadanía alimentaria. La comida invisible. Representaciones sociales de los sistemas alimentarios: causas, consecuencias y transformaciones. (U. N. UNED, Ed.) 77 - 90.

Gutiérrez, J. F. (2007). Gestión y economía del deporte. Medellín: Funámbulos Editores.

Guzmán A. Análisis comparativo de modelos de aseguramiento público y propuesta de un sistema solidario de seguridad social en salud. Colombia: Forosalud y Observatorio del Derecho a la Salud; 2003.

Hernández-Cruz, O. (2014). Los Enfoques de la Intersectorialidad de las Políticas Públicas. Disponible en: <http://odam-ca.org/recursos/insumos/biblioteca/enfoques-intersectorialidad-politicas.pdf>

Hilarión Vegas Meléndez, «Políticas públicas y gobernanza: Articulación para una gestión pública local autónoma», Polis [En línea], 48 | 2017, Publicado el 31 enero 2018

Hubert M. Blalock, Estadística social, México: FCE, 1983.

Juan Pablo Calle, octubre 06, 2020 Cómo elaborar una política de gestión de riesgos

López, A., Quintero, L. (2014). Incidencias de las Políticas Públicas Educativas en la calidad de educación en Santiago de Cali 1991-2013. (Tesis de grado). Universidad del Valle. Santiago de Cali.

Navas Patrón, Álvaro, (2003), “El pequeño municipio: actor principal en el proceso de integración, movilización política y penetración del territorio”, en: Problemática de los pequeños municipios en Colombia. ¿Supresión o reforma? Universidad Externado de Colombia y Fundación Konrad Adenauer. Bogotá

Mandado, A., & Díaz, P. (septiembre - diciembre de 2004). Deporte Y Educación: Pautas para hacer compatible el rendimiento y el desarrollo integral de los jóvenes deportistas. Educación y Deporte (335), 35-44.

Manifiesto H hacia la consolidación de un sistema nacional de la recreación desde la participación ciudadana. (noviembre de 2008). 10 camping Taller Nacional De Recreación. Pereira: Corpasar.

Mény, & Thoenig. (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ariel S.A.

Michael Hantke-Domas Andrei Jouravlev Lineamientos de política pública para el sector de agua potable y saneamiento Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de Planeación –DNP-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-.. (2013). Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 2013- 2023. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021. Bogotá: Autor

Ministerio de Salud. Dirección General de Desarrollo de la Prestación de Servicios de Salud. Mauricio Calderón Ortiz. Hacia una política de desarrollo hospitalario integral. La Crisis: Problemas y Soluciones. Presentación Ponencia Doctora Sara Ordóñez Noriega. Bogotá, agosto 2000.

Ministerio de Salud. Dirección General de Desarrollo de la Prestación de Servicios de Salud. Política de prestación de servicios – Versión 3. Programa de Apoyo a la Reforma de Salud. Abril 2002.

Ordóñez-Matamoros. (2013). Manual de análisis y diseño de políticas públicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Organización de Naciones Unidas (2013). Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año. Disponible en: <http://www.un.org/es/ga/68/meetings/disability/>

OPS - Programa de organización y gestión de sistemas y servicios de salud. Serie Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud No. 3. Marisol Concha y Ximena Aguilera. Lineamientos metodológicos para la realización de análisis funcionales de las redes de servicios de salud.

Ospino C. Colombia. En Olaf J. Sector informal y políticas públicas en América Latina. Río de Janeiro: Fundacao Konrad Adenauer; 2010, pp. 59-66. 12.

Peña, D. (2009). “Los instrumentos legales de la política turística como base para un turismo responsable y sostenible en Latinoamérica: Análisis para Colombia, Perú, México y Honduras”. Revista de Análisis Turístico, 8, 33-43.

Pollack M, Judsiman C. El sector informal urbano desde la perspectiva de género. El caso de México. Ed Comisión económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 1997; p. 71.

Procuraduría General de la Nación. (2006). El Derecho a la Educación: la Educación en la Perspectiva de los Derechos Humanos. (1a ed.) Bogotá, D.C., Colombia.

Procuraduría General de la Nación. (2010). Informe “La efectividad de los derechos de las mujeres, una deuda de justicia”. Bogotá. Disponible en http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2010/noticias_607.htm

RAPE-FAO. (2017). Diagnóstico o análisis situacional de la seguridad alimentaria y nutricional. Bogotá: FAO.

Rebato Ochoa, E. (2009). Las “nuevas” culturas alimentarias: globalización vs. Etnicidad.

Rivera, N., & Alfaro, M. (2018). El Desarrollo Territorial A Partir De Un Modelo De Cuádruple Hélice: Universidad gobierno-Empresa-Comunidad. DESARROLLO Y TERRITORIO, 86

Serebrisky, T. (2014). Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo. BID. Recuperado de

<https://publications.iadb.org/es/publicacion/16832/infraestructurasostenible-para-la-competitividad-y-el-crecimiento-inclusivo>

Tomasevski, K. (2004). El disfrute del derecho a la educación en Colombia: Informe alterno presentado a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Comisión Colombiana de Juristas.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA. (2017). Política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. Bogotá

UNESCO. (21 de noviembre de 1978). Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. París, Francia. Obtenido de <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216489s.pdf>

UNESCO. (17 de noviembre de 2015). Carta internacional revisada de la educación física, la actividad física y el deporte. París, Francia. Obtenido de http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html